



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

25ª REUNION — 8ª SESION ORDINARIA — JULIO 31 y AGOSTO 1º de 1991

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,  
Augusto José María Alasino, Jorge Reinaldo Vanossi  
y Rodolfo Miguel Parente

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,  
Alberto Edgardo Balestrini y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctores Juan Estrada y Enrique Horacio Pinedo  
y señor Juan Carlos Stavale

### DIPUTADOS PRESENTES:

AIMÉ, Felipe Teófilo  
AMO, Carlos  
UADO, Jorge Rubén  
NDEZ, Jorge Alfredo  
SINO, Augusto José María  
AMONTE, Alberto Gustavo  
NDE, Oscar Eduardo  
SSANDRO, Julio Darío  
OGARAY, Alvaro Carlos  
ERACH, Miguel Angel  
AREZ, Carlos Alberto  
AREZ, Héctor Claudio  
AREZ ECHAGUE, Raúl Angel  
AREZ GUERRERO, Osvaldo  
ELO, José María  
AMOUNI, Alberto  
ANDA, Saturnino Danili  
NIENAGA, Normando  
ANARAS, Herallio Andrés  
MAGNAGUE, Juan Fernando  
LA, Mario Efraín  
LA GALLO, Exequiel José B.  
LA, Juan Carlos  
RAN, Julio  
LINI, Raúl Eduardo  
ANDA, Mariano Pedro  
ESTRINI, Miguel Alberto  
L LIMA, Guillermo Alberto  
BEITO, Juan Carlos  
SANI, Angel Marcelo  
LAC, Juan Pablo  
TRAN, Carlos Roberto  
HONGARAY, Antonio Tomás  
ICUA, Jorge  
GIOTTI, Victorio Osvaldo  
NCO, Oscar Alberto  
DA, Osvaldo  
DIN CAROSIO, Hugo Antonio  
ARD, Noel Eugenio  
ST, Diego Francisco  
TOS, Rolando Roque  
OK, Mario Carlos  
NATI, Luis Pedro

A-03-16  
A-22-01  
B-01-03  
B-18-02  
A-08-01  
A-02-03  
B-01-14  
A-01-04  
A-02-03  
B-14-01  
B-02-04  
B-14-01  
A-01-01  
A-16-02  
A-21-06  
A-01-09  
A-21-01  
A-17-01  
A-04-02  
A-13-02  
A-22-02  
A-24-19  
B-06-01  
A-04-01  
B-13-02  
A-14-02  
B-04-01  
A-01-01  
A-18-01  
B-01-02  
B-01-02  
B-06-01  
B-11-02  
B-23-02  
B-01-02  
B-01-01  
B-01-01  
B-13-01  
B-03-02  
A-03-02  
A-21-01  
B-01-02  
B-01-01

CABRERA, Gerardo  
CAFIERO, Juan Pablo  
CALLEJA, Ovidio Amilcar  
CAMAÑO, Graciela  
CAMERA, Roberto Hugo  
CANTOR, Rubén  
CAPPELLERI, Pascual  
CAPUTO, Dante Mario  
CARDO, Manuel  
CARRERAS, Porfirio Mario  
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus  
CARRIZO, Victor Eduardo  
CASARI de ALARCIA, María Leonor  
CASAS, David Jorge  
CASSIA, Antonio  
CASTILLO, José Luis  
CASTILLO, Oscar Aníbal  
CAVALLARI, Juan José  
CAVIGLIA, Franco Agustín  
CLERICI, Federico  
CORCHUELO BLASCO, José Manuel  
CORTESE, Lorenzo Juan  
COSSOS PÉREZ, Juan Nicolás  
CRAMARO, Hugo Arnaldo  
CRUCHAGA, Melchor René  
CRUZ, Roberto Aníbal  
CRUZ, Washington Jesús  
CURI, Oscar Horacio  
CURTO, Hugo Omar  
DALESIO de VIOLA, Adelina Inés  
DALMAU, Héctor Horacio  
D'AMBROSIO, Angel Mario  
DE MARTINO, Victor Amador  
DI CAPRIO, Marcos Antonio  
DOMÍNGUEZ, Jorge Manuel R.  
DOMÍNGUEZ, Roberto Rubén  
DUMÓN, José Gabriel  
DURASONA y VEDIA, Francisco de  
DUSSOL, Ramón Adolfo  
ELÍAS, Angel Mario  
ENDEIZA, Eduardo Aníbal  
ESPECHE, Alberto Luis  
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo Emilio  
FELIGUERAS, Ricardo Ernesto  
FERNÁNDEZ, Aníbal

B-21-01  
B-01-04  
B-21-01  
B-01-01  
A-19-17  
A-06-02  
A-01-02  
B-02-02  
A-07-21  
B-21-02  
A-04-02  
A-20-01  
B-04-01  
A-10-01  
A-13-01  
A-01-01  
B-03-02  
B-01-02  
A-01-04  
B-01-03  
B-07-01  
A-04-02  
B-22-02  
B-22-01  
A-01-03  
A-01-01  
B-10-01  
A-13-02  
A-01-01  
B-02-03  
A-14-01  
A-21-02  
B-01-02  
A-01-02  
A-02-01  
B-10-01  
A-01-02  
A-01-03  
B-06-02  
B-21-02  
B-18-01  
E-17-02  
A-21-02  
A-11-02  
B-03-02



Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley en revisión por el que se dispone el traslado de los restos mortales de don Juan Bautista Alberdi a la ciudad de San Miguel de Tucumán (20-S.-91). Se sanciona definitivamente (ley 23.965). (Pág. 1993.)

Consideración de un proyecto de declaración, sustitutivo del proyecto de resolución presentado por el señor diputado Cappelleri (1.682-D.-91), por el que se solicita al Poder Ejecutivo la revisión del decreto 1.334/91, que sustituyó al texto vigente del artículo 39 del decreto 199/88, reglamentario de la ley 14.250, de convenciones colectivas de trabajo. Se sanciona. (Pág. 1994.)

Consideración de las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se modifican las modalidades de financiamiento del Régimen Nacional de Previsión y del Fondo Nacional de la Vivienda y se derogan los regímenes diferenciales de jubilaciones y pensiones (13-P.E.-91). Se sanciona definitivamente (ley 23.966). (Pág. 1995.)

Moción de orden del señor diputado Manzano de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de formular proposiciones con referencia a los proyectos de ley del señor diputado Matzkin y otros por los que se modifican el régimen del impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural (1.966-D.-91) y la ley 11.683, de procedimiento impositivo (1.967-D.-91). Se aprueba. (Pág. 2045.)

Mociones del señor diputado Manzano de que se dé entrada a los proyectos a los que se refiere el número 27 de este sumario y de que se acuerde preferencia para el tratamiento de ambas iniciativas. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 2051.)

Consideración de los dictámenes de mayoría y minoría de las comisiones de Finanzas, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se consolidan en el Estado nacional obligaciones de pagar sumas de dinero devengadas hasta el 19 de abril de 1991 (14-P.E.-91). (Pág. 2051.)

#### Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 2064.)

B. Asuntos entrados:

I. Mensajes del Poder Ejecutivo. (Pág. 2082.)

II. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2082.)

III. Dictámenes observados. (Pág. 2084.)

IV. Comunicaciones de señores diputados. (Página 2084.)

V. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2084.)

VI. Peticiones particulares. (Pág. 2088.)

VII. Proyectos de ley. (Pág. 2090.)

VIII. Proyectos de resolución. (Pág. 2092.)

IX. Proyectos de declaración. (Pág. 2096.)

X. Licencias. (Pág. 2098.)

C. Inserciones. (Pág. 2100.)

D. Asistencia a las sesiones de la Honorable Cámara (meses de septiembre, octubre y noviembre de 1990). (Pág. 2104.)

—En Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de julio de 1991, a la hora 17 y 32:

## 1

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pierri). — Con la presencia de 148 señores diputados queda abierta la sesión.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de La Rioja don Carlos Alberto Romero a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado don Carlos Alberto Romero procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

## 2

### DIARIO DE SESIONES

Sr. Presidente (Pierri). — Conforme a lo dispuesto en el artículo 149 del reglamento corresponde considerar, a fin de que los señores diputados indiquen los errores que pudieran contener, los diarios de sesiones de cuya nómina se dará lectura por Secretaría.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Los diarios de sesiones pendientes de aprobación son los que corresponden a las siguientes reuniones:

—Reunión 42ª (continuación de la 11ª sesión ordinaria, septiembre 29 de 1990).

—Reunión 43ª (sesión preparatoria, noviembre 29 de 1990).

Sr. Presidente (Pierri). — Si no se formulan observaciones, se tendrán por aprobados los diarios de sesiones en consideración, y se autenticarán y archivarán.

—No se formulan observaciones.

Sr. Presidente (Pierri). — Se procederá en consecuencia.

Dr. Presidente (Alasino). — Queda sancionado el proyecto de declaración<sup>1</sup>.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26

# FINANCIAMIENTO DEL RÉGIMEN NACIONAL DE PREVISIÓN Y DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA Y DEROGACIÓN DE LOS RÉGIMENES DIFERENCIALES DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Dr. Presidente (Alasino). — Corresponde considerar las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera enviado en revisión por el que se modifica las modalidades de financiamiento del Régimen Nacional de Previsión y del Fondo Nacional de la Vivienda y se derogan los regímenes diferenciales de jubilaciones y pensiones (expediente 13.991).

Buenos Aires, 25 de julio de 1991.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley de modificación sobre financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social, modificación al sistema tributario, modificación a la ley del FONAVI, derogación de regímenes de jubilaciones especiales, impuesto a los bienes afectados a la actividad productiva y destino de los recursos de privatizaciones, y ha tenido a bien aprobarlo en la siguiente forma:

Senado y Cámara de Diputados, etc

## TÍTULO I

Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social

Artículo 1º — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º de la ley 18.037, texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, por el siguiente:

El aporte personal del afiliado será del diez por ciento (10 %) y la contribución del empleador del dieciséis por ciento (16 %), en ambos casos tomando como base la remuneración determinada en conformidad a las normas de la presente ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar y/o disminuir los aportes establecidos en el presente artículo en hasta un (1) punto del aporte del afiliado y en hasta dos (2) puntos el aporte del empleador.

Art. 2º — Sustitúyese el enunciado del primer párrafo del artículo 10 de la ley 18.038, texto ordenado en 1980 y sus modificaciones, por el siguiente:

Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Párrafo 2064).

El aporte de los afiliados será equivalente al veintiséis por ciento (26 %) mensual de los montos asignados a las siguientes categorías, el que se incrementará con el que corresponda de acuerdo con la ley 19.032 y sus modificaciones.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar y/o disminuir el aporte establecido en el presente artículo, en hasta tres (3) puntos porcentuales.

Art. 3º — A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, los montos o porcentajes de las retenciones fijadas por o en virtud de convenios de corresponsabilidad gremial con destino al Fondo Nacional de la Vivienda quedan transferidos al Régimen Nacional de Previsión Social.

Art. 4º — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación. Serán recursos del Régimen Nacional de Previsión Social todos los fondos que se perciban a partir de dicha fecha por los conceptos a que se refieren los artículos anteriores con independencia de la fecha del devengamiento. Transfírense igualmente al Régimen Nacional de Previsión Social los créditos derivados de las contribuciones del sector privado al régimen de la ley 21.581 (FONAVI) que se perciban con posterioridad a la fecha indicada.

## TÍTULO II

### Afectación del IVA al Régimen Nacional de Previsión Social

Art. 5º — Modifícase la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones, de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:

Artículo 24: La alícuota del impuesto será del dieciocho por ciento (18 %).

Esta alícuota se incrementará al veintisiete por ciento (27 %) para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 5 bis del inciso e) del artículo 3º cuando la venta o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o en su caso terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscripto o como responsable no inscripto.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para reducir con carácter general las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores en hasta seis (6) puntos porcentuales conforme a las previsiones de la ley 23.548.

2. Incorpórase a continuación del artículo 49 el siguiente:

Artículo...: El producido del impuesto establecido en la presente ley se destinará:

a) El once por ciento (11 %) al Régimen Nacional de Previsión Social, en las siguientes condiciones:

1. El noventa por ciento (90 %) para el financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social, que se depositará en la cuenta de la Subsecretaría de Seguridad Social.
2. El diez por ciento (10 %) para ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a un prorrateador formado en función de la cantidad de beneficiarios de las cajas de previsión o de seguridad social de cada una de esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los importes que surjan de dicho prorrateo serán girados directamente y en forma diaria a las respectivas cajas con afectación específica a los regímenes previsionales existentes. El prorrateo será efectuado por la mencionada Subsecretaría sobre la base de la información que le suministre la Comisión Federal de Impuestos. Hasta el 1º de julio de 1992, el cincuenta por ciento (50 %) del producido por este punto se destinará al Tesoro nacional.

Cuando existan cajas de previsión o de seguridad social en jurisdicciones municipales de las provincias, el importe a distribuir a las mismas se determinará en función a su número total de beneficiarios existentes al 31 de mayo de 1991, en relación con el total de beneficiarios de los regímenes previsionales, nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El noventa por ciento (90 %) de dicho importe se deducirá del monto a distribuir de conformidad al punto 1 y el diez por ciento (10 %) del determinado de acuerdo con el punto 2. Los importes que surjan de esta distribución serán girados a las jurisdicciones provinciales, las que deberán distribuirlos en forma automática y quincenal a las respectivas cajas municipales;

- b) El ochenta y nueve por ciento (89 %) se distribuirá de conformidad al régimen establecido por la ley 23.548.

Art. 6º — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación.

### TÍTULO III

#### Impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural

Art. 7º — Apruébase como impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural el siguiente texto:

#### CAPÍTULO I

##### Combustibles líquidos

Artículo 1º: Establécese en todo el territorio de la Nación, de manera que incida en una sola de las

etapas de su circulación, un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de los productos de origen nacional o importado, que se detallan en el artículo 4º del presente capítulo.

Quedan también sujetos al impuesto los productos consumidos por el responsable, excepto los utilizados exclusivamente como combustibles en los procesos de producción y/o elaboración de hidrocarburos y sus derivados.

Artículo 2º: El hecho imponible se perfecciona:

- a) Para los productos importados con el despacho a plaza debiendo el impuesto ser liquidado y abonado juntamente con los derechos de importación y el impuesto al valor agregado, mediante retención en la fuente a practicar por la Administración Nacional de Aduanas;
- b) Para los productos de origen nacional con la entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente, el que fuera anterior;
- c) Para los productos consumidos dentro de las refinерías o de las plantas de producción o elaboración, no comprendidos en la excepción del artículo 1º, con el retiro de los productos para el consumo;
- d) En el momento de la verificación de la tenencia de los productos cuando se trate de los responsables a que se refiere el último párrafo del artículo 3º de este capítulo.

También constituye un hecho imponible autónomo cualquier diferencia de inventario que determine la Dirección General Impositiva y no se encuentre justificada por tolerancias.

Artículo 3º: Son sujetos pasivos del impuesto:

- a) En el caso de las importaciones quienes lo realicen;
- b) Las empresas que refinan, elaboren o transporten los productos que se detallan en el artículo 4º.

Los transportistas, depositarios, poseedores o tenedores de productos gravados que no cuenten con la documentación que acredite que tales productos han tributado el impuesto de esta ley o están comprendidos en las exenciones del artículo 7º, serán responsables por el impuesto sobre tales productos sin perjuicio de las sanciones que legalmente correspondan ni de la responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en la transgresión.

Artículo 4º: Los productos gravados a que se refiere el artículo 1º y el monto del impuesto a liquidar por unidad de medida son los siguientes:

	Por litro	Por mlt
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON .....	2.618	
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON .....	3.494	

	Por litro	Por kilo
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON .....	2.900	
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON .....	3.255	
e) Querosén .....	134	
f) Gas oil .....	614	
g) Diésel oil .....	934	
h) Fuel oil .....		268
i) Aeronafta .....	67	
j) Solvente .....	2.668	
k) Aguarrás .....	2.668	

El Poder Ejecutivo determinará, a los fines de la presente ley, las características técnicas de los productos gravados no pudiendo dar efecto retroactivo a dicha caracterización.

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando un monto de gravamen similar al del producto gravado que puede ser sustituido. En las alconaftas el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta.

Artículo 5º: Facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25 %) y a disminuir hasta en un diez por ciento (10 %) los montos indicados en el artículo anterior cuando así lo aconseje el desarrollo de la política económica. Esta facultad podrá ser ejercida con carácter general o regional para todos o algunos de los productos gravados.

Artículo 6º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º, facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a modificar los montos de impuesto a liquidar por unidad de medida que se establecen en el artículo 4º, cuando la relación porcentual entre tales montos y los precios al público experimente un deterioro superior al diez por ciento (10 %) comparado con idéntica relación porcentual durante la primera semana de vigencia de la presente ley, en la medida necesaria para recuperar esta misma relación porcentual.

Artículo 7º: Quedan exentas de impuesto las transferencias de productos gravados cuando:

- Se destinen a sujetos pasivos de los mismos en el artículo 3º inciso b) del presente capítulo;
- Tengan como destino la exportación;
- Conforme las previsiones del Código Aduanero, sección VI, capítulo V, estén destinadas a rancho de embarcaciones de ultramar o a aeronaves de vuelos internacionales.

Tratándose de los solventes alifáticos y aromáticos y el aguarrás que tengan como destino el uso

como insumo en la elaboración de productos no gravados por este impuesto, con incidencia significativa en el precio final de estos últimos, se procederá a la devolución del impuesto creado por esta ley. Dicha devolución la efectuará la Dirección General Impositiva a los sujetos adquirentes que sean directamente responsables del uso de dichos insumos contra la presentación de la documentación que exija dicha repartición. El Poder Ejecutivo nacional, en base a la significatividad del consumo en el precio final, determinará las actividades que quedarán comprendidas en este régimen.

En el caso de transferencias para rancho de embarcaciones de pesca se procederá del mismo modo previsto en el párrafo anterior, previa acreditación antes la Dirección General Impositiva del destino del combustible empleado en el rancho.

Artículo 8º: El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para exceptuar total o parcialmente y en forma temporaria del impuesto establecido en el presente capítulo a los productos empleados como combustibles líquidos en la generación de energía eléctrica para servicios públicos.

## CAPÍTULO II

### Gas natural

Artículo 9º: Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto sobre el gas natural distribuido por redes, para uso residencial y del comercio y los servicios, excepto el destinado a industrias, a gas natural comprimido y usinas eléctricas de servicio público.

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gravar con el impuesto creado por el presente título el gas natural comprimido cuando por razones de política energética resulte conveniente.

Artículo 10: El impuesto a liquidar será de sesenta y cuatro australes (A 241) por metro cúbico de gas natural. Los consumos gravados que se realicen en las provincias comprendidas en el artículo 1º de la ley 23.272, pagarán un impuesto menor, que fijará el Poder Ejecutivo nacional, cuyo monto por metro cúbico no podrá exceder el cincuenta por ciento (50 %) de la suma indicada. En tanto el Poder Ejecutivo nacional no ejerza dicha facultad el impuesto para tales consumos será de sesenta y ocho australes (A 68) por metro cúbico.

Artículo 11: El hecho imponible se perfecciona al vencimiento de las respectivas facturas.

Artículo 12: Serán sujetos pasivos del impuesto quienes lo distribuyan al consumidor final.

Artículo 13: Son de aplicación para este impuesto las facultades otorgadas al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en el artículo 5º y lo dispuesto en el artículo 6º.

## CAPÍTULO III

### Disposiciones complementarias

Artículo 14: Los impuestos establecidos por los capítulos I y II se registrarán por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus

modificaciones, y su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo de la Dirección General Impositiva, quien dictará las normas reglamentarias relativas al plazo, forma y demás requisitos para el ingreso y exención de los tributos, pudiendo asimismo establecer anticipos a cuenta del gravamen. En materia de plazos de pago, y habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 3º, la Dirección General Impositiva fijará los mismos de modo de no afectar la etapa de comercialización mayorista.

Las empresas refinadoras de petróleo cuya actividad principal es la obtención de solventes y **aguarás** podrán deducir del conjunto de sus obligaciones por este impuesto —en su propia liquidación o en la de otros sujetos comprendidos en el artículo 3º, inciso b)— un importe equivalente al sesenta por ciento (60 %) del impuesto que corresponda sobre dichas productos por cada unidad de volumen exportada, durante los seis primeros años, cesando la deducción al cumplirse este plazo. Las empresas comprendidas en este párrafo deberán destinar a la complementación y/o remodelación de sus instalaciones de elaboración los importes resultantes, debiendo la Subsecretaría de Combustibles verificar la correcta utilización de los fondos.

El período fiscal de liquidación de los gravámenes será mensual y sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los responsables, excepto lo previsto para las importaciones.

Los sujetos pasivos de los impuestos establecidos en esta ley quedan obligados a cumplir los requisitos de documentación y registración que establezca la Dirección General Impositiva.

**Artículo 15:** El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de la Nación del ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 5º del capítulo 1.

**Artículo 16:** Los sujetos del impuesto establecido en el capítulo I del presente título están obligados a presentar a la Dirección General Impositiva una declaración jurada especial, en la forma y con los datos que ella establezca, a los fines de que ningún producto gravado deje de tributar el impuesto o quede doblemente incidido con motivo de la transición del régimen anterior al régimen ahora instituido.

**Artículo 17:** Derógase la ley 17.597 y sus modificaciones; la ley 20.073 y sus modificaciones; los artículos 50, 51 y los sin número incorporados a continuación del artículo 51 y del artículo 70 de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, por la ley 23.549; el decreto 3.616 del 30 de diciembre de 1976; el artículo 21 de la ley 16.656, el inciso c) del artículo 2º de la ley 17.574 y los incisos a) y b) del artículo 2º de la ley 19.287.

#### CAPÍTULO IV

##### De la distribución

**Artículo 18:** El producido de los impuestos establecidos en los capítulos I y II del presente

título se distribuirá entre el Tesoro nacional, las provincias y el Fondo Nacional de la Vivienda (ley 21.561) de conformidad con los siguientes períodos y porcentajes:

	Tesoro nacional %	Provincias %	FONAVI %
Hasta el 30-6-92 . . . . .	47	13	40
Del 1-7-92 al 31-12-92 . . . . .	42	17	41
Del 1-1-93 al 30-6-93 . . . . .	38	20	42
Del 1-7-93 al 31-12-95 . . . . .	34	24	42
Desde el 1-1-96 . . . . .	29	29	42

**Artículo 19:** Los fondos que corresponden a las provincias según lo previsto en el artículo anterior se distribuirán entre ellas en la forma que se establece a continuación:

- El sesenta por ciento (60 %) por acreditación a las cuentas de cada uno de los organismos de vialidad de las provincias en función de los porcentuales de distribución vigente para la coparticipación vial que fije el Consejo Vial Federal de acuerdo a la distribución prevista en el artículo 23 del decreto ley 505/58;
- El treinta por ciento (30 %) se destinará a cada una de las provincias en función de los porcentuales de distribución vigentes a los artículos 3º, inciso c), y 4º de la ley 23.548, con afectación a obras de infraestructura de energía eléctrica y/o obras públicas;
- El diez por ciento (10 %) restante será destinado al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), que será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se aplicará para lo establecido en el artículo 33 de la ley 15.336. El Consejo Federal distribuirá los fondos en función a los índices repartidores vigentes o a los que ese Consejo Federal determine en el futuro.

**Artículo 20:** A los fines de la distribución a que se refieren los artículos anteriores será de aplicación lo previsto en el artículo 6º de la ley 23.548.

El régimen de distribución que se establece constituye un régimen especial frente a lo dispuesto en el artículo 2º inciso b) de la mencionada ley.

En relación a los combustibles líquidos y el gas natural no es de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 2º, ni subsisten las limitaciones contenidas en el artículo 9º inciso b), tercer párrafo y apartado 1 acápites segundo y octavo, todos de la ley 23.548.

**Artículo 21:** Las provincias podrán dentro de los dieciocho setenta (270) días corridos contados a partir de la fecha de la publicación de

la presente ley en el Boletín Oficial, adherir por ley provincial a sus disposiciones y derogar, en igual término, la legislación local que pueda oponérsele.

Las provincias que adhieran al régimen de esta ley y decidan gravar con el impuesto a los ingresos brutos las etapas de industrialización y expendio al público de combustibles líquidos y gas natural, deberán comprometerse a:

a) Aplicar una tasa global que, comprendidas ambas etapas, no exceda el tres y medio por ciento (3,5 %), pudiendo alcanzar a la de industrialización con una tasa máxima del uno por ciento (1 %). La tasa global explicitada no superará el dos y medio por ciento (2,5 %) hasta el 31 de diciembre de 1991, y el tres por ciento (3 %) a partir del 1º de enero de 1992 hasta el 31 de julio de 1992. Hasta esta última fecha las jurisdicciones que al 1º de enero de 1991 tuvieran vigente una tasa sobre la etapa de expendio superior al dos y medio por ciento (2,5 %) podrán continuar con la aplicación de la misma sobre la etapa señalada, respetando la tasa global del tres y medio por ciento (3,5 %);

b) Aplicar las tasas referidas en el punto anterior sobre las siguientes bases imponibles: en la etapa de industrialización, sobre el precio de venta excluidos el impuesto al valor agregado y el creado por el presente título; en la etapa de expendio al público, sobre el precio de venta excluido el impuesto al valor agregado.

En el supuesto de no producirse la adhesión en el término señalado en el primer párrafo las provincias deberán reintegrar al gobierno nacional las sumas que hubieran percibido, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo podrá efectuar las compensaciones con otros libramientos extendidos a favor de las respectivas provincias. Sobre dichos montos se aplicarán los párrafos 2º y 3º del artículo 16 de la ley 23.548.

Las provincias acordarán con la Subsecretaría de Hacienda mecanismos tendientes a regularizar los reclamos derivados de la aplicación de las disposiciones del último párrafo del artículo 2º de la ley 23.548 con relación a los excedentes que, desde el 1º de enero de 1988 y hasta el 31 de diciembre de 1990, se hubieran producido en la recaudación del impuesto establecido por la ley 17.597 y sus modificaciones, respecto de lo acreditado al Fondo de Combustible creado por dicha ley.

**Artículo 22:** Hasta el momento en que se produzca la adhesión por parte de las jurisdicciones comprendidas, los sujetos a que se refiere el artículo 3º del capítulo I podrán computar como pago a cuenta del impuesto sobre los combustibles líquidos, en las condiciones previstas en el presen-

te artículo y con cumplimiento de los requisitos que establecerá la Dirección General Impositiva:

a) Los importes que —como sujetos de derecho del impuesto a los ingresos brutos— acrediten haber abonado a los fiscos de cada una de las provincias y de la Capital Federal en exceso de las tasas referidas en el segundo párrafo del artículo 21 y que se hubieran devengado a partir de la vigencia del presente título;

b) Los importes que los expendedores de sus respectivas marcas acrediten haber abonado a los fiscos de cada una de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por impuestos devengados con posterioridad a la fecha de vigencia del presente título en exceso de las tasas referidas en el segundo párrafo del artículo 21 y siempre que los mencionados expendedores no hubieran trasladado su incidencia a los precios al público.

Los derechos a que se refiere al párrafo anterior podrán ser ejercidos dentro de los noventa (90) días contados desde el momento del pago.

Los montos que deban reconocerse como computables como pago a cuenta del impuesto serán deducidos de la participación que le corresponda a la provincia respectiva según lo previsto en el artículo 19.

Las direcciones generales de rentas de cada jurisdicción recibirán documentación detallada de los montos que les fueron deducidos y se reservarán el derecho de fiscalizar si en cada caso se reunieron los requisitos establecidos en el presente artículo.

## CAPÍTULO V

### Otras disposiciones

**Artículo 23:** El producido de los recargos sobre el precio de venta de la electricidad establecidos por el inciso a) del artículo 30 de la ley 15.336 y el inciso b) del artículo 2º de la ley 17.574 se destinará al Tesoro nacional.

Todos los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y la administración del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) se atenderá con los recursos que fije a tales fines el Consejo Federal de la Energía Eléctrica destinándose para ello el uno por ciento (1 %) como máximo de los recursos totales anuales del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).

**Artículo 24:** Excepto en relación a las normas que tengan previstas vigencias distintas lo dispuesto en el presente título regirá a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación.

**Artículo 25:** Con relación a los fiscos contratantes y los contribuyentes, la Comisión Federal de Impuestos tendrá las funciones establecidas en el capítulo III de la ley 23.548.



Los fondos recaudados por aplicación del decreto 2.733/90, hasta la entrada en vigencia de la presente ley serán distribuidos conforme a lo establecido en el mismo.

#### TITULO IV

##### Modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda

Art. 8º — Modifícase la ley 21.581 y sus modificaciones en la forma que a continuación se indica:

1. Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente:

Artículo 2º: El organismo de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental y el consejo federal creado para dicha finalidad.

Dicho consejo será presidido por el titular de la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental o integrado por:

- Un representante por cada uno de los organismos ejecutores provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
- Un representante del gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
- Un representante de las cámaras empresarias de la construcción de viviendas e infraestructura.

Este consejo dictará su propio reglamento de funcionamiento y estará facultado para establecer las normas reglamentarias y aclaratorias que considere necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de la Vivienda.

2. Sustitúyese el inciso b) del artículo 3º por el siguiente:

b) El porcentual de la recaudación del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural que se establece en la ley de creación de dicho impuesto.

3. Derógase el inciso c) del artículo 3º.

4. Sustitúyese el artículo 22 por el siguiente:

Artículo 22: El Instituto Nacional de Previsión Social tendrá a su cargo continuar con las gestiones de cobro de:

- a) Los aportes que estableciera el inciso f) del artículo 2º de la ley 19.929 que se encontrasen pendientes de pago;
- b) Las contribuciones que establecía, a cargo de empleadores del ámbito privado, el artículo 3º inciso b), y las que establecía el artículo 3º inciso c), en ambos casos según el texto vigente con anterioridad a la vigencia de la ley que reforma el presente artículo, y que se encontraran pendientes de pago a dicha fecha.

En relación a las contribuciones a cargo de empleadores del ámbito público, que establecía el mencionado artículo 3º inciso b) el Instituto Nacional de Previsión Social se limitará a informar al organismo de aplicación de la presente ley los antecedentes y estado de situación de las contribuciones adeudadas a la misma fecha, las que seguirán en la jurisdicción del Fondo Nacional de la Vivienda.

Para el cumplimiento de las gestiones a su cargo el Instituto Nacional de Previsión Social podrá autorizar a entidades bancarias, públicas o privadas, para recibir sumas destinadas al pago de los aportes y contribuciones a que se refieren los incisos a) y b) del primer párrafo.

5. Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 24 la expresión "Dirección Nacional de Recaudación Previsional por Instituto Nacional de Previsión Social".

6. Incorpórase a continuación del artículo 32 el siguiente artículo:

Artículo ...: El régimen de financiamiento previsto en la presente para el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá una distribución automática entre los organismos ejecutores provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y deberá proporcionar al sistema, como mínimo, el equivalente a setenta y cinco millones de dólares estadounidenses (u\$s 75.000.000) por mes calendario. Para el caso que las percepciones fueran inferiores a esta cantidad, el Tesoro nacional deberá hacer los anticipos necesarios para mantener dicho nivel de financiamiento, los que serán compensados con excedentes posteriores si los hubiera.

7. Reemplázase en todo el texto de la ley la denominación "Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda" por "Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental".

Art. 9º — Derógase el artículo 1º de la ley 23.060.

Art. 10. — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación.

#### TITULO V

##### Derogación de regímenes de jubilaciones especiales

Art. 11. — Deróganse a partir del 31 de diciembre de 1991 las siguientes disposiciones legales, con sus modificatorias y complementarias: leyes 20.954, 19.803, 20.024, 18.464, 20.572, 21.124, 19.396, 21.121 (artículo 15), 19.173, 19.939, 16.989, 23.034, 22.929, 21.540, 23.794, 22.955, 22.731, 23.895 y 22.430 y los decretos 12.000/62, 667/79, 765/83, 1.041/83, 6.004/63 y 1.645/78. También se derogan a partir de la misma fecha los artículos relativos al régimen de retiro y pasividades de las leyes 19.101, 19.349, 18.398, 13.018, 20.957 y 21.965, sus modificatorios y complementarios. Queda asimismo derogada a partir del 31 de diciembre de 1991 toda otra norma legal que modifique los

nisitos y/o condiciones establecidos por la ley 18.037 el régimen previsional general vigente en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Ójase sin efecto a partir de la fecha de su promulgación el decreto 1.324/91.

Art. 12. — Créase una comisión bicameral que tendrá por objeto proponer un régimen general de jubilaciones y pensiones, la que deberá expedirse antes del 31 de octubre de 1991.

Art. 13. — La comisión creada por el artículo precedente estará integrada por cinco miembros del Honorable Senado de la Nación y cinco de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Dichos miembros serán designados por los presidentes de cada cuerpo, con facultad para removerlos en caso de necesidad o ineficiencia, teniéndose especialmente en cuenta la profesionalidad o especialidad de los candidatos, así como la preservación de la representatividad de los respectivos grupos parlamentarios.

Dicha comisión tendrá la facultad de darse su propio reglamento, elegir su presidente, establecer la periodicidad de sus reuniones y demás aspectos formales para llevar a cabo su cometido.

Art. 14. — La comisión bicameral deberá quedar instalada en un plazo no mayor de diez (10) días corridos, contados a partir del siguiente a la promulgación de la presente ley.

Art. 15. — Invítase a dictar normas del mismo carácter a los estados provinciales.

## TITULO VI

Impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico

## CAPITULO I

### Disposiciones generales

#### Objeto imponible - Vigencia

Art. 16. — Establécese con carácter de emergencia el término de nueve (9) períodos fiscales a partir del 31 de diciembre de 1991 inclusive, un impuesto que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que recaerá sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior.

Los

Art. 17. — Son sujetos pasivos del impuesto:

- Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior;
- Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país.

Las sucesiones indivisas son contribuyentes de este impuesto por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año, en tanto dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del cau-

sante y la declaratoria de herederos o aquella en que se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad.

A los fines de este artículo se considerará que están domiciliados en el país los agentes diplomáticos y consulares, el personal técnico y administrativo de las respectivas misiones y demás funcionarios públicos de la Nación y los que integran comisiones de las provincias y municipalidades que, en ejercicio de sus funciones, se encontraren en el exterior, así como sus familiares que los acompañaren.

Art. 18. — En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten el carácter de gananciales, excepto:

- Que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria;
- Que exista separación judicial de bienes;
- Que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial.

#### Bienes situados en el país

Art. 19. — Se consideran situados en el país:

- Los inmuebles ubicados en su territorio;
- Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en él;
- Las naves y aeronaves de matrícula nacional;
- Los automotores patentados o registrados en su territorio;
- Los bienes muebles registrados en él;
- Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, cuando el hogar o residencia estuvieran situados en su territorio;
- Los bienes personales del contribuyente, cuando éste tuviera su domicilio en él, o se encontrara en él;
- Los demás bienes muebles y semovientes que se encontraren en su territorio al 31 de diciembre de cada año, aunque su situación no revisiera carácter permanente, siempre que por este artículo no correspondiera otro tratamiento;
- El dinero y los depósitos en dinero que se hallaren en su territorio al 3 de diciembre de cada año;
- Los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social o equivalente, emitidos por entes públicos o privados, cuando éstos estuvieran domiciliados en él;
- Los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en él;
- Los créditos, incluidas las obligaciones negociables previstas en la ley 23.576 y los debentures —con excepción de los que cuenten con garantía real, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso b)— cuando el domicilio real del deudor esté ubicado en su territorio;
- Los derechos de propiedad científica literaria o artística, los de marcas de fábrica o de co-

mercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, estuviere domiciliado en el país al 31 de diciembre de cada año.

#### *Bienes situados en el exterior*

Art. 20. — Se entenderán como bienes situados en el exterior:

- a) Los bienes inmuebles situados fuera del territorio del país;
- b) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el exterior.
- c) Las naves y aeronaves de matrícula extranjera;
- d) Los automotores patentados o registrados en el exterior;
- e) Los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país;

Respecto de los retirados o transferidos del país por los sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, se presumirá que no se encuentran situados en el país cuando hayan permanecido en el exterior por un lapso igual o superior a seis (6) meses en forma continuada con anterioridad al 31 de diciembre de cada año;

- f) Los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participaciones sociales, incluidas las empresas unipersonales, y otros títulos valores representativos del capital social de entidades constituidas o ubicadas en el exterior;
- g) Los depósitos en instituciones bancarias del exterior. A estos efectos se entenderá como situados en el exterior a los depósitos que permanezcan por más de treinta (30) días en el mismo en el transcurso del año calendario. Para determinar el monto de tales depósitos deberá promediarse el saldo acreedor diario de cada una de las cuentas;
- h) Los debentures emitidos por entidades o sociedades domiciliadas en el exterior;
- i) Los créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero excepto que deban ser considerados como radicados en el país por aplicación del inciso b) de este artículo. Cuando los créditos respondan a saldos de precio por la transferencia a título oneroso de bienes situados en el país al momento de la enajenación o sean consecuencia de actividades desarrolladas en el país, se entenderá que se encuentran con carácter permanente en el exterior cuando hayan permanecido allí más de seis (6) meses computados desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles hasta el 31 de diciembre de cada año.

#### *Exenciones*

Art. 21. — Estarán exentos los siguientes bienes situados en el país:

- a) Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como su personal administrativo y técnico y familiares, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables. En su defecto, la exención será procedente en la misma medida y limitaciones sólo a condición de reciprocidad;

Igual tratamiento será aplicable para miembros de las representaciones, agentes y en su caso, de sus familiares, que actúen en organismos internacionales de los que la Nación sea parte, en la medida y con las limitaciones que se establezcan en los convenios internacionales respectivos;

- b) Los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que los declare exentos del presente o de todo gravamen.

Autorízase al Poder Ejecutivo para eximir del presente gravamen a los títulos, letras, bonos y demás títulos valores emitidos hasta la fecha y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias y las municipalidades;

- c) Los depósitos en australes y en moneda extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la ley 21.526 a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en otras formas de captación de fondos de acuerdo a lo que determine el Banco Central de la República Argentina;
- d) Las obligaciones negociables previstas en la ley 23.576 que sean colocadas por oferta pública;
- e) Los bienes amparados por las franquicias de la ley 19.640;
- f) Las acciones y participaciones en el capital de entidades sujetas al impuesto sobre los activos, incluidas las empresas y explotaciones unipersonales;
- g) Las cuotas partes de fondos comunes de inversión;
- h) Las acciones de cooperativas;
- i) Los inmuebles rurales a que se refiere el inciso e) del artículo 2º de la ley 23.760 y sus modificaciones;
- j) Los bienes inmaterialles (llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares).

#### *CAPÍTULO II*

##### *Liquidación del gravamen*

*Valuación de los bienes situados en el país.*

Art. 22. — Los bienes situados en el país se valorarán conforme a:

- a) Inmuebles;

1. Inmuebles adquiridos: al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, se le aplicará el índice de actuali-

zación mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.

2. Inmuebles construidos: al valor del terreno, determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se le adicionará el costo de construcción, al que se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de finalización de la construcción, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.

El costo de construcción se determinará actualizando mediante el citado índice, cada una de las sumas invertidas desde la fecha de cada inversión hasta la fecha de finalización de la construcción.

3. Obras en construcción: al valor del terreno determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, se le adicionará el importe que resulte de actualizar cada una de las sumas invertidas, mediante el índice citado en los puntos anteriores, desde la fecha de cada inversión hasta el 31 de diciembre de cada año.
4. Mejoras: su valor se determinará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 para las obras construidas o en construcción, según corresponda.

Cuando se trate de inmuebles con edificios, construcciones o mejoras, al valor atribuible a los mismos, determinado de acuerdo con los apartados 1, 2 y 4, se le restará el importe que resulte de aplicar a dicho valor el dos por ciento (2 %) anual en concepto de amortización. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, en el caso de inmuebles adquiridos, la proporción del valor actualizado atribuible al edificio, construcciones o mejoras, se establecerá teniendo en cuenta la relación existente entre el valor de dichos conceptos y el de la tierra según el avalúo fiscal vigente a la fecha de adquisición. En su defecto, el contribuyente deberá justipreciar la parte del valor de costo atribuible a cada uno de los conceptos mencionados.

El valor a computar para los inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de este inciso, no podrá ser inferior al de la base imponible fijada al 31 de diciembre de cada año, a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. Este valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio.

De tratarse de los inmuebles destinados a casahabitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad a las disposiciones

de este inciso podrá deducirse el importe aduado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos con garantía hipotecaria constituida sobre dichos inmuebles.

En los supuestos de cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva del usufructo, el cedente deberá computar, cuando corresponda a los fines de este impuesto, el valor total del inmueble, determinado de acuerdo con las normas de este inciso. En los casos de cesión de la nuda propiedad de un inmueble por contrato oneroso con reserva de usufructo se considerarán titulares por mitades a los nudos propietarios y a los usufructuarios;

- b) Automotores, aeronaves, naves, yates y similares: al costo de adquisición o construcción o valor de ingreso al patrimonio, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de la adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva. Al valor así obtenido se le restará el importe que resulte de aplicar el coeficiente anual de amortización que para cada tipo de bienes fije el reglamento o la Dirección General Impositiva, correspondiente a los años de vida útil transcurridos desde la fecha de adquisición, finalización de la construcción o de ingreso al patrimonio, hasta el año, inclusive, por el cual se liquida el gravamen.

En el caso de automotores, el valor a consignar no podrá ser inferior al que establezca la Dirección General Impositiva, al 31 de diciembre de cada año, con el asesoramiento de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro;

- c) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: de acuerdo con el último valor de cotización —tipo comprador— del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de cada año, incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha;
- d) Los depósitos y créditos en moneda argentina y las existencias de las mismas: por su valor al 31 de diciembre de cada año el que incluirá el importe de los intereses y de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente que hubieran devengado a la fecha indicada;
- e) Objetos de arte, objetos para colección y antigüedades que se clasifican en el capítulo 96 de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, objetos de adorno y uso personal y servicios de mesa en cuya confección se hubiera utilizado preponderantemente metales preciosos, perlas y/o piedras preciosas: por su valor de adquisición, construcción o ingreso al patrimonio, al que se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año;

- f) Otros bienes no comprendidos en el inciso siguiente: por su costo de adquisición, construcción o valor a la fecha de ingreso al patrimonio actualizado por aplicación del índice mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año;
- g) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso e): por su valor de costo. El monto a consignar por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el cinco por ciento (5 %) sobre la suma del valor total de los bienes gravados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior.

#### *Valuación de los bienes situados en el exterior*

Art. 23. — Los bienes situados en el exterior se valorarán de la siguiente forma:

- a) Inmuebles, autotómos, aeronaves, naves, Yates y similares, bienes inmateriales y los demás bienes no incluidos en los incisos siguientes: a su valor de plaza en el exterior al 31 de diciembre de cada año;
- b) Los créditos, depósitos y existencia de moneda extranjera, incluidos los intereses de ajustes devengados al 31 de diciembre de cada año: a su valor a esa fecha;
- c) Los títulos valores que se coticen en bolsas o mercados del exterior: al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año.

Para la conversión a moneda nacional de los importes en moneda extranjera de los bienes que aluden los incisos anteriores se aplicará el valor de cotización, tipo comprador, del Banco de la Nación Argentina de la moneda extranjera de que se trate al último día hábil anterior al 31 de diciembre de cada año.

#### *Mínimo exento*

Art. 24. — No estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 resulten iguales o inferiores a un mil millones de australes (A 1.000.000.000).

#### *Alicuotas*

Art. 25. — El gravamen a ingresar por los contribuyentes a que se alude en el artículo anterior, surgirá de la aplicación de la alícuota del uno por ciento (1 %) sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto cuyo monto exceda del establecido en el artículo 24.

Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse

hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.

Art. 26. — Los contribuyentes del impuesto sobre los activos, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia visible o ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezca a los sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo por los respectivos bienes al 31 de diciembre de cada año, el uno por ciento (1 %) del valor de dichos bienes, determinado con arreglo a las normas de la presente ley.

No corresponderá efectuar el ingreso establecido en este artículo cuando su importe resulte igual o inferior a dos millones quinientos mil australes (A 2.500.000).

Los responsables obligados al ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.

### CAPÍTULO III

#### *Otras disposiciones*

Art. 27. — A los efectos de esta ley los índices de actualización deberán ser elaborados anualmente por la Dirección General Impositiva sobre la base de los datos relativos a la variación de índices de precios al por mayor, nivel general, que deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La tabla a que se refieren los incisos a), b), c) y f) del artículo 22 contendrá valores mensuales para los veinticuatro (24) meses inmediatos anteriores, valores trimestrales promedio —por trimestre calendario— desde el 1º de enero de 1975 y valores anuales promedios para los demás periodos y tomará como base el índice de precios correspondiente al mes para el cual se elabora la tabla.

Asimismo, la Dirección General Impositiva a partir del período fiscal 1992, actualizará anualmente, sobre la base de la variación experimentada en el índice mencionado en el primer párrafo del presente artículo durante el período fiscal a que se refiere la liquidación del gravamen, el importe previsto en los artículos 24 y 26.

Art. 28. — Facúltase a la Dirección General Impositiva a dictar las normas complementarias de información y percepción o retención del gravamen, que resulten necesarias para su aplicación e ingreso.

Art. 29. — La aplicación, percepción y fiscalización del presente gravamen estará a cargo de la Dirección General Impositiva y se regirá por las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).

Art. 30. — El producido del impuesto establecido en la presente ley se distribuirá, conforme al siguiente régimen especial:

- a) El noventa por ciento (90 %) para el financiamiento del régimen nacional de previsión

social que se depositará en la cuenta del Instituto Nacional de Previsión Social;

- b) El diez por ciento (10 %) para ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a un prorratador formado en función de la cantidad de beneficiarios de las cajas de previsión o de seguridad social de cada una de esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los importes que surjan de dicho prorratado serán girados directamente y en forma diaria a las respectivas cajas con afectación específica a los regímenes previsionales existentes. El prorratado será efectuado por la Subsecretaría de Seguridad Social sobre la base de la información que le suministre la Comisión Federal de Impuestos.

Quando existan cajas de previsión o de seguridad social en jurisdicciones municipales de las provincias, el importe a distribuir a las mismas se determinará en función a su número total de beneficiarios existentes al 31 de mayo de 1991, en relación con el total de beneficiarios y de los regímenes previsionales nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El noventa por ciento (90 %) del importe mencionado en el párrafo anterior se deducirá del monto a distribuir de conformidad al punto a) y el diez por ciento (10 %) del determinado de acuerdo con el punto b). Los importes que surjan de esta distribución serán girados a las jurisdicciones provinciales, las que deberán distribuirlos en forma automática y quincenal a las respectivas cajas municipales.

#### TITULO VII

##### Destino de los recursos de privatizaciones

Art. 31. — Destínase al régimen nacional de previsión social el treinta por ciento (30 %) de los recursos netos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley 23.696 o normas locales, ya sea por venta de activos, concesión, transferencia de bienes muebles, acciones o servicios, venta de inmuebles, tanto del Estado nacional como de las empresas del Estado y organismos descentralizados. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se transferirán en propiedad al Instituto Nacional de Previsión Social la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado nacional de las sociedades licenciatarias Norte S.A. y Sur S.A. de los servicios de telecomunicaciones.

El adquirente, concesionario, licenciatario o socio, destinará directamente el referido porcentaje del precio, con derecho de asociación o contraprestación en una forma que a tal efecto abrirá la Subsecretaría de Seguridad Social en el Banco de la Nación Argentina.

Art. 32. — Deróganse a partir del 1º de enero de 1992 los convenios de corresponsabilidad gremial acordados por aplicación de la ley 20.155.

Asimismo se derogan los artículos referidos al régimen substitutivo de aportes y contribuciones a la seguridad social de la ley 23.107.

Art. 33. — Derógase la ley 23.883.

#### TITULO VIII

##### Modificación de la Ley de Tasas Judiciales

Art. 34. — Incorpórase al inciso f) del artículo 13 de la ley 23.898 lo siguiente:

...como, asimismo el Instituto Nacional de Previsión Social respecto de las actuaciones tendientes al cobro de aportes, contribuciones y demás obligaciones de la seguridad social.

Art. 35. — La presente exención tiene efecto desde la vigencia de la ley 23.898.

#### TITULO IX

##### Procedimiento tributario - Ley 11.683

Art. 36. — Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, de la siguiente manera:

1. Modifícase el artículo 25 de la siguiente forma:

- a) Incorpórase el siguiente inciso: "d) En el caso que se comprueben operaciones marginales durante un período fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas dictadas por la Dirección General Impositiva de ese mismo período, aplicado sobre las ventas de los últimos doce (12) meses que pueden no coincidir con el ejercicio comercial determinará sin admitir prueba en contrario diferencias de ventas que se considerarán en la misma forma que prescribe en sus dos últimos párrafos el inciso d) precedente para los meses involucrados.

De comprobarse operaciones marginales durante un ejercicio comercial la presunción se aplicará de igual modo sobre los períodos no prescriptos."

- b) Incorpórase a continuación del último párrafo, los siguientes: "También la Dirección General Impositiva podrá efectuar la determinación calculando las ventas o servicios realizados por el contribuyente o las utilidades en función de cualquier índice que pueda obtener, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, adquisición de materias primas o envases, el pago de salarios, el monto de los servicios de transporte utilizados, el valor del total del activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo. Este detalle es meramente enunciativo y su empleo podrá realizarse individualmente o utilizando diversos índices en forma combinada o aplicarse ya sea proyectando datos del mismo contribuyente de ejercicios anteriores o de terceros que desarrollen una actividad similar de forma de obtener los montos de ventas, servicios o utilidades proporcionales a los índices en cuestión.

La carencia de contabilidad o de comprobantes fehacientes de las operaciones hará nacer la presunción de que la determinación de los gravámenes efectuados por la Dirección General Impositiva en base a los índices señalados u otros

que contengan esta ley o que sean técnicamente aceptables, es legal y correcta sin perjuicio del derecho del contribuyente o responsable a probar lo contrario. Esta probanza deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basada en hechos generales. La probanza que aporte el contribuyente no hará decar la determinación de la Dirección General Impositiva sino solamente en la justa medida de la prueba cuya carga corre por cuenta del mismo."

2. Incorpórase a continuación del último párrafo del artículo 40, el siguiente:

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, todas las personas o entidades que desarrollen algún tipo de actividad retribuida, que no sea en relación de dependencia, deberán llevar registros con los comprobantes que las respalden y emitir comprobantes por las prestaciones o enajenaciones que realicen, que permitan establecer clara y fehacientemente los gravámenes que deban tributar. La Dirección General Impositiva podrá limitar esta obligación en atención al pequeño tamaño económico y efectuar mayores o menores requerimientos en razón de la índole de la actividad o el servicio y la necesidad o conveniencia de individualizar a terceros.

3. Sustitúyese el artículo agregado a continuación del artículo 41 por el artículo 9º de la ley 23.314 por el siguiente:

Artículo...: Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúan registros mediante sistemas de computación de datos, deberán mantener en condiciones de operatividad, los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, por el término de dos (2) años contados a partir de la fecha del cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado.

La Dirección General Impositiva podrá requerir a los contribuyentes, responsables y terceros:

- a) Copia de totalidad o parte de los soportes magnéticos aludidos, debiendo suministrar la Dirección General Impositiva los elementos materiales al efecto;
- b) Información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas sobre características técnicas del hardware y software, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero.

Asimismo podrá requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y/o utilitarios utilizados, así como también listados de programas, carpetas de sistemas, diseños de archivos y toda otra

documentación o archivo inherentes al proceso de los datos que configuran los sistemas de información;

- c) La utilización, por parte de personal fiscalizador del organismo recaudador, de programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento informático del contribuyente y que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar.

Lo especificado en el presente artículo también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros.

La Dirección General Impositiva dispondrá los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial a presentar por parte de los responsables o terceros, y la forma y plazos en que deberán cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el presente artículo.

4. Incorpórase a continuación del segundo artículo agregado a continuación del artículo 44 de la ley 23.314, el siguiente:

Artículo...: En los casos en que se emita factura o documento equivalente de las ventas, locaciones o prestaciones de servicios, o de emitirse no fueran los habitualmente utilizados por el responsable para el cumplimiento de sus obligaciones respecto del impuesto al valor agregado, y siempre que el acta de comprobación respectiva esté asimismo suscrita en forma voluntaria por el adquirente, locatario o prestatario, debidamente identificado, el funcionario interviniente procederá, en ese mismo acto a la clausura del o los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios en los que se hubiera producido la omisión.

Dicha clausura será de tres (3) a diez (10) días corridos, y deberá ordenarse en el acta que se libere donde constarán los hechos que configuren la comisión de las conductas mencionadas en el primer párrafo y podrán agregarse los datos, constancias, o comprobantes que correspondan.

En el supuesto previsto en el presente artículo, la apelación prevista en el artículo incorporado a continuación del artículo 78 se otorgará, en todos los casos, al solo efecto devolutivo, no siendo de aplicación lo establecido en el último párrafo del citado artículo en lo que hace al otorgamiento de efecto suspensivo al recurso.

5. Incorpórase al artículo 69 el siguiente inciso:

- d) Por la notificación de la vista en el caso de determinación prevista en el artículo 24, cuando se haya dispuesto la aplicación de las normas del capítulo incorporado a continuación del capítulo XIII por la ley 23.905. La interrupción alcanzará a los periodos no prescritos a la fecha de la vista referida.

Art. 37. — Las disposiciones de este título regirán a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 38. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

EDUARDO MENENDI  
Mario D. Fassi.

#### ANTECEDENTE

Véase el texto de la sanción originaria de la Honorable Cámara en el Diario de Sesiones del 17 y 18 de julio de 1991, página 1432.

**Sr. Presidente (Alasino).** — En consideración. Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: vamos a considerar el proyecto de ley que elevara el Poder Ejecutivo nacional vinculado al financiamiento de los jubilados, tal como se lo ha denominado. Ya fue sancionado por esta Cámara y remitido al Honorable Senado de la Nación, que a su vez lo ha devuelto con incorporaciones y modificaciones.

En primer lugar, con el objeto de facilitar el tratamiento de la iniciativa voy a proponer su consideración y votación por títulos. El proyecto sancionado por esta Cámara constaba de siete títulos; el Senado le incorporó dos títulos más. En razón de la unidad que significa cada título sería conveniente tratarlos de la manera que he propuesto.

Antes de continuar quisiera que la Presidencia consulte al cuerpo si acepta este temperamento.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: estoy de acuerdo con la metodología que propone el señor diputado Matzkin con respecto al tratamiento de cada título, pero por razones que no resulta conveniente anticipar en este momento, ya que formarían parte de mi exposición en general, es posible que algunos títulos deban votarse artículo por artículo.

Hay títulos sobre los que ha habido numerosas reformas, por lo que resulta extremadamente difícil votarlos globalmente. En todo caso, consideremos ahora la cuestión en forma general y decidamos ese aspecto en el momento de la votación.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Clérico.** — Señor presidente: quisiera solicitar a la Presidencia una interpretación reglamentaria. Entiendo que con respecto a esta iniciativa la Cámara está convocada para insistir

en su sanción original o para aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la Nación.

En consecuencia, este proyecto de ley no admite un tratamiento por partes, lo que difiere de lo expresado por las bancadas radical y judicialista. Solicito una interpretación reglamentaria a la Presidencia.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Cortese.** — Señor presidente: esta cuestión quizá ya ha sido considerada en más de una oportunidad. Cuando intervenimos en el tratamiento de un proyecto venido en revisión no tenemos la obligación de analizar *in totum* lo que modificó la otra Cámara, sino que confiamos con la facultad de debatir cada inciso y cada artículo; incluso, sin alterar el espíritu integral de la norma, podemos aceptar parcialmente una modificación introducida por el Honorable Senado al texto de un inciso o de un artículo. De manera que correspondería analizar puntualmente cada una de las modificaciones.

Nada impide acordar —si así lo posibilita la integridad de los temas— el tratamiento global de los títulos. Sin embargo, si en la consideración de los mismos algún bloque propusiera aceptar parcialmente las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, inevitablemente el cuerpo tendría que producir tantas votaciones como fuesen necesarias hasta que se produjese la acumulación de voluntades de ambas Cámaras para que quede sancionada la ley.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Gentile.** — Señor presidente: formularía de manera distinta lo que acaba de señalar el señor diputado Matzkin, aunque quizá con la misma intención que él ha puesto de manifiesto.

En realidad, el artículo 71 de la Constitución nos obliga a examinar las adiciones y modificaciones introducidas en el proyecto y no todo su contenido. En consecuencia, en todo caso deberían considerarse esas adiciones título por título, pues no tenemos por qué tratar los artículos que no han sido modificados. De esta manera, en caso de que no existan adiciones en alguno de los títulos, ése sería saltado y continuaríamos con el siguiente. Creo que este es el espíritu del artículo 71 de la Constitución Nacional.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: de acuerdo con una metodología que como mínimo data desde la sanción de la ley de emergencia económica —tengo la certeza de que se ha aplicado en anteriores leyes ómnibus— la Cámara ha



considerado la manera de permitir la aceptación o el rechazo parcial de las modificaciones introducidas por el Senado. Ello, atendiendo a que las leyes llamadas ómnibus suelen tener capítulos que contienen disposiciones que no guardan correlación entre sí, es decir que tratan de diversos temas. En este sentido, el proyecto de ley en tratamiento es la más cabal expresión de ello, pues nada tiene que ver, por ejemplo, el régimen tributario del IVA con el impuesto a los combustibles, o el enroque del FONAVI con la derogación de los regímenes diferenciales de previsión. No obstante, debemos tener cierta precaución dado que algunos títulos del proyecto deben guardar una mínima correlación lógica, pues de lo contrario podrían quedar carentes de significación. De todas maneras, existe la posibilidad de efectuar una consideración distintiva en algunos otros casos.

Por ejemplo, el tratamiento que el proyecto da a los sujetos pasivos del impuesto a los combustibles es susceptible de ser considerado mediante el criterio del Senado o insistiendo en la postura reflejada en la sanción originaria de la Cámara de Diputados. Lo mismo puede ocurrir en relación con el impuesto sobre los bienes personales, acerca del cual se han dispuesto exenciones que podrían admitirse o no. Así no destruiríamos integralmente la norma. Esto es lo que no quería hacer, es decir, anticipar alguno de los detalles que deberían formar parte del tratamiento en general.

La postura del señor diputado Clérico fue abandonada desde la aparición de estas leyes ómnibus. Por supuesto, cuando se trata de un proyecto de ley que guarda una correlación estrecha en todos sus artículos y se refiere a un tema específico, es posible sostener el criterio de aceptar o rechazar las modificaciones que pudieran haber sido introducidas, porque se está en presencia de una misma y universal cuestión; pero no ocurre lo mismo con el tratamiento de las denominadas leyes ómnibus.

Además, creo que en el proyecto de ley en consideración son muy excepcionales los casos en los que podría justificarse el tratamiento de algún artículo en especial. En muchos otros casos podríamos definirnos directamente por títulos, si es que nadie solicita otro mecanismo. Es decir, debemos tratar de condensar todo lo posible el sentido de la votación a efectos de abreviar el tema y también las exposiciones.

Sr. Presidente (Alasino). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: pocas veces la Constitución fija pautas reglamentarias rituales, salvo cuando su espíritu procura que la moda-

lidad legislativa se ciña en forma estricta a un mecanismo que lógicamente atiende a intereses superiores.

Este es uno de los casos en que la Constitución establece una norma de procedimiento —la del artículo 71— que procura que la sanción de una Cámara quede petrificada en forma absoluta para esa Cámara, y que la revisora —una vez que introduce una modificación o corrección— también se limite específicamente a esto.

A partir de las dos sanciones —de la Cámara de origen y de la Cámara revisora— solamente es factible a cualquiera de las dos Cámaras insistir en su sanción o aceptar la de la otra. Es decir, la opción o la alternativa de esta Cámara en este momento es sin duda la de insistir en su sanción original por simple mayoría —por ser Cámara de origen—, o aceptar las reformas del Senado. Pero si quedara abierta la posibilidad de producir una nueva modificación del articulado, esto generaría una especie de circuito que funcionaría *sine die*, porque si esta Cámara sanciona una nueva modalidad la otra Cámara, la revisora, tendría también la posibilidad de hacer revisión, corrección, etcétera.

Por eso pienso que la norma de procedimiento fijada por la Constitución tiene como objetivo supremo limitar el proceso de formación y sanción de las leyes a este trámite y no producir un circuito interminable.

Sr. Presidente (Alasino). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: el sentido de mi propuesta inicial fue más bien de carácter metodológico. La Constitución es bastante clara en lo que respecta a un proyecto que viene en revisión: no podemos introducir ningún tipo de modificación; no podemos agregar un punto o una coma ni tampoco quitarlo. Solamente podemos aceptarlo o rechazarlo. Son las únicas alternativas que contempla la Constitución.

El sentido de la metodología propuesta radica en que inclusive puede servir de ayuda para el desarrollo de la sesión. La bancada Justicialista tiene posición tomada con respecto a este proyecto, pues piensa aceptar todas las modificaciones e incorporaciones propuestas por el Senado con el objeto de privilegiar una rápida sanción de la norma en función del objetivo que persigue el proyecto y que hemos expresado con claridad en oportunidad de su sanción por esta Cámara. En esa ocasión discutimos en general y en particular cada uno de los puntos, artículos, incisos o acápites.

Voy a apoyar mi exposición con un ejemplo; le al comienzo que este proyecto de ley tiene este títulos, que llegan a nueve con los dos se agregó el Senado. En el título I ni siquiera se efectuarse la votación porque el Senado introdujo modificaciones. Al respecto no tenemos nada que decir, ni por sí ni por no y demos pasar directamente al título II; ésta es una metodología que me parece conveniente los fines de arribar a una rápida sanción.

Si alguno de los señores diputados desea formular algún tipo de comentario sobre los títulos, debe ser para manifestar su aceptación o rechazo; no puede apartarse de esa situación. Por eso, el propósito es privilegiar un tratamiento rápido, porque no hay hechos nuevos.

Creo que podemos aceptar esta propuesta en forma general y si alguno de los títulos mereciera un tratamiento diferente, lo comentaremos en esa oportunidad. Todo esto persigue el objeto de avanzar rápidamente en el tratamiento de la norma.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Si existe asentimiento de la Honorable Cámara, se adoptará el criterio propuesto por el señor diputado Matzkin con las aclaraciones hechas por el señor diputado Baglini. Esto significa que cada una de las modificaciones introducidas por el Senado serán votadas por la Cámara por sí o por no y por simple mayoría.

En aquellos títulos o capítulos donde la especificidad de los temas requiera hacer distintas aclaraciones, se adoptará el criterio propuesto por el señor diputado Baglini.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Se procederá en secuencia.

Tiene la palabra el señor diputado por el que.

**Sr. Rosso.** — Señor presidente: creo que el criterio sustentado por la Presidencia y lo manifestado por el señor diputado Matzkin van en el sentido correcto. Pero no entiendo cuál es el sentido de votar por partes. Aquí las cosas están claras: si nosotros no ratificamos íntegramente el proyecto tal como fue sancionado por el Senado, volverá a la Cámara alta. Como ha dicho el señor diputado Matzkin, no podemos modificar una sola palabra.

No veo el sentido de discutir este proyecto de títulos. O lo aceptamos tal como ha sido sancionado por el Honorable Senado, o insistimos en la sanción originaria de esta Cámara.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: parece que estamos de acuerdo en que la parte que constituyó la sanción primitiva de este cuerpo —y que no ha sido modificada por el Honorable Senado— no está en discusión.

Con respecto a las modificaciones que introdujo el Senado, si se votara en la forma que se propicia va a ocurrir que bastará con agregar una sola coma para que la propuesta del Senado sea rechazada. Por consiguiente, no tiene sentido práctico ni útil votar en la forma indicada.

Este proyecto debe tratarse en general y votarse si se aceptan o no las modificaciones introducidas por el Senado. Por simple mayoría se pueden rechazar o aceptar. Reitero que bastará la modificación de un solo capítulo —o incluso el agregado de una coma— para que el Senado interprete que su sanción fue rechazada, por lo que necesitará para insistir los dos tercios de los votos.

Por lo tanto, habría que prever esta cuestión para que este debate no se convierta en algo que sería muy difícil de dilucidar.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Sabio.** — Señor presidente: coincido con los conceptos vertidos por los señores diputados Rosso y Durañona y Vedia en el sentido de que el tratamiento que se le debe dar al proyecto sancionado por el Senado es urgente.

Hay más de 3.300.000 jubilados que están esperando desde hace más de dos meses para cobrar los 30 dólares que se les van a otorgar en concepto de aumento. Pero corresponde destacar que, de acuerdo con lo que se establece en su artículo 4º, esta norma comenzará a regir recién a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

De no aprobarse el proyecto con las modificaciones que introdujo el Senado, tendrá que volver a la Cámara alta y los jubilados esperarán dos meses más para cobrar el aumento de sus haberes.

**Sr. Baglini.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

**Sr. Sabio.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: la interpretación del señor diputado preopinante es inexacta.

Hoy es el último día del mes y la ley comienza a regir el primer día del mes siguiente a aquel en que fuera publicada en el Boletín Oficial.

Como la publicación se efectuará cualquier día del mes de agosto, comenzará a regir el 1º de septiembre, y esto está especificado en tres capítulos del proyecto de ley.

Es lo mismo tratar esta iniciativa hoy, mañana u otro día; puede volver al Senado y éste demorar dos o tres semanas su consideración. Será exactamente lo mismo, porque el Boletín Oficial del día de hoy ya ha sido publicado y el de mañana corresponderá al mes de agosto.

**Sr. Presidente (Alasino).** — No debería descartarse la posibilidad de que como suplemento del Boletín Oficial de hoy se publicara la sanción de este proyecto de ley.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Sabio.** — Señor presidente: agradezco la aclaración del señor diputado Baglini, pero apelo a la sensibilidad de todos los señores diputados —pertenezcan al bloque al que pertenecieren— para no demorar este tratamiento. Reitero que estamos recibiendo diariamente delegaciones de jubilados que nos vienen a reclamar que sancionemos lo más rápidamente posible este proyecto que, si bien no cubre las necesidades totales de los jubilados, ni mucho menos, significa algo para aquellos que no tienen nada.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Dumón.** — Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar mi apoyo a la metodología propuesta por el señor diputado Baglini, que es la que se ajusta a lo dispuesto por la Constitución. En segundo término, desearía instar a que no sigamos siendo cómplices de una mentira que funcionarios del Poder Ejecutivo han hecho difundir por los medios de comunicación. Para aumentar 300.000 australes a los jubilados no es necesario que se sancione esta ley. El poder Ejecutivo, en virtud del decreto que ha dictado, cuenta con fondos suficientes para pagar ese aumento. De manera que no debemos aceptar que se le cee la culpa al Congreso. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: la intención de mi propuesta era agilizar el debate, tal como lo expresé al comienzo de mi exposición, más allá del análisis constitucional que se pueda hacer del trámite de la norma pues ello igualmente no presenta problemas. Sin embargo, observo que diputados de diferentes bancadas formulan propuestas para el tratamiento de este asunto, las que quizá resulten más inteligentes. No tenemos inconveniente alguno en allanarnos a las ideas sugeridas siempre y cuando sir-

van para cumplir mejor el objetivo. Esto significa que podríamos cambiar la metodología si el cuerpo así lo decide.

Se puede llevar a cabo una discusión en general en la que cada bancada exponga sus puntos de vista. Y tal vez sería más ágil hacer una votación en lugar de nueve, como teníamos previsto. Si esto sirve al objetivo propuesto, no tenemos ningún inconveniente en ajustarnos a ese criterio. Es posible compatibilizar perfectamente las posiciones porque en última instancia se tratará de votaciones destinadas a aceptar o rechazar las observaciones que se formulen; no habría otra cuestión en juego. Incluso invitamos a la bancada radical a que manifieste en general sus puntos de vista sobre las modificaciones del Senado; nosotros haríamos lo propio y así obraría cada bloque. Sin duda, hacer una sola votación es el método más ágil.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: no tenemos ningún inconveniente en que se lleve a cabo una sola consideración en general, pero la votación no puede ser hecha más que por temas particulares porque hay algunas cuestiones que nada tienen que ver con otras.

No es posible que la Cámara se vea obligada a englobar en una sola votación un título que no ha merecido la aprobación de este cuerpo y que posteriormente el Senado incorporara. Esto es imposible. El contenido de ese título nada tiene que ver con el resto de la cuestión en consideración. Esto es algo que podría ocurrir con esta norma; ya sucedió en el pasado y de ahí la mecánica que proponemos. Nadie quiere demorar el tratamiento de este proyecto, pero cada una de las cuestiones que tienen entidad deben ser consideradas separadamente.

Sabemos que hay un título que no ofrece problemas porque no tiene modificaciones; en otras las modificaciones no son sustanciales y entonces se puede hacer una sola discusión de carácter general. Cuando llegue el momento de la votación, se la hará por títulos, y si algún señor diputado hiciera alguna observación concreta la cuestión se sometería a una votación puntual. No podemos estar entre la espada y la pared votando temas que no tienen vinculación directa entre sí. Vuelvo a resaltar que ésta es una ley omnibus.

**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia permite recordar a los señores diputados que las modificaciones introducidas por el Senado sólo requieren mayoría absoluta para ser aceptadas.

En cuanto al procedimiento, si bien no está definido en detalle en la Constitución Nacional, la aceptación o el rechazo deben efectuarse en referencia a la totalidad de las enmiendas introducidas por la otra Cámara. Puede dar lugar a tratamientos separados cuando el proyecto comporte cuestiones diversas, como en el caso del antecedente mencionado por el señor diputado Baglini cuando se consideró la ley de emergencia económica.

El señor diputado Matzkin propuso que, a fin de dar lugar a una discusión profunda de la cuestión, cada bloque tuviera oportunidad de expresar su posición a cada título o artículo, y que finalmente se votaran en conjunto las enmiendas.

La Cámara deberá adoptar el procedimiento que habrá de aplicar.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Cortese.** — Señor presidente: me permito preparar terminantemente con su criterio, que se dede la cuestión en análisis. Si votásemos inicialmente todas las modificaciones, estaríamos planteando el sistema constitucional y sentando un precedente penoso al presuponer que los distintos bloques pueden mantener identidad de voto respecto a todos los temas, lo cual es falso. Algunos de los puntos serán acompañados por determinados bloques y otros no; consecuentemente, no se va a producir una votación que exprese la voluntad de este cuerpo —cuya representación viene a mostrar todo el mosaico político del pensamiento de la ciudadanía argentina— si se acepta el procedimiento de votar enmiendas en conjunto.

Por otra parte, soportamos toda esta dificultad por un déficit en la comunicación del Honorable Senado, que nos ha remitido el texto y ha sancionado en lugar de informar solamente sobre las modificaciones que ha introducido. Si la comunicación se hubiera limitado a las enmiendas, ahora tendríamos bastante acotadas las posibilidades de interpretación.

Como dice el señor diputado Baglini, podemos facilitar el tratamiento con exposiciones limitadas a la totalidad del proyecto, pero en el momento de votar deberemos hacerlo separadamente, puesto que éste es el único modo de habilitar la expresión de la voluntad de este cuerpo y el cumplimiento de lo preceptuado en la Constitución Nacional. Tenemos la voluntad de dar celeridad, pero no podemos vulnerar el régimen constitucional.

**r. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**r. Dumón.** — Lamento la hermenéutica del método de formación de las leyes que ha he-

cho la Presidencia, porque no coincide con lo que prescribe el artículo 71 de la Constitución Nacional, cuyo sentido es separar los rechazos totales de las modificaciones parciales.

El propio texto constitucional impone el tratamiento separado, mucho más cuando en este proyecto de ley se tratan temas distintos, como lo ha señalado con todo acierto el señor diputado Cortese. Si primara este criterio, se haría honor no sólo a la letra de la Constitución —que establece la mentada distinción en el artículo 71—, sino también al sentido común, con lo cual avanzaríamos en la sanción de la ley.

Además, esta interpretación no sólo se adecua a las disposiciones sobre el trámite legislativo entre la Cámara de origen y la revisora sino también a aquellas que admiten el veto parcial del Poder Ejecutivo. Si esta interpretación no fuera la correcta, el Poder Ejecutivo tendría que promulgar o vetar la totalidad de la ley, y esto no es lo que sucede.

Lo que ha planteado el señor diputado Baglini es estrictamente correcto. Tenemos que seguir el principio de unidad temática, especialmente con una ley que trata asuntos tan diversos como el financiamiento del sistema previsional y el castigo a los que transgreden las normas del impuesto al valor agregado y demás gravámenes.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

**Sr. Martínez (L. A.).** — Señor presidente: entiendo que aquí hay en juego dos cuestiones. Una versa sobre la facultad que tiene la Cámara para elegir el método por el cual resolverá sobre las enmiendas introducidas por el Honorable Senado.

La otra, planteada por algunos señores diputados preopinantes, se relaciona con el fondo constitucional. Creo que el fondo de la cuestión no está en discusión ni es menguado porque se hagan dos, tres o cuatro votaciones. En efecto, es esta propia Cámara la que puede legítimamente elegir entre los métodos posibles cuál es el que más se ajusta al tema en tratamiento.

Es importante destacar que cualquiera sea el método que elijamos está garantizada la posibilidad del debate con respecto a las modificaciones introducidas por el Honorable Senado. Por lo tanto, resulta exagerado expresar que la norma será inconstitucional en caso de que se efectúe una sola votación. Lo que sí es cierto es que al adoptar este procedimiento actuaremos con la coherencia e integralidad que el tema merece.

Reitero que está garantizada la expresión de las posiciones de los sectores que componen el cuerpo, sobre todo en el supuesto caso de que sean rechazadas las modificaciones introducidas por el Honorable Senado a través de la única votación que se realizará luego de que los señores diputados manifiesten su punto de vista con respecto al asunto en discusión. Si esto ocurriese no habría absolutamente nada que incorporar.

También es cierto que en caso de realizarse varias votaciones no se estaría afectando la constitucionalidad de la norma y mucho menos la metodología establecida.

Aceptamos la propuesta formulada por varios señores diputados en el sentido de que se realice una sola votación, garantizando la libre expresión de todos los sectores políticos que componen el cuerpo.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

**Sr. Rosso.** — Señor presidente: considero que lo que corresponde es efectuar una sola votación a efectos de determinar si se aceptan o no las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

En el supuesto caso de que esta Cámara aceptara las modificaciones incorporadas, va de suyo que el proyecto de ley quedará definitivamente sancionado y deberá ser comunicado al Poder Ejecutivo. Pero si no fuera así, es decir, si no aceptáramos dichas modificaciones, se abriría el debate con respecto a los puntos que deben ser corregidos.

El procedimiento descripto nos permitirá agilizar el trámite y sancionar definitivamente este proyecto a fin de evitar que se diga a través de los medios de que dispone el Poder Ejecutivo que los jubilados no perciben el aumento de los 300.000 australes en sus haberes por morosidad del Congreso.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Gentile.** — Señor presidente: con respecto a este tipo de cuestiones se ha sentado un precedente al considerarse las primeras leyes ómnibus o, mejor dicho, trenes, porque una sola norma contenía varias leyes. Aquí tenemos nueve vagones, uno de los cuales fue agregado por el Honorable Senado, y no se trata propiamente de una corrección. Hago esta aclaración porque el artículo 71 habla de adición o corrección, y no de adición y corrección.

De manera que en el caso del título IX no hubo una corrección sino que se ha incorporado una nueva ley. Cuando se dictó la Constitución

Nacional había leyes, y no conjuntos de leyes que se trataban en un solo paquete, como es este caso.

En consecuencia, si se va a hacer una sola votación voy a pedir a la Cámara que lo que no sea adición o corrección, como ocurre con la última parte —referida al procedimiento tripartito—, no sea debatido ni tratado porque no corresponde hacerlo. Cabe recordar que así hemos actuado en el caso de una ley anterior, donde el Senado, sin competencia, hizo un agregado que no le correspondía.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: no estamos logrando el objetivo de agilizar el tratamiento de esta cuestión. Por eso voy a hacer una sugerencia para ver si podemos ordenar el debate.

Cada bloque tiene la oportunidad de expresar sus puntos de vista en una exposición en general; incluso el nuestro anticipó cuál será el sentido de su voto. Esto también está muy vinculado a cuál es la posición política de cada bancada, es decir, cuál será el temperamento que cada bloque adoptará finalmente, que es lo que tenemos que clarificar.

Nosotros no tendremos dudas en el momento de la votación, pues ya sabemos en qué sentido lo haremos; pero considero que cada bloque podría hacer un comentario en general para defender su posición. Esta es una posibilidad que tienen todas las bancadas. Entonces, ¿por qué no hacemos una exposición en general sobre el tema y luego procedemos a votar? Si pasamos directamente a la votación una vez conocidas las diversas posiciones no habrá diferencia entre hacer una o siete votaciones, si éstas son corridas.

La forma de economizar tiempo es que cada bancada exprese sus puntos de vista con respecto a las modificaciones y adiciones y que luego se proceda a la votación. La proposición es concreta y simple. Lo que importa es conocer la posición política de los distintos bloques: lo que se logra con una exposición en general.

**Sr. Baglini.** — Ya lo hicimos hace una semana, cuando tratamos el proyecto en esta Cámara.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Caviglia.** — Señor presidente: la cuestión está claramente estipulada en el artículo 71 de la Constitución Nacional. Dicho artículo establece que un proyecto sancionado por una Cámara y modificado por la Cámara revisora —haya si—

corregido o haya sufrido alguna adición—de volver a la Cámara de origen, y ésta —en caso la Cámara de Diputados— se debe pronunciar sobre las adiciones o correcciones que haya incorporado el otro cuerpo.

Además, esto surge de una lógica pura: ¿volvamos a entrar a discutir algo que ya aprobamos en este cuerpo? Solamente nos tenemos que limitar a lo corregido o adicionado por el Honorable Senado. De modo que el debate tiene que girar en torno a las modificaciones que produjo el Senado; no tiene absolutamente ningún sentido que tomemos la norma *in totum* y volvamos a discutirla.

Entonces, en un buen entendimiento y en una buena interpretación de lo que establece la Constitución Nacional deberíamos limitarnos a votar y definir con nuestro voto la posición de esta Cámara respecto de las adiciones y modificaciones introducidas por el Honorable Senado independientemente de que para salvar un conflicto político y lograr un acuerdo entre todas las bancadas se realice una exposición general.

**Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Aramouni.** — Señor presidente: es evidente cuando no se tiene en cuenta la sana técnica legislativa en la aprobación de una iniciativa y se incurre en estas sanciones de proyectos de ley ómnibus, si más tarde la norma no es aprobada por la Cámara revisora se presentan estas dificultades.

Considero que lo que debemos hacer es lo que indica la Constitución y lo que han señalado los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, en particular el señor diputado Rosso, cuyo criterio comparto. Sin embargo, quiero apuntar que cuando un proyecto va a la Cámara de origen ésta lo tiene que tratar como si fuera en un tratamiento normal, en el cual se puede analizar el dictamen de minoría si el de mayoría es rechazado. De modo que no se puede evitar que este proyecto que vuelve a la Cámara de origen luego de que el Senado le introdujera modificaciones, trate como si fuera una única ley. Digo esto independientemente de las modificaciones que una sucesiva serie de leyes, a nuestro criterio tiene un carácter de unidad, pues es sancionando una ley aunque sus capítulos sean sobre distintos ordenamientos legales. Es el criterio que debemos aplicar para entrar en la consideración en particular de lo que ya sancionó la Cámara de Diputados, sin darnos antes respecto de la sanción del Se-

Si la decisión del Senado resultara conformada por este cuerpo, evidentemente no podríamos introducirle modificaciones en particular, salvo que esta Cámara acordara, como lo señaló correctamente el señor diputado Gentile, excluir el último título referido a la modificación de la ley de procedimientos en materia tributaria.

Considero que aquí no caben otras discusiones, sin perjuicio de lo cual rescato la posibilidad de que los bloques se pronuncien sobre cada uno de los aspectos de los que trata esta normativa, reiterando o no los conceptos expuestos en la consideración anterior.

Me parece oportuno resolver esta cuestión de procedimiento por medio de una votación para optar por una decisión, y así ponernos a debatir directamente el tema.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: en alguna ocasión esta Cámara adoptó el procedimiento de generar una tercera alternativa en la sanción de una ley, y en lugar de tomar la posición de la Cámara de origen o la de la revisora sumó una tercera opción; pero lo cierto es que un mal precedente no puede ser señalado como antecedente.

Para cumplir lo que dispone el artículo 71 de la Constitución Nacional, en esta ocasión no se puede votar por títulos o por artículos porque eso generaría la posibilidad de que un capítulo fuese aprobado en un sentido y otro en uno diferente, lo que conduciría nuevamente a aquella tercera alternativa. Nuestra Carta Magna ha querido que sean exclusivamente dos las alternativas; vale la pena repetirlo: lo que se ha generado en la Cámara de origen o lo que se ha enmendado en la Cámara revisora.

Interpretando la norma procedimental de la Constitución, de ninguna manera podría hacerse más de una votación porque significaría abrir el camino para una tercera alternativa. Ello no obsta para que los discusiones verse sobre cada uno de los capítulos modificados por el Honorable Senado, pero exclusivamente a los fines de tomar una decisión global sobre la sanción originaria de esta Cámara o de la Cámara revisora.

Lo que no se compadece con la letra ni con el espíritu de la Constitución es la votación fragmentada o por capítulos, porque se crearía una tercera alternativa. La sanción volvería al Senado para allí hacerse una revisión de la revisión y luego volvería a esta Cámara para la revisión de la revisión de la revisión, y así sucesivamente en una cadena que no se agotaría nunca.

Insisto en que debe votarse una sola vez y en forma global, aceptándose las enmiendas introducidas por el Senado o insistiéndose en la sanción de esta Honorable Cámara.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Brest.** — Señor presidente: modestamente me permito señalar que las dos posiciones expuestas en esta Cámara son correctas.

Si nos atuviéramos al criterio estricto de la Constitución no tendríamos que estar discutiendo este tipo de leyes colectivas; esto es algo que no se ha dicho y parece que lo hubiéramos olvidado.

Tampoco se reparó en que el título IX introducido en la sanción del Senado, por el que se modifica la ley 11.683 —de procedimiento tributario—, fue rechazado por esta Cámara la semana pasada. Por ello es que no nos tenemos que sentir con complejo de culpa; debemos rechazar este agregado que el Senado introdujo en forma indebida. Esta no es la sanción que fue enviada al Senado.

No podemos permitir la incorporación de este título, que tendría que sancionarse bajo la forma de un nuevo proyecto de ley. Estamos dispuestos a discutir sobre los primeros ocho títulos, pero no podemos olvidar lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución Nacional, según el cual un proyecto rechazado por una de las Cámaras no puede ser tratado nuevamente el mismo año.

De esta forma, nos resistimos a incorporar en la sanción definitiva el título IX agregado por el Honorable Senado.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Dumón.** — Señor presidente: no nos hemos puesto de acuerdo sobre la interpretación de la Constitución, pero indudablemente el señor diputado Brest ha traído claridad sobre este tema.

Considero que para una adecuada interpretación de la Constitución en estas cuestiones debemos recurrir a la reglamentación que de ella se ha hecho precisamente en el reglamento de esta Honorable Cámara.

Por tal motivo solicito que por Secretaría se dé lectura del artículo 176 del reglamento.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: opino que los distintos bloques que componen esta Cámara se han expresado sobre esta cuestión.

**Sr. Dumón.** — Señor presidente: solicito que antes de que haga uso de la palabra el señor

diputado por La Pampa se dé lectura del artículo 176 del reglamento de esta Honorable Cámara.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Por Secretaría se dará lectura del artículo 176 del reglamento.

**Sr. Secretario (Puebla).** — Dice así: "Toda votación se contraerá a un solo y determinado artículo, proposición o período; mas cuando éstos contengan varias ideas separables, se votará por partes si así lo pidiere cualquier diputado."

**Sr. Presidente (Alasino).** — Evidentemente, este artículo está vinculado con la primera discusión.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: los distintos bloques ya han expresado sus puntos de vista. Nosotros hemos manifestado el nuestro con un objetivo claro y preciso, que es el de facilitar una rápida sanción. Otros bloques y señores diputados posteriormente presentaron otras ideas que sin duda mejoraron nuestra posición, y así lo hemos reconocido.

Existen antecedentes en esta Cámara, de votaciones de enmiendas introducidas en proyectos que fueron pasados en revisión, que luego fueron leyes de la Nación y que no han sido declaradas inconstitucionales. En mi opinión, el cuerpo debe decidir cuál es la mejor forma de llevar adelante esta votación. Solicito que se ponga a votación cuál es el temperamento que va a adoptar esta Cámara. Formulo moción concreta en el sentido de que cada bloque político exprese su punto de vista en una suerte de discusión en general y que luego mediante una sola votación se determine si se aceptan o rechazan las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión.

**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia quiere efectuar una breve reflexión sobre la moción del señor diputado Matzkin.

Evidentemente, la Constitución Nacional admite la posibilidad de una corrección o de un agregado, sin indicar el grado de importancia que debe tener la adición. De manera que, independientemente de la opinión de los señores diputados, la Cámara debería someterse al procedimiento con que ha venido resolviendo situaciones similares.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Brest.** — Señor presidente: el título relativo al procedimiento tributario nunca estuvo contenido en el proyecto sobre financiamiento del sistema previsional.



**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia entiende que ello no enerva lo que se ha expresado en este recinto.

**Sr. Brest.** — En esta Cámara lo trató de introducir el señor diputado López Arias y fue rechazado. Por ello se agregó en el Honorable Senado. No es materia de la iniciativa que estamos considerando, porque el título atañe a la ley de procedimiento tributario y nosotros estamos tratando el financiamiento al sistema provisional. Entonces, en realidad, el título IX es un proyecto que tiene inicio en el Senado que debería considerarse en revisión en Diputados.

**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia advierte que lo que ocurre es que este proyecto de ley incluye temas muy diversos.

Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, decidirá mediante una votación la moción del señor diputado Matzkin, que implicará que el bloque hará un análisis minucioso de las objeciones o agregados que ha llevado a cabo el Honorable Senado, formulando su opinión. Al término de esas exposiciones, mediante una sola votación se aprobarán o rechazarán las modificaciones y agregados que ha introducido el Honorable Senado.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Cortese.** — Señor presidente: ¿se ha tomado conciencia de que con esta mecánica se obliga a quienes no coinciden con algunos de los aspectos modificados por el Senado tengan que votar por la negativa? Se está obligando a una oposición, aun cuando los distintos bloques que expresan el pensamiento político del Congreso tengan predisposición para votar por la afirmativa de manera parcial. ¿Se toma conciencia de que se revisa una jurisprudencia de toda la vida de esta Cámara en el sentido de aceptar votaciones que sabidamente permiten decir que los temas en relación con los cuales estamos de acuerdo parcialmente con el Senado? Con este criterio, ¿se toma conciencia de ello?

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Figueras.** — Señor presidente: fíjense que estamos en presencia de dos cuestiones distintas. Por un lado, el Honorable Senado ha introducido reformas al proyecto de ley, en relación con las cuales nuestro bloque estaría de acuerdo, y por el otro, se ha incorporado un título IX, con el cual obviamente estamos en desacuerdo. En consecuencia, sugiero que se voten globalmente los ocho primeros títulos y que el noveno sea considerado aparte.

**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia advierte que eso es precisamente lo que se está discutiendo desde un principio, es decir, si se efectúan unas pocas votaciones o varias.

**Sr. Figueras.** — Considero que en la forma que he sugerido se acelerará la votación.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Vanossi.** — Señor presidente: creo que a esta altura del debate se hace muy difícil poder llegar a una conclusión basada en la ortodoxia jurídica, porque la cuestión ha dejado de ser tal para pasar a ser eminentemente política; por lo tanto, la decisión será política porque en el origen de todo esto, evidentemente, hay un cambio sustancial.

Nunca los Constituyentes contemplaron o previeron la posibilidad de que se sancionaran leyes como la que en este momento estamos considerando. Ellos no tuvieron in mente la existencia de estas leyes ómnibus, monstruosamente abarcativas de una infinidad de temas dispares muy difíciles de armonizar o de hacer cohabitar entre sí.

Por lo tanto, no podemos aplicar la ortodoxia de reglas interpretativas que fueron pensadas o calibradas para épocas o tiempos en los cuales se sancionaban leyes que poseían una unidad temática, a estas normas que no tienen esa unidad, que son ómnibus o colectivas. En relación con éstas, evidentemente hay que aplicar reglas heteréneas o heterodoxas, lo cual —muy que nos pese— se impone por la lógica de la realidad.

Lo importante es que cualquiera sea el procedimiento que adoptemos se respeten las etapas que contempla la Constitución en el artículo al cual nos referimos, así como también las mayorías allí exigidas.

Tampoco pasó por la cabeza de los Constituyentes la hipótesis que varias veces se ha dado en esta Cámara en cuanto a que una de las dos Cámaras modificara el contenido de su sanción anterior al tiempo de intervenir en las etapas de revisión o de insistencia. Eso no figura en ninguno de los artículos de la Constitución; sin embargo, aquí ha ocurrido en alguna oportunidad. Lo que sí hemos exigido y tenido presente es que en esos casos siempre se respeten las distintas etapas previstas en el artículo en cuestión, ninguna de las cuales debe ser saltada. Es decir que con respecto a todo el objeto normativo que se va a sancionar y a la totalidad del contenido que se convertirá en ley deben cumplirse las votaciones y las etapas previstas, ninguna de las cuales puede ser objeto de preferencia.



Por las razones que he expuesto, pienso que hoy no podemos manejarnos con criterios ortodoxos porque el propio proyecto de ley es un modelo de heterodoxia y de herejía desde el punto de vista de la universalidad de los temas que abarca. Lo importante es facilitar el debate y la votación a fin de que en la forma más cristalina posible y sin ninguna coerción cada uno de los señores diputados pueda expresar el sentido de su voto y no sentirse cohibido o condicionado por una mecánica que no está adecuada al tipo de norma que vamos a sancionar. Por ello, comparto la opinión de algunos tratadistas como Bidegain, quien en su obra sobre derecho constitucional sostiene que se pueden efectuar votaciones separadas cuando se está en presencia de un modelo heterodoxo y fuera de lo tradicional, como es el caso del proyecto de ley que estamos considerando.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Caviglia.** — Señor presidente: debemos tener en cuenta distintos aspectos.

En primer lugar, todos estamos de acuerdo en que no vamos a considerar aquellas disposiciones del proyecto de ley que no han sido modificadas por el Honorable Senado. En segundo término, se presenta el problema de las adiciones y correcciones que la Cámara alta ha introducido en nuestra sanción. Al respecto existen dos criterios: votar globalmente o hacerlo por títulos. Independientemente de lo que ha manifestado el señor diputado Vanossi en cuanto a la dinámica que ha experimentado el derecho constitucional y al hecho de que los Constituyentes no tuvieron en cuenta en su momento esta situación, creo que más allá de lo que sostengan algunos tratadistas como Bidegain es facultad de este cuerpo determinar de qué forma se va a realizar la votación.

Por lo tanto, solicito que sólo sea sometido a consideración todo aquello que haya sido adicionado o corregido por el Senado, y que no se traten las demás cuestiones acerca de las cuales ya existe una firme voluntad por parte de esta Cámara. Ello, más allá de que todos los bloques —como manifestara el señor diputado Matzkin— puedan efectuar una exposición general sobre el proyecto que viene del Senado.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: ocurre que el cuestionamiento surge del hecho de que el proyecto en consideración no es el mismo que fue comunicado al Honorable Senado, porque a aquél se le ha adicionado un título en forma

ilegal si tenemos en cuenta el procedimiento en formación y sanción de las leyes.

El proyecto que fue al Senado no contenía el título IX. Es más: originariamente el proyecto que llegó a esta Cámara no tenía dicho título. Aquí en su momento existió la pretensión de introducirlo, pero fue rechazado.

Sucede que se trata de toda una ley de procedimiento tributario que realmente debió examinarse por otro andarivel. Debía iniciarse en el Senado y esta Cámara debió tener la posibilidad de su revisión o rechazo; me refiero a la Cámara de Diputados.

Sugiero, entonces, el temperamento de que no se considere el título IX, reformas a la ley de procedimiento tributario, dentro del marco de la atribución del Senado en lo que hace a introducir un aditamento, adición o corrección sino que se le dé el carácter de una nueva norma y se otorgue autonomía e independencia a su tratamiento para posibilitar su aceptación o rechazo.

Esto significa que el resto del proyecto sancionado por el Senado, si se vota de una sola vez, será para aceptar las modificaciones o para insistir en la sanción de la Cámara de Diputados.

Entonces, lo que propongo es que se separe el título IX de la sanción del Senado, ya que se vincula con el procedimiento tributario, y se le dé el carácter de nuevo proyecto, iniciado en el Senado, porque por la banderola quieren introducir con visos de legalidad una iniciativa que nada tiene que ver con el proyecto sancionado por esta Cámara.

**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia entiende que este cuerpo no puede inventar procedimientos ya que tiene una sola forma de expresarse: por sí o por no; y si le parece que lo que ha hecho el Senado es manifestamente ilegal, deberá expresarse en forma negativa.

Por eso, la Presidencia entiende que es imposible que se arbitre un nuevo procedimiento para solucionar la cuestión.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: debe advertirse la gravedad del procedimiento unívoco, que no nos permite decidir sobre una violación constitucional intolerable, como es el hecho de que el Senado haya agregado un título VIII, que constituye una modificación tributaria para la cual que no puede asumir el carácter de cámara iniciadora, modificación que no estaba incluida en el proyecto originario ni en la sanción de la Cámara de Diputados.

¿Cómo es posible que se nos obligue a validar una violación constitucional de semejante carácter con una sola votación?

Estamos llegando al absurdo y esto tiene que estar en la mente de cada uno de los señores diputados. De lo contrario, va a llegar un momento en que en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto el Senado introduzca una modificación fijando la mayoría de edad a los 22 años, y vamos a tener que admitirla por ese mecanismo de la única votación.

**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia declara que el privilegio de la Cámara de Diputados es el de imponer contribuciones y no el de corregir procedimientos tributarios. Son dos cosas totalmente distintas.

**Sr. Gentile.** — Lo que la Presidencia ha dicho se aparta de lo que establece la Constitución. La Constitución se refiere a dictar leyes sobre contribuciones, y éste es un caso específico.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Es un problema referido a procedimientos tributarios, señor diputado.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Baglini.** — El título VIII, que se refiere a tasa judicial, establece un impuesto.

**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia entiende que según la Constitución Nacional todas estas manifestaciones deben traducirse en la aceptación o el rechazo de las enmiendas. A los efectos de dar legitimidad a esta decisión, respecto de la cual todos los señores diputados se han manifestado, se procederá a votar la propuesta del señor diputado Matzkin. Si es aprobada, avanzaremos en un sentido, y si es rechazada optaremos por otra alternativa.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Alasino).** — La Presidencia advierte a los señores diputados que ya han podido expresar sus puntos de vista. Por otra parte, es sabido que estas cuestiones se dirimen mediante votaciones.

La lancada radical debe admitir...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Manzano.** — Señor presidente: sería conveniente pasar a un breve cuarto intermedio, con permanencia de los señores diputados en las bancas, a efectos de evitar el fracaso de esta sesión.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia ruega al señor diputado por Mendoza que clarifique la situación en que se encuentra el debate.

**Sr. Manzano.** — Señor presidente: ante el riesgo de que fracase la sesión y la posibilidad de pasar a un breve cuarto intermedio, con permanencia de los señores diputados en las bancas, me permite sugerir esta última alternativa, ya que estamos tratando un proyecto de ley que fue pasado en revisión al Honorable Senado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo los señores diputados en el recinto.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 47.

—A la hora 22 y 13:

**Sr. Presidente (Pierri).** — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Manzano.** — Señor presidente: resumiré lo que hemos acordado en el cuarto intermedio. Votaremos el proyecto de ley tal como ha venido del Honorable Senado.

Reitero la intención de nuestro bloque de obtener la aprobación del texto remitido por el Senado en tres votaciones: una abarcaría los títulos I a VII inclusive, y luego se votarían individualmente los títulos VIII y IX.

Para el caso de aprobarse los mencionados títulos —lo cual significaría la sanción del proyecto de ley— estamos promoviendo la entrada en esta misma sesión de un proyecto de ley modificatorio del régimen de clausura previsto en el título IX, que atenúa la facultad del poder administrador y de la DGI de efectuar clausuras inmediatas, debiendo mediar para efectivizarse las mismas dos procedimientos previos verificados con acta y la intervención de un segundo funcionario, lo que impide la inmediatez que está prefigurada en la redacción actual del título IX. Ya hemos conversado con los miembros de los demás bloques respecto de la entrada de este proyecto y hemos obtenido su acuerdo.

La intención que nos mueve es lograr que esta noche ese proyecto sea sancionado por la Cámara de Diputados a fin de que el Senado pueda hacer lo propio cuanto antes. De esta manera, cuando el régimen se comience a aplicar en forma efectiva ya será en su forma atenuada, es decir, mediando dos intervenciones previas con acta y la participación de un funcionario superior jerárquico que no sea el mismo que actuó anteriormente.

Esto sería para el supuesto de que obtuviéramos la mayoría suficiente para la aprobación del título IX.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Si hay asentimiento, se procederá en la forma indicada.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: muy brevemente trataré de explicar las principales modificaciones que introdujo el Senado de la Nación.

En el título I, referido al financiamiento del régimen nacional de previsión social, el Senado no ha introducido modificaciones.

En el título II, vinculado al impuesto al valor agregado, las modificaciones efectuadas son de carácter formal. Así, se cambia donde se hace referencia al Instituto Nacional de Previsión Social, mencionándose en su lugar la Subsecretaría de Seguridad Social. Esto no merece para nosotros un mayor comentario y vamos a recomendar su aceptación.

El título III es bastante más extenso y concierne al impuesto a los combustibles líquidos y gas natural. Aquí hay distintas modificaciones introducidas por el Senado, las más importantes de las cuales consisten, desde mi punto de vista, en que se cambia el sujeto pasivo, es decir, el responsable o contribuyente.

En este sentido creo que la sanción de esta Cámara es más equitativa y cumple mejor las previsiones de la ley al buscar un equilibrio entre todos los participantes. De todas maneras, hemos resuelto privilegiar la sanción de la ley por las razones antes dadas y vamos a subsanar, o pretender subsanar, la dificultad que aquí se produce de la forma que ya anticipó el señor diputado Manzano.

Efectivamente estamos dejando en Secretaría un proyecto de ley firmado por varios señores diputados que persigue dos propósitos básicos: uno es el de insistir en el criterio adoptado en la sanción de esta Cámara en cuanto al sujeto pasivo del impuesto a los combustibles; el otro es atemperar el régimen de clausuras previas previsto en el título IX, tema al que luego nos referiremos con mayor detalle. Vamos a solicitar, asimismo, que se resuelva dar entrada al citado proyecto y tratarlo sobre tablas, para lo cual será menester una votación especial a los efectos de apartarnos del reglamento.

Hay modificaciones en el impuesto a los combustibles que tienen un carácter menor y que se complementan con la modificación inicial referida al hecho imponible.

También se han efectuado modificaciones formales a la tabla que establece el monto de los impuestos.

Recuerdo que a pedido de varios señores diputados se estableció a manera de garantía que el Fondo Nacional de la Vivienda deberá contar con el equivalente a 70 millones de dólares por mes, y en caso de que dicha cifra disminuyese, el Tesoro debería aportar la cantidad faltante. Pero el Honorable Senado, con muy buen criterio, elevó la suma a 75 millones de dólares, con lo cual dicho fondo queda absolutamente garantizado.

También se han realizado modificaciones en el capítulo II del proyecto referido al impuesto sobre los combustibles. Por medio de una de ellas se faculta al Poder Ejecutivo a gravar el gas natural licuado. Esta propuesta había sido formulada por la Comisión de Energía y Combustibles al considerarse el tema en este recinto pero debido a un error de interpretación no fue aceptada y ahora el Senado la incorpora.

Asimismo se han realizado otras modificaciones técnicas a fin de dar mayor precisión a la norma.

Se elimina el concepto de depósito fiscal al modificarse lo relativo al hecho imponible.

La presente norma requiere la adhesión de las provincias a efectos de hacer coparticipables algunos tributos que en ella se estipulan. Con respecto a este punto, el Honorable Senado agrega la etapa de la industrialización juntamente con la etapa de expendio en el impuesto sobre los ingresos brutos. Desde nuestro punto de vista, la redacción establecida es sumamente clara y deja en libertad a las provincias para gravar la etapa primaria o de producción, puesto que la ley no tiene condicionamientos en este sentido. Respeta los plazos, fechas, montos y alícuotas con que las provincias pueden gravar este impuesto. Estas son las principales modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el título III, referido al impuesto sobre los combustibles.

El título IV, relacionado con el Fondo Nacional de la Vivienda, tiene como principal modificación la que he mencionado hace instantes por la cual se aumenta la garantía mínima de 70 a 75 millones de dólares.

Además, en este título se ha introducido una modificación fundamental para las provincias, mediante la que se las equipara con la Subsecretaría de Vivienda en la toma de decisiones y en la instrumentación de la política del sector, reconociéndoles el carácter de órganos de aplicación de la ley. Esta es una modificación importante y fundamentalmente tiene un claro sentido federal porque da una participación

y activa a un instituto que creamos con nuestra sanción y que solidifica la del Honorable Senado.

El título V está vinculado a la derogación de los llamados regímenes de jubilaciones especiales.

Una de las modificaciones consiste en la supresión de un párrafo vinculado a lo que se denominó en llamar la ratificación de los derechos adquiridos. Según nuestra interpretación eso no modifica en realidad la posibilidad de que se considere tener derechos adquiridos más allá de lo que nosotros lo estableciéramos, puesto que pensamos que lo que habíamos incorporado era exclusivamente de carácter declarativo y al eliminarlo no cambia básicamente este principio elemental del derecho.

En el título VI, referido al impuesto a los bienes no afectados a la actividad productiva, se introducen varias modificaciones. La mayoría de ellas son de carácter teórico, formal y de precisión técnica, con las cuales no tenemos inconvenientes. Por esta razón no nos extenderemos demasiado en explicaciones sino que solamente presentamos algunos comentarios vinculados con las modificaciones.

Nosotros habíamos previsto originalmente que los bienes gravados con este impuesto o formen parte del activo computable los depósitos, en dinero, dentro del sistema institucionalizado tuviesen aquellos que pudieran resultar contribuyentes del impuesto. Y también habíamos designado como activos gravados a las obligaciones negociables.

La modificación del Senado consiste en excluirlos. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en aceptarla, fundamentalmente por las explicaciones que se nos dieron. Decimos que en principio no tenemos inconveniente con esa modificación porque hace muy poco tiempo hemos instituido un régimen muy favorable para las obligaciones negociables, cuyo objetivo es generar un mercado de capitales, donde proveamos servicios o sacrificios fiscales que permitieran activar el desarrollo de dicho mercado a través de este título que, por otro lado, la plaza financiera.

El hecho de que las colocaciones en dinero formen parte de los activos gravables obedece a nuestra imperiosa necesidad de atraer capitales cada vez mayores; incluso siempre llamamos con cierta angustia aquellos que se van del país. Pensamos que para facilitar su salida tendríamos que destrabar, desde el punto de vista impositivo, esta posibilidad.

Entre las modificaciones sustanciales que merecido este proyecto por el cual se crea un nuevo impuesto, iniciativa que hemos desea-

do, valorado y que queremos que rápidamente se lleve adelante porque tiene una relación directa con la equidad tributaria y con la capacidad contributiva de todos aquellos que están en condiciones de aportar; sobre todo teniendo en cuenta que este impuesto está destinado —sin intermediarios— a reforzar las cajas de jubilaciones.

En el título VII, vinculado al destino de los recursos de las privatizaciones, el Senado introduce una modificación referida al destino que tendrán las acciones pertenecientes a las dos empresas concesionarias de ENTEL. Esta Cámara había dispuesto en su momento que el producido de la venta de esas acciones iba a pasar al Instituto Nacional de Previsión Social. La modificación consiste en que no es el producido de la venta sino la propiedad de las acciones lo que se transfiere a dicho instituto.

Y el instituto podrá venderlas o podrá tomar una decisión en cuanto a qué quiere hacer con ellas. En nuestro concepto —lo anticipamos— sería bueno que las vendieran con un programa que se establecerá, y que su producido sea aplicado a cancelar importantes compromisos con el sector, no obstante lo cual ello quedará a decisión de la secretaría respectiva.

Asimismo la Cámara de Senadores introdujo dos títulos nuevos. Uno de ellos es muy breve. Me refiero al título VIII, sobre modificaciones a la Ley de Tasas Judiciales. Se trata de algo de muy fácil comprensión pues lo que se pretende es desgravar, es decir que no pague la tasa judicial el Instituto Nacional de Previsión Social respecto de las actuaciones tendientes al cobro de aportes, contribuciones y demás obligaciones de la seguridad social. A nuestro criterio, esto no merece mayores comentarios, nos parece razonable y recomendamos su aceptación.

El título IX, de procedimiento tributario, sin duda dará lugar a opiniones encontradas durante su consideración. Sin embargo, este tema no es nuevo para el conocimiento de los señores diputados, porque aproximadamente un par de meses atrás el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley de reforma tributaria en el cual incluía modificaciones parciales a la ley 11.683 en algunos aspectos destacados. En general todas esas modificaciones estaban en línea con el control de la evasión, con la posibilidad de que el organismo de fiscalización y de recaudación tuviera mayor cantidad de instrumentos vinculados con el control de la evasión.

Esta sola circunstancia nos predispone en principio a brindar a ese organismo todos los

instrumentos que legalmente le podemos dar para combatir este mal deporte nacional que se ha dado en llamar evasión fiscal.

En ese sentido recuerdo que en los casi seis años de gobierno radical se introdujeron varias modificaciones a la ley de procedimiento. No recuerdo exactamente el número, pero sí que fueron varias, y casi todas ellas destinadas a consagrar más institutos para el control de la evasión. Yo diría que, sin excepción —por lo menos hasta donde llega mi memoria—, nunca tuvimos inconveniente en dar a la administración fiscal armas para combatir la evasión, y siempre tuvimos la mejor predisposición incluso para brindar recursos destinados a financiar todas las tareas relacionadas con esta cuestión que tanto nos preocupa.

Este es un antecedente que quiero resaltar porque casi invariablemente ha habido una predisposición de la bancada Justicialista para facilitar la creación de todos los instrumentos destinados a controlar la evasión fiscal. Y ahora justamente estamos hablando de eso: dar al organismo recaudador algunos instrumentos más de control.

El artículo principal del título IX consta de cinco puntos. Formularé un breve comentario sobre cada uno de ellos.

Mediante el punto 1 se modifica el artículo 25 de la Ley de Procedimientos Tributarios, artículo que forma parte de un capítulo vinculado con la determinación y la percepción de los impuestos, y básicamente se refiere a distintos tipos de presunciones que pueden ser usadas por la Dirección General Impositiva cuando no encuentra un elemento que le sirva para algún tipo de determinación cierta. En especial esto se relaciona con el impuesto a las ganancias y el IVA, aunque también puede corresponder a otros tributos.

Este punto 1 tiene dos apartados: el a) y el b).

¿Qué es lo que pretendemos con el apartado a)? Se trata de una presunción de derecho, que no admite prueba en contrario, con respecto a los casos en que se determinen ventas en negro. Queremos que la proporción de ventas en negro o marginales, como las denomina la iniciativa, con respecto al total de las ventas, se pueda utilizar como una presunción de derecho por el órgano fiscalizador para proyectar esa diferencia en los 12 meses anteriores, si el período analizado fue menor a un mes, y en los ejercicios no prescritos en los casos en que se hubiera considerado todo un período. En síntesis, es una presunción de derecho por la que las ventas en negro pueden servir para efectuar determinaciones en períodos anteriores.

Otro aspecto de estas presunciones se vincula con los índices que puede tomar la DGI para efectuar estimaciones. Así se dan algunas pautas, como los gastos en salarios, en fletes o en energía. Cuando se carece de contabilidad o de comprobantes entran a jugar esas presunciones en base a determinados índices. Cuando ello sucede, el contribuyente debe probar lo contrario; es una especie de inversión de la prueba. Estas son las modificaciones a la ley 11.683 que pretendemos introducir para facilitar el control de la evasión en el capítulo vinculado con las presunciones.

El segundo punto de los cinco que tiene el artículo 36 de la sanción del Senado agrega un párrafo al artículo 40, que forma parte de un capítulo más amplio, referido a los aspectos de verificación y fiscalización. La DGI ya tiene facultades para exigir libros, anotaciones y comprobantes a los contribuyentes. Con esta modificación ampliamos esas facultades y otorgamos cierta flexibilidad a los pequeños contribuyentes; es decir, a aquellos que por su tamaño no tienen necesidad de contabilizar un gran número de operaciones. En síntesis, se pretende ampliar facultades que ya tiene la DGI.

El punto 3 reemplaza a un artículo que agregamos en mayo de 1986. Se vincula con aquellas empresas que utilizan sistema de computación para sus registraciones. Desco recordar a los señores diputados que las nuevas técnicas de contabilidad vinculadas con sistemas de computación han tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos. En muchos casos ese desarrollo ha sido más vertiginoso que la posibilidad técnica del organismo de fiscalización para llegar a verificarlos. Aquí se producen muchas ventas en negro y muchos delitos vinculados con la evasión fiscal.

En este sentido pretendemos que quienes utilizan sistemas de computación y los llamados soportes magnéticos informen sobre los equipos que poseen. Esta obligación, incluso, se extiende a los servicios contratados con terceros. Se trata de que la DGI tenga algún tipo de conocimiento y de acceso a los servicios de computación. Este nuevo artículo hace algunos agregados, ampliando esas facultades, pues inclusive se pueden requerir detalles de programas, diseños, etcétera. El objetivo siempre es el mismo: lograr una fiscalización efectiva. Esta facultad siempre se extiende a los servicios contratados, que constituyen una modalidad existente en la plaza y que se encuentra muy desarrollada.

El tema que ha generado entre los señores diputados mayores comentarios es el punto 4, mediante el cual se incorpora una nueva norma

re las posibilidades de clausura. Obviamente, la clausura no es un hecho nuevo. De acuerdo con el agregado que se propicia, el inspector actuante de la DGI puede efectuar la clausura únicamente por la no emisión de la factura correspondiente y no por cualquier otra razón o motivo. No existe un listado de casos a raíz de los cuales el inspector esté facultado para disponer la clausura; la única razón es la no emisión de facturas, documentos equivalentes o documentos habitualmente usados.

En caso de que el inspector actuante disponga la clausura, debe labrarse un acta en donde conste este hecho. El acta debe reunir una condición: que sea firmada como testigo por la persona que efectuó la denuncia. En ese caso, la clausura puede durar de tres a diez días corridos. Como anticipo para el señor diputado Manó, nuestra intención es flexibilizar esta posición que algunos señores diputados entienden bastante dura. Es por ello que en el nuevo proyecto de ley consagramos esa flexibilización.

Básicamente, la clausura se aplica en caso de reiteración. Es decir que no es suficiente que el inspector detecte una venta sin factura sino que tiene que existir una reiteración de esa circunstancia. Además, la posición se flexibiliza en el sentido de que no es suficiente la decisión del inspector actuante sino que también se requiere del juez administrativo. Recordemos que la Ley 11.683 determina quiénes pueden ser jueces administrativos.

Queremos que de esta manera flexibilizamos la disposición a la vez que seguimos permitiendo al fisco mejorar su sistema de percepción y fiscalización.

De cualquier manera, recuerdo que está en vigencia la ley 20.680 —comúnmente llamada ley de abastecimiento— sancionada en el año 1974; es decir que tiene varios años de existencia. Esa norma —aplicada en muchas oportunidades, por cierto— establece criterios muchísimo más severos que los que nosotros en este momento encontramos como observables.

El inspector tiene facultades legales para clausurar por hasta tres días en forma efectiva preventiva, sin posibilidad de que se recurra al efecto suspensivo ante la justicia. La ley prevé diez distintas razones por las que un sector puede actuar de esa manera. No tenemos conocimiento de que por aplicación de la ley se hayan producido situaciones graves abusos que merecieran destacarse en la primera página de los diarios.

Entonces, dar facultades a la Dirección General Impositiva para que pueda efectuar el control de este mal llamado deporte nacional,

habla de equidad tributaria y de una mejor distribución de la carga impositiva. También habla básicamente de la posibilidad de que nosotros, desde el gobierno, podamos acceder a la prestación de mejores servicios, sobre todo a los más necesitados, por tener la posibilidad de contar con mayores recursos.

**Sr. Martínez Raymonda.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

**Sr. Matzkin.** — Sí señor diputado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Martínez Raymonda.** — Señor presidente: a los efectos de precisar uno de los puntos incorporados por el Senado, deseo señalar que el artículo 31, en su segundo párrafo dice con respecto al destino de los recursos provenientes de las privatizaciones que sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se transferirá en propiedad al Instituto Nacional de Previsión Social la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado nacional de las sociedades licenciatarias Norte S. A. y Sur S. A. de los servicios de telecomunicaciones.

Descaba saber si ese nombre que tienen las sociedades es el actual, porque originariamente tenían otro nombre en la adjudicación. ¿Se trata de las dos sociedades en que quedó dividida ENTEL?

**Sr. Matzkin.** — La sanción originaria de esta Cámara también habla de las sociedades licenciatarias Norte S. A. y Sur S. A., es decir que si se ha deslizado un error en la denominación, proviene de esta Cámara.

**Sr. Baglini.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

**Sr. Matzkin.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: el nombre de las sociedades responde al hecho de que antes de la privatización, la persona de derecho público que representa a ENTEL se transforma en dos sociedades, que se llaman sociedades licenciatarias Norte y Sur. Se constituye la sociedad anónima y luego se produce la privatización. Es decir que el remanente de acciones corresponde a las sociedades licenciatarias, no obstante que luego las adjudicatarias de las acciones de estas sociedades han resultado ser en un caso el grupo Telecom y en el otro el grupo Telefónica Argentina. Este

es el itinerario que siguieron luego de la fijación del decreto marco que dispuso la privatización de ENTEL.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Brest.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

**Sr. Matzkin.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Brest.** — Señor presidente: las dos sociedades se llaman licenciataria Norte S. A. y licenciataria Sur S. A., con el aditamento de que los servicios en competencia y los servicios prestados en forma internacional también están adjudicados en una parte equivalente a cada una de las dos licenciatarias. Es decir que las acciones que estarían en juego abarcarían también estas dos prestaciones en competencia e internacional.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: con las aclaraciones hechas, los comentarios realizados y las opiniones brindadas queda expresada la voluntad de la bancada Justicialista de aprobar las modificaciones introducidas por el Senado de la Nación.

Recuerdo a la Presidencia la petición que formulara en el sentido de que la Cámara dé entrada a un proyecto de ley que obra en Secretaría y que seguramente en el momento oportuno se pondrá en discusión. Nuestro deseo es que esto se haga lo más rápido posible.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: conforme al procedimiento adoptado, en una sola exposición vamos a considerar globalmente los títulos I a VII e individualmente los títulos VIII y IX de este proyecto de ley.

De acuerdo con las aseveraciones del señor diputado Matzkin y con la realidad, nos encontramos con un título I que carece de reformas. Un título II, que se refiere al IVA afectado al régimen nacional de previsión social, que posee reformas de nomenclatura. Un título IV, vinculado con el FONAVI, donde únicamente se aumenta en cinco millones de dólares la garantía fijada por esta Cámara. En el título V, que deroga las jubilaciones especiales, se hacen agregados a la sanción original de esta Cámara y se suprime un párrafo que, como ha dicho el señor diputado Matzkin, no altera la esencia de la cuestión. En el título VII, que se refiere al

destino de los recursos provenientes de las privatizaciones, las modificaciones del Honorable Senado trasuntan la voluntad de mantener las acciones de las sociedades licenciatarias de telecomunicaciones en el sistema de previsión social.

Es decir que todos estos títulos no ofrecen dificultades para su aprobación dentro de la técnica a la que nos vemos constreñidos como una Cámara actúa en segunda revisión, que en muchos casos, por lo menos para quienes se expresaron en el primer tratamiento de la cuestión y se pronunciaron en contra del proyecto, es como optar entre Guatemala y guatepeor. No es la mejor opción, pero hay que optar por una.

Estos cinco títulos de un total de siete merecían observaciones de nuestra parte, teniendo en cuenta que va a haber una sola votación global nos vemos obligados a definirnos sobre la aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, no obstante que sería distinta la conclusión final si hubiésemos podido efectuar una votación título por título y en algunos casos por artículo.

En el título que trata sobre el régimen de combustibles probablemente, discusión más o menos, el hecho imponible de dicho impuesto que modificó el Senado tal vez está más de acuerdo con lo que planteábamos en la discusión en general desde este bloque, no así en el caso de los sujetos pasivos del impuesto, donde entre Guatemala y guatepeor lo mejor sería que los sujetos pasivos estuvieran abiertos a cualquiera. La sanción original de esta Cámara permitía que hubiera seis sujetos pasivos del impuesto, pero el Senado achicó esa cifra a tres que son sólo las refinadoras; menudo problema donde se consolida el oligopolio, está en una expresión de alto refinamiento.

El señor diputado Matzkin ha advertido con respecto al peligro de que este impuesto, que va a financiar al Fondo Nacional de la Vivienda —y por lo tanto, la construcción de viviendas en las provincias—, pierda participación y peso relativo.

Si no fuera por la decisión de la Cámara de modificar los valores en australes por unidad de litro en cada uno de los combustibles, lo cierto es que hasta el día de hoy han pasado más o menos tres o cuatro meses sin que se ajustara el monto del impuesto, no obstante que en algunos casos hubo subas en el valor de los combustibles e inflación, lo que deterioró la participación del Estado en la captura de la renta petrolera.



Adviértase que lo que habíamos sancionado consistía en que el Poder Ejecutivo se sintiera obligado a modificar los valores del impuesto si producía una pérdida de más del 10 por ciento. Es decir que en relación al precio de venta lo que significaba el impuesto, partiendo desde este momento en el futuro el impuesto perdería participación relativa, participación relativa que desde luego ganan las refinadoras.

Es decir que no ganará el usuario, para quien los precios seguirán siendo iguales o más altos que se modifican —como hubo amenazas por allí—, pero se le da participación en ese caso al Fondo Nacional de la Vivienda, que es que obtenía ese beneficio.

Lo que sancionó el Senado es una autorización que no es lo mismo que una obligación para el Poder Ejecutivo de modificar el impuesto en el caso de que se produjera un deterioro de más del 10 por ciento. Lo que aquí es imperativo, allá facultativo, y ya conocemos el uso que ha hecho de estas facultades el Poder Ejecutivo en materia que estamos tratando.

En cuanto al impuesto a los ingresos brutos aplicable por las provincias, lo que aquí era una mención que posibilitaba gravar las tres etapas —producción, industrialización y comercialización— pasa a ser un tributo definido solamente sobre dos etapas, quedando algo que no se menciona. Según la interpretación del señor diputado Matzkin, como el proyecto no establece nada, la etapa de producción puede ser gravada. Pero debo advertir que esto puede acarrear un severo conflicto de interpretación entre las provincias y la Nación. Recordemos que las provincias fueron amenazadas hace tres meses por el gobierno —cosa que ya se efectivizó de hecho— en el sentido de que verían perdida su participación en el impuesto luego de que la Nación les diga que están aplicando un gravamen que no pueden aplicar, y por lo tanto no entrarían en su distribución. Esto ya ocurrió con mayoría de las jurisdicciones, salvo cuatro que rechazaron en el plazo coactivo e imperativo que establecía para hacerlo el decreto 2.733, so pena de perder participación en la distribución del impuesto. Hoy tenemos nuevamente el mismo escenario.

Con respecto al impuesto sobre los bienes personales, el Senado introdujo una serie de modificaciones técnicas que en su gran mayoría importan una mejora, pero incorporó tres exenciones a las que no encuentro razón de ser, no obstante la exposición del señor miembro informante.

Si hoy una empresa tiene bienes dedicados a una actividad productiva, para el pago del impuesto a los activos no incorporados al proceso productivo —que sería, digamos, el primo hermano de este gravamen— computa los depósitos a plazo fijo, el dinero en caja de ahorro y las obligaciones negociables.

En oportunidad de tratar el proyecto de ley sobre obligaciones negociables ya hemos tenido una discusión sobre este tema, porque como el producido del impuesto se destina al fondo educativo no quisimos restarle participación por las obligaciones negociables, ya que en definitiva lo que se aplica a estas obligaciones no es un impuesto que dificulte las transacciones del mercado: se aplica sobre la tenencia y no sobre la operación que consiste en la transferencia del título, de manera que no afecta al mercado sino que en todo caso captará al tenedor.

Como el Senado agregó que están eximidos del pago del impuesto a los depósitos a plazo fijo, se dan ciertas curiosidades. Quedan incorporados algunos otros bienes que si bien no están afectados a actividades productivas se podría pensar que tienen una mayor relación indirecta con alguna actividad productiva, y en cambio quedan eximidos los plazos fijos, las obligaciones negociables y los bienes inmateriales; esta última sería la tercera exención que introduce el Senado de la Nación.

Debemos recordar que estamos hablando de bienes —llaves, patentes, marcas de invención, etcétera— cuyos titulares son personas físicas. Al incluir todas estas cosas —y no se trata de cifras menores— no se protege al autor o inventor, sino que se está abriendo la puerta a una exención que no se tendría en condiciones similares en el caso de que se tratara de una empresa.

Pasemos ahora a los otros dos títulos, ya que al efectuarse la votación globalmente —tal como se dispuso— uno no pondría en peligro los siete primeros títulos por las observaciones que se han vertido. Distinto sería si tratáramos las emendas título por título y artículo por artículo.

El título VIII constituye una reforma a la ley que establece las tasas judiciales y entra en una materia que es de clara competencia originaria de esta Cámara. Se trata de un tema que no estaba en el proyecto original ni en la sanción de esta Cámara y que fue agregado por el Senado. Más allá de la corrección o incorrección de que este tipo de actuaciones paguen o no —porque entendemos que no sería altamente perjudicial eximir al Instituto Nacional de Previsión Social de la tasa de justicia—, lo que está en discusión es cuál es la cámara iniciadora en estos asuntos.



Sin perjuicio de un dictamen de cinco o seis juristas invitados al Senado, de los cuales sólo dos opinaron que esa Cámara podía establecer exenciones o rebajas impositivas, hasta el momento la Cámara de Diputados nunca ha reconocido esta doctrina que el Senado ha querido sentar.

El título sobre procedimiento tributario, rechazado por esta Cámara, renace como el ave Fénix de entre las cenizas en el texto sancionado por el Senado. Ni siquiera se rescata el valor de las discusiones que tuvieron lugar en este recinto sobre el tema del procedimiento tributario. El señor diputado Matzkin dijo que su bancada nunca le ha negado armas a la DGI. No puedo dejar de recordar que ya llevamos siete reformas al régimen de procedimiento tributario y que allá en el fondo de la historia, cinco años atrás, cuando se trataba la ley 23.314, el señor diputado Matzkin comparaba a la DGI con la Gestapo.

No tenemos dificultades en dar armas a la DGI, pero armas legales, las de la Convención de Ginebra, no balas "dum-dum" o bombas neutrónicas. ¿Quién quiere proteger al evasor? ¿Quién no está interesado en una mejor recaudación impositiva? Pero en los últimos tiempos estamos leyendo demasiado a Maquiavelo y por el camino de Maquiavelo no se llega al estado de derecho sino a la conflagración, al oscurantismo y a la guerra de secesión.

Nosotros inventamos la clausura en una época en que los únicos delitos tributarios estaban previstos en la ley 11.683 con un procedimiento tortuoso que permitía al contribuyente toda la dilatada gama de artificios jurisdiccionales que hay para chicanear un pleito. En esos años la DGI no tenía ni remotamente los medios materiales y humanos que empieza a tener, ni tampoco este rosario otorgado permanentemente en los últimos dos años mediante leyes impositivas ómnibus con pasajeros sin boleto. Eternamente las reformas a la ley de procedimiento tributario han resultado ser un pasajero sin boleto; esto ocurrió con la ley 23.871 y con la 23.905. Esta última norma fue sancionada hace sólo cuatro meses, y no voy más hacia atrás porque resulta innecesario. Siempre han resultado ser estas reformas pasajeros sin boleto, a pesar de las armas que le hemos dado a la Dirección General Impositiva.

Se estableció el segundo fondo de estímulo —ya había uno— a fin de que los empleados tuvieran la posibilidad de participar y fueran a la inspección. También se fijó la Lotería y el "Quién es quién", guía ésta que ha provocado

severos conflictos porque se incorporaron nombres sin la menor precaución. Se aumentó la sala del Tribunal Fiscal multiplicándola por cinco.

Ley penal tributaria. ¿Qué es esto? Por lo menos, un portaaviones.

La ley 23.905 cuenta con un capítulo de artículos; son 15 divisiones blindadas con presunciones para el contribuyente. Si a pesar del 1º de enero se encuentra algo irregular, el lugar de ser el fisco quien aporte la prueba será hacerlo el contribuyente, que no tiene que ver. Ni los ejércitos de Napoleón contra las facultades que tiene la Dirección General Impositiva.

A esta altura del partido debemos preguntarnos qué estamos tratando. En realidad estamos tratando un artículo ómnibus o, mejor dicho, liebre, como se dice en Mendoza y en Chile. Este ómnibus está dentro de otro ómnibus grande, porque en un solo artículo se incluyen cinco modificaciones a la ley de procedimiento tributario que no tienen nada que ver entre sí; es el subómnibus del ómnibus.

Estamos de acuerdo con que en los sistemas de procesamiento informático debe haber una copia de lo que se encuentra grabado en el disco, a fin de que nadie se haga el gracioso apretando un botón haga desaparecer la copia. Pero como es el subómnibus del ómnibus, ni siquiera tiene el asiento para lisinapril, sino que es el último y tiene que registrarse de acuerdo con la fisonomía del resto del vehículo.

En el punto 1 del artículo 36 hay una presunción *juris et de jure* mediante la cual si se comprueban operaciones marginales durante un período fiscalizado inferior a un mes, el porcentaje que resulte se aplicará 12 meses hacia atrás y por todos los períodos que no estén prescritos. Entro a un comercio y compruebo operaciones marginales. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son esas operaciones; dependerá del dictado del hígado del director de la DGI. Puede ocurrir que se levante un día y redacte una resolución 3.788 que establezca que operación marginal es mirar de costado a una rubia divina que pase por la vereda. Y como el contribuyente o el fisco lo habrá hecho durante los últimos 15 minutos, la aplicaremos hacia atrás porque la Argentina es un país estable, donde no hay recesión, donde sobra la plata a los que vienen a comprar, donde es lo mismo Navidad que Año Nuevo, donde es igual la situación del productor del Alto Valle del Río Negro que la del productor de Mendoza, Chaco o Salta, Metán, total el contribuyente ni siquiera tiene la facultad de probar en contrario porque se presume *juris et de jure* que esto

es así. Por lo tanto, marche preso porque le habremos probado "operaciones marginales".

¿Qué dijo la Corte en diciembre de 1989? Dijo que las presunciones absolutas *juris et de jure* en materia tributaria son inválidas porque rige el principio de la capacidad contributiva, que es el de la realidad económica. ¡Basta de cuentos formales! Queremos ver qué pasa detrás de la realidad, y esto lo afirma la Corte en el fallo "Navarro Viola de Herrera Vega", del 19 de diciembre de 1989.

¿Qué más viene acá dentro del ómnibus? En el segundo inciso hay una presunción que invierte también la carga de la prueba. Efectúa la determinación calculando la factura de la luz, la venta de servicios del contribuyente, el consumo de gas, el pago del salario o incluso alguna otra indicación, como que el contribuyente en lugar de pedir un sandwich de salame pide dos lomitos con algún champiñón. De acuerdo con esto se invierte todo el procedimiento de la prueba aunque esta vez no es *juris et de jure*; el contribuyente tiene que venir a probar algo con comprobantes fehacientes y concretos careciendo de virtualidad, apreciación o fundamentación de carácter general basada en hechos generales, y la probanza del contribuyente no hace decaer la determinación de la DGI sino sólo en la medida de la prueba contundente, fehaciente y fenomenal que hace el contribuyente.

En este momento no sabemos exactamente qué cantidad de contribuyentes potenciales hay —supongamos que haya 2.600.000— luego de la extensión del IVA a los servicios, al agro, todos los impuestos en los que tenemos contribuyentes especiales por el bono solidario y todo lo que venga. Lo cierto es que el universo es gigantesco, y ese pobre chacarero que está por ahí y no sabe muy bien qué es lo que tiene que guardar, y que en una de esas dejó encendida la luz de su casa durante todo el día, tiene que salir a probar con los papeles. Si se opone es un criminal, y si nosotros lo apoyamos se estaría protegiendo a los evasores. De manera que estamos frente a una especie del Enola Gay que arrojará la bomba sobre Hiroshima.

Y viene el tercer pasajero del subómnibus del ómnibus. Entonces, de nuevo vamos a los chacareros o a aquel otro contribuyente de menor cuantía —respecto de los cuales la DGI va a determinar en el futuro cuál es el límite— que tiene que llevar comprobantes, registros con comprobantes que lo respalden y emitir comprobantes por el solo hecho de no estar en una actividad en relación de dependencia.

Esto es por si acaso —aunque hoy o mañana no sean contribuyentes— pasado mañana se nos ocurre que sean contribuyentes de algún impuesto. La DGI decidirá en el futuro cuál es el monto en razón de la índole del servicio; podrá efectuar mayores o menores requerimientos y podrá limitar esto en función del pequeño tamaño económico. Ya sabemos cómo se concibe el pequeño tamaño económico en las leyes que hemos sancionado, donde declaramos ricos a profesionales que están en el límite de la subsistencia. Lo mismo ocurrió con la declaración de contribuyentes pudientes en el impuesto a las manifestaciones conspicuas de riqueza con el valor que se tomó de 100.000 dólares —atrás cambiario mediante—. Todas estas circunstancias se combinan para darle otro poco de pimienta al pasajero.

Y llegamos a la clausura, pero este tema lo voy a dejar para el final.

El sexto pasajero de este subómnibus ya lo discutimos en la oportunidad anterior. Por supuesto que nadie del Senado pudo leer en los diarios lo que se ha expresado en esta Cámara, ya que empezamos a considerar el tema a las 6 de la mañana. Entonces esto insiste en traer por la claraboya un texto que hoy está esperando en la fe de erratas, que es el siguiente tema que debe tratar esta Cámara, y ahora se pretende colgarlo de una ley ómnibus y provocar la interrupción de la prescripción —lo voy a explicar por segunda vez— por una lista que llevará la DGI en un procedimiento de determinación de oficio de una deuda de un contribuyente.

Ya lo dije en otra oportunidad, pero voy a tratar de sintetizarlo en veinte segundos. ¿Por qué interrupción de la prescripción? Porque a un contribuyente que lleva 4 años 11 meses y 29 días, es decir que le falta un día para prescribir, la DGI le inicia una determinación de oficio y tiene que terminar pidiéndole perdón por haberse equivocado. A este señor se le ha caído toda la prescripción corrida, porque cuando se interrumpe desaparece el plazo de prescripción que debería haber ganado el contribuyente; esto ocurre aunque tenga razón, aunque no sea un evasor. En algún momento cuestionamos por qué teníamos que cometer esta barbaridad. ¿Por qué hay que hacer esta barbaridad? Ya discutimos en una oportunidad anterior que una cosa es la interrupción y otra la suspensión de la prescripción. Mientras la DGI está investigando y tiene abierto el expediente, tendrá toda la razonabilidad del mundo que se nos diga que este contribuyente no puede aprovechar la lentitud del aparato del Esta-

do. Esto entre comillas, porque dentro de un tiempo discutiremos si el contribuyente debe contemplar solemnemente la lentitud del aparato del Estado; pero por el momento concedamos el beneficio de que la lentitud del aparato del Estado no puede ser aprovechada por un potencial evasor. Entonces sí, mientras tenga el procedimiento en vivo tendrá suspendida la prescripción; pero si finalmente la cuestión termina con que hay que decirle a ese señor que la DGI se ha equivocado y que en realidad habría que colocarle una medalla, ¿por qué se le hará perder el tiempo de la prescripción?

En cuanto a la sanción de clausura, es necesario recordar que en nuestro país comenzó a regir cuando no había ley penal tributaria; empezó con una clausura de 3 días dispuesta por un funcionario de alta jerarquía de la administración, y no se fundaba en una infracción meramente formal, como sería olvidarse de colocar el domicilio en una boleta de la DGI cuando sí tiene el número de CUIT, el nombre de la sociedad y el resto de la identificación del contribuyente, y además todo está pagado en regla y a horario perfectamente. Es decir que esto no comenzó para ese tipo de situaciones sino para irregularidades de alta gravedad que no estaban contenidas en otra norma de la legislación, y además —insisto— para ser aplicado por funcionarios de jerarquía y con una instancia judicial que revisaba lo que aún siendo 3 días implicaba una sanción que casi limitaba con lo penal.

Yo no le creo al señor subsecretario cuando afirmó que hay comerciantes en la Argentina que están tan holgados como para irse 3 días de vacaciones cada vez que los clausuran. Sin embargo, mucho menos creo que no haya daño moral en una sanción de clausura cuando un cliente de un pequeño negocio de barrio, como por ejemplo una peluquería, se encuentra con una faja de clausura por violación al artículo 44 de la ley 11.683. Nadie lo preguntará después si es o no evasor, y en ese sentido es necesario tener en cuenta que en algunas provincias y municipalidades existen cuatro legislaciones simultáneas que exigen a los comerciantes requisitos para la facturación.

Esto que estoy afirmando no es literatura, porque está contenido en uno de los fallos de un juzgado del Neuquén en la causa "Mickey S.A." por el que se revocó una de las clausuras de la DGI alegando que hay un notorio abuso de facultades cuando se impone una sanción a un pequeño comerciante aunque el Estado no tenga el menor peligro de ver lesionada su capacidad de recaudación fiscal. Lo cierto es que a

ese señor le faltaba el domicilio en la factura pero tenía su número de Clave Única de Identificación Tributaria perfectamente puesto. Es así como nos comenzamos a explicar por qué el 60 por ciento de los casos que llegan a los tribunales con sanciones de clausura son revocados por los jueces, y ello no es así porque los jueces tengan el afán de proteger al evasor, ya que ellos participan de las rentas generales y sus propios sueldos se verían incrementados si superara el problema de la evasión. Lo que pasa es que en esto hay un límite que es el marco del estado de derecho, y el primer interés en defender ese límite es el gobierno, porque la etapa que transita del plan de ajuste al plan de crecimiento requiere como primera medida seguridad jurídica.

Las normas tributarias son la base de la seguridad jurídica; si hay seguridad jurídica hay inversión, si hay inversión hay crecimiento y si hay crecimiento sin duda habrá otro horizonte para los argentinos.

No estamos discutiendo una modificación menor, señor presidente. Pero, ¿de qué estamos hablando hoy, cuando la sanción de clausura ya no es la prevista en una ley de procedimientos cuando no existía la ley penal tributaria? ¿Todas las modificaciones que se han ido introduciendo —en los últimos años por medio de las leyes 23.871 y 23.905, que corresponden a la actual etapa del gobierno democrático— vamos ido transformando aquella pequeña sanción en otra que debería estar confinada al ámbito de lo formal. Porque, por ejemplo, la emisión de boletas aparece tres veces. En el artículo primero de la ley penal tributaria donde se menciona que la acción de no emitir facturas constituye un delito de peligro formal es decir que ese hecho pone en peligro la capacidad de recaudación del Estado o constituye la etapa previa a una acción defraudatoria.

La sanción penal también figura en los artículos inmediatamente interiores al que se pretende incorporar. Se menciona la no emisión de factura de acuerdo con la reglamentación y requisitos que se le ocurra establecer a la DGI. Esta es precisamente una de las causales por las que han sido revocados fallos de la DGI, que cambia de criterio todos los días. Ahora también pretende intervenir mediante un segundo artículo específico vinculado con la no emisión de facturas.

Aquí no estamos hablando de un evasor, se trata de la no emisión de la factura —es la conducta descrita en el artículo 1º de la ley penal tributaria— y hubiera peligro si hubiera delito. Ya no estamos en el campo

onatorio de la ley 11.683 en lo que respecta a las infracciones formales. Esto no se soluciona con la iniciativa que propone la bancada magistraria, de elevar el rango del funcionario que aplica la sanción y dar dos oportunidades al contribuyente.

La clausura que prevé la ley 23.905, que dimos en febrero, tiene restricciones porque el contribuyente apela la medida la sanción se aplica igual; pero si el juez advierte que se cometiendo una barbaridad, puede suspender esa aplicación. Decíamos en ese entonces que si la sanción implicaba tres días de clausura, ningún juez iba a poder actuar con velocidad suficiente como para activar el expediente probablemente la sanción mínima iba a terminar siendo soportada por el contribuyente. Ahora ni siquiera ocurre esto. Por este proyecto el juez no puede suspender la medida, aun cuando reconozca que es una barbaridad. Sólo podrá decir que la sanción está mal aplicada, el contribuyente le quedará la vía de la demanda por daños y perjuicios.

Empezamos hace algunos años con una sanción pequeña, aplicada por un funcionario de jerarquía y cuya apelación suspendía la aplicación de la medida. Ahora nos encontramos con una pena de 10 días de clausura aplicada por cualquier funcionario —aunque se intente mejorar con la figura del juez administrativo— con una apelación que no tiene ningún efecto en la suspensión de la medida. Estamos recorriendo un camino peligroso. Puedo contar cuál es el siguiente paso. Como no alcanzo ni 10.000 inspectores para disponer todas las clausuras y el ministro no tendrá horas libres para concurrir al Once, la siguiente propuesta será dinamitar el comercio en infracción. Si la DGI se equivoca, el contribuyente tendrá la posibilidad de iniciar un juicio por daños y perjuicios. Sería una medida ejemplar y no habría más evasión en la Argentina. Estamos a solo un paso de esta situación.

Entonces, ¿qué lo estamos dando al funcionario en materia de clausura? Directamente le estamos otorgando las facultades extraordinarias vedadas por la Constitución Nacional. Se trata de cualquier funcionario. Recuerdese que los decretos que autorizan que el funcionario que intervenga sea un policía. No necesariamente debe tratarse de un funcionario de la DGI.

Los propios integrantes de la DGI están sufriendo un proceso de transformación. Ese organismo está recibiendo empleados ferroviarios, bancarios y de otras áreas del Estado en un proceso de transformación, que no tienen la ins-

trucción suficiente ni el olfato para determinar si el contribuyente está "molestando un perro espectacular" o si no es más que un pobre almaceñero que se olvidó de emitir tres o cuatro facturas o cometió una infracción formal. ¡Pero ese funcionario tiene más facultades que el director de la DGI! Por esta reforma que se pretende incorporar, ni el director de la DGI —fuera de un expediente con un trámite de proceso administrativo— tiene tantas facultades para disponer una clausura.

Los términos de ambigüedad en que se manejan los conceptos son fenomenales. Se dice: "En los casos en que no se emitan factura o documento equivalente..." y me pregunto ¿qué es el documento equivalente; todo depende, una vez más, del hígado del director de la DGI. Para el caso del productor de frutas del Mercado de Concentración de Frutas de Río Negro, ¿qué se entiende por documento equivalente? Para el productor vitivinícola que tiene contratos que se inscriben en la Bolsa y que recibe facturas y órdenes de libramiento por el movimiento del vino, ¿cuál es el documento equivalente? Esto lo determinará una reglamentación que será modificada sesenta veces en tres meses.

Por otro lado, en esto no sólo está en juego la garantía de la propiedad sino también la garantía del debido proceso que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional. Según lo que aquí se dice, la contraparte puede ser un comprador, porque se habla de que es necesario el auxilio del locatario, prestatario o adquirente. Es decir que la señora que acaba de pelearse con el comerciante puede salir a la calle y llamar a un policía que tiene aspecto de inspector autorizado de la DGI para denunciar lo que le ha hecho el vendedor. Entonces, como si personificara al más duro tribunal de Nüremberg, ese inspector dispone diez días de clausura sin que medie ningún proceso y sin que exista la posibilidad efectiva de impedir la sanción, porque aunque el comerciante se vaya a quejar al juez no tendrá respuesta; es lo mismo que quejarse a Gardel, pues el magistrado le dirá que no puede suspender la ejecución de la medida aunque tenga la absoluta certeza de que se trata de un acto de la última interna peronista en donde alguien ha venido a acusar de no emitir una factura a un compañero que acaba de perder esa interna. (*Risas y aplausos.*)

Esto me recuerda a los tribunales sumarísimos que tuvieron lugar en una negra etapa de la historia de la libertad universal. El derecho económico otorga algunas mayores facultades al Estado en razón de los bienes sociales que

debe tutelar, pero nunca la autorización indiscriminada para arrasar con la vida, el honor, la fama o la fortuna de los ciudadanos. No puede haber defensa en el mismo acto.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Baglini. — Nadie está pidiendo que el comerciante no pague. ¿A ustedes se les ocurre que con el arsenal de medidas que tiene la DGI alguien puede dejar de pagar? Recordando alguna vieja expresión del señor diputado Matzkin, ésta es la técnica de "mate al almacenero". Es decir, no le cobro a Firestone —todavía el país se está preguntando cuándo le vamos a cobrar los créditos de Koner-Salgado—, pero salgo a matar a un almacenero para cobrarle 150.000 australes.

Tengo algún recuerdo ingrato de esta parte de la ley. Mi abuelo, como muchos de los hombres que vinieron del extranjero, era comerciante. Yo era niño cuando hace muchos años se aplicaban indiscriminadamente las leyes del agio y la especulación y recuerdo haberlo visto sufrir clausuras que tal vez no hubiera merecido. El murió como un tendero de barrio, con la conciencia de que había intentado aportar algo a la sociedad desde la modesta función que le tocó cumplir. Entonces, no es por la vía de equiparar la ley del agio y del abastecimiento a los mecanismos tributarios como vamos a obtener satisfacción en este tema.

Finalizaré mi exposición con la lectura de algunos párrafos de un artículo cuyo texto completo solicito que sea insertado en el Diario de Sesiones. Una parte de ese artículo dice así: 'Hace pocos meses, el legislador modificó la ley 11.683 mediante la 23.905 estableciendo que el recurso judicial carece, por regla, de efectos suspensivos, salvo que el juez penal económico o federal disponga lo contrario por auto expreso. Ahora, el proyecto de reforma impositiva a consideración del Congreso Nacional e impulsado por las actuales autoridades económicas, propone establecer su imposición directa por inspectores de la DGI, sin sumario previo ni intervención alguna de los jueces administrativos del órgano impositor, privando al Poder Judicial, incluso, de la posibilidad de disponer la suspensión de la medida durante la sustanciación de la instancia judicial de apelación.

"Constituye esto una violación de la garantía fundamental de la defensa en juicio (nadie puede ser penado sin juicio previo, artículo 18 de la Constitución Nacional) y la concepción republicana de la división de poderes (el Ejecutivo administra, el Legislativo legisla y el Judicial

juzga) por lo cual si es cierto que tal concentración de funciones tolera una *razón* flexibilización, también lo es que la jurisdicción constante de la Corte nacional, en admite el ejercicio de funciones jurisdiccionales atribuidas por ley a 'tribunales administrativos', bien que subordinado ello a la existencia de un 'control judicial suficiente' por parte de los órganos ordinarios del Poder Judicial.

"Más aún; ratificado como está por la Ley 23.054, el Pacto Interamericano de San José de Costa Rica sobre derechos humanos, el gobierno está comprometido a asegurar, en ámbito de la doble instancia judicial. Así, la reforma que referimos exhibe una plural infracción a postulados jurídicos fundamentales, constitucionales e internacionales, a saber: a) asignación de funciones jurisdiccionales —imposición de elaciones— a funcionarios inspectores; b) supresión de juicio previo, al reafirmar los efectos suspensivos del recurso judicial, limitando la tutela jurisdiccional a un juicio posterior de única instancia, y c) mantiene la supresión del control de la doble instancia judicial a cargo de los tribunales ordinarios (juez de primera instancia, Cámara Judicial de Apelación).

"Cabe entonces preguntarse: ¿cuál es el valor práctico o útil de una sentencia que anula favorablemente el recurso judicial? Ello es descartar que la norma llegue a ser judicialmente invalidada, como sucediera en el pasado con otras similares (así, la ley de regulación de la industria vitivinícola, 14.878), previendo que las clausuras aplicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura sólo susceptibles de ser apeladas ante la justicia sin efectos suspensivos, resolución que la Corte nacional declaró sin efecto por inconstitucional por afectar la garantía del juicio previo a su efectivización ('Dumit, C. J. c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura', resuelto en 'Jurisprudencia fiscal anotada'; C. J. Arístides H. M., revista 'Impuestos', tomo XII, A, página 1102; Corte Suprema de Justicia de la Nación 8-11-72.)."

Lo que estamos defendiendo aquí no es un evasor consuetudinario sino la posibilidad de que la Argentina asuma el estado de derecho. Por eso reafirmamos nuestro voto en el sentido de que este proyecto —al que se intenta restringir sin total éxito— debe volver al Senado. Debe eliminarse este capítulo y el otro tiene que ser objeto de la pertinente consulta. No basta con que quede a disposición de los diputados durante sesenta días. Nunca antes ha sido aceptado este procedimiento de legislar sin que el dictamen merezca por lo menos el análisis

las entidades interesadas, de los colegios profesionales, de los magistrados, por lo menos audiencias previas y breves.

Entonces allí están todas las armas y todo arsenal para la Dirección General Impositiva. Si hay vocación política, sin duda con este arsenal la recaudación podrá aumentarse. Pero que no queremos es transgredir el límite de estado de derecho que todos debemos guardar.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Augusto José María Alasino.

Sr. Presidente (Alasino). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: voy a ser breve; mi comentario está relacionado con los dichos del señor diputado Baglini —no dudo de su inteligencia para desarrollarlos— de los cuales surge una línea de pensamiento como si, en forma continua, hubiera una actitud perversa del Estado y una actitud extremadamente bondadosa con todos los evasores fiscales. Tenemos que buscar todas las defensas que existan en el mundo contra los evasores fiscales.

Esta es mi conclusión con respecto a este tipo de discurso. Pero más allá de ello, es evidente que no hay diferencia de criterios. Por ejemplo, un criterio puede ser pronunciar excelentes discursos, tan buenos que —sin haber sido ésa la intencionalidad del legislador— cualquier avezado podría escribir un manual del evasor y seguramente vender muchos ejemplares.

La diferencia estriba en el hecho de que, mientras por un lado se pronunciaban discursos claros y de rumbos conocidos, inclusive agradables de ser escuchados, simultáneamente había una CGI que cada vez recaudaba menos y había más evasores. Todo esto se arreglaba emitiendo moneda, sin que existiera la voluntad de mejorar. Así terminamos.

Para nosotros no hay un camino distinto; no lo hay. Todos han sido cerrados, sobre todo cuando votamos la ley de convertibilidad. Podemos vivir solamente de lo que recaudamos y de lo que obtenemos en concepto de impuestos, y sabemos que con algunas de las cosas que hacemos corremos riesgos. No somos idiotas. Sabemos que en ciertos momentos transitamos por un camino sin saber de qué lado del desfiladero nos encontramos. Sin embargo, no podemos emitir. No tenemos alternativa, porque quienes así lo hicieron lo hacen perfectamente como les fue. Nosotros también tenemos nuestras experiencias al respecto.

Tenemos que insistir con este tipo de instrumentos —y a veces pedir más— que nos permitan detectar evasores. Claro está que esto nos significa riesgos. Pero no hay caminos alternativos, porque quienes tuvieron oportunidad de transitarlos ya lo hicieron y ahora somos herederos de esos errores.

Esta es la diferencia de criterios existentes. Por ello los discursos son distintos, porque las posibilidades también lo son, al igual que las decisiones finales.

Nosotros adoptamos la postura de estabilizar el país; lo queremos hacer crecer en forma genuina y ordenada, no engañando más a nadie. No vamos a engañar a la gente con emisión monetaria. Si bien podemos pronunciar discursos y a la vez emitir, no lo haremos, porque hay antecedentes que no le sirvieron al país ni a nadie.

Queremos ser escuchados y hablar en un idioma que nos permita transmitir las necesidades actuales. Pedimos más instrumentos, sabiendo que algunos de ellos son peligrosos. ¿Cómo no lo vamos a saber! Pero no hay un camino alternativo; por lo menos no tenemos otro para proponer.

Tenemos el derecho de que en esta oportunidad nos dejen ejercitar el derecho a transitar por ese camino. ¡Nos tienen que dejar probar, porque al país no le va mal! ¡Déjenos un tiempo más! ¡Déjenos utilizar los instrumentos que necesitamos para construir un país diferente! Se trata de instrumentos por los cuales no podemos apelar a cuestiones perimidas en la Argentina. Esta es la diferencia de criterios.

No digo que los discursos sean malos, sino que me parece que estamos en cosas diferentes. Si me dejaran elegir, me gustaría que estuviésemos de acuerdo en muchas cosas, pero no nos podemos alejar del sendero que transitamos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Alasino). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente deseo efectuar dos breves aclaraciones, porque pareciera que si se altera el énfasis de los discursos podría distorsionar valores de la realidad.

El acto de clausura de un comercio es muy similar a la multa que se aplica por no respetar un semáforo en rojo. Si un conductor respeta el semáforo cuando éste tiene luz roja, no hay multa.

Acá se trata de que los comerciantes cumplan con la obligación elemental de emitir facturas, en cuyo caso no serán pasibles de la clausura de su establecimiento. Está bien que clausuren el negocio de quienes no emiten la correspondiente factura, de estos pequeños comerciantes,



de estas víctimas que recién mencionaba el señor diputado Baglini, haciéndonos sentir como si integráramos el tribunal de Nüremberg. ¿Saben cuánto roban al país estos "inocentes" señores que no dan facturas? Cinco mil millones de dólares. Si cobráramos ese dinero no tendríamos necesidad de estar discutiendo proyectos como éste, porque los jubilados cobrarían todos los meses un haber digno y los maestros tendrían mejores sueldos. Si así fuera no estaríamos debatiendo cuestiones que nos ubican en la posición de censores.

Los impuestos que se cobran en aquellas operaciones por las que no se otorgan facturas no llegan al fisco: se los guardan los intermediarios. Entonces, no se trata de inocentes comerciantes, sino lisa y llanamente de ladrones. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Dumón.** — Señor presidente: después de las palabras del señor diputado Baglini nos habría interesado escuchar otras reflexiones del señor miembro informante, porque hasta ahora lo único que ha hecho ha sido descalificar en lugar de presentar argumentos. Así es como ha señalado que el discurso del señor diputado Baglini se encuadra en una actitud perversa que tal vez ha adoptado sin darse cuenta, y agrega que esto podría servir para escribir el manual del infractor.

El señor diputado Matzkin incurre en un grueso error jurídico, porque la mejor defensa que van a tener los evasores será la declaración de inconstitucionalidad de la ley que se está por sancionar, porque viola el principio del debido proceso consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, la libertad de comercio establecida en el artículo 14 y los eventuales derechos que otorga el artículo 17 del mismo cuerpo legal.

No se puede comparar el cierre de un negocio con la luz roja de un semáforo. En todo caso, si ésta fuera la comparación —que es absurda—, estaríamos por un lado ante algo que depende del ejercicio del poder de policía regulado por las leyes que rigen la materia y, por otro, frente a una potestad relativa al comercio. A quien cruza un semáforo en rojo no lo quitan el coche.

El término de la tramitación de prueba puede ser admitido por un juez. No estamos entablado una competencia ni tratando de malograr una ley. Estamos aquí sentados con la vocación de aprobar este proyecto de ley, a tal punto que hemos votado afirmativamente siete de sus títulos. Lo que queremos hacer

entender a los diputados justicialistas es que nos estamos pronunciando sobre un proyecto de ley inconstitucional y ello no puede merecer en respuesta un discurso despectivo ni descalificativo.

El bloque Justicialista desea sancionar esta iniciativa en la esperanza de que prevenga la emisión de dinero. Nos dicen que ellos, herederos de una situación preexistente en esta materia. No podemos entrar en esta polémica del pasado, porque si el señor diputado Matzkin hace tal afirmación nosotros tendríamos que recordar las veces que aquí se pretendió modificar el régimen de promoción industrial y que se habló del gasto provincial y de tantas cosas que no pudo hacer el anterior gobierno porque quería evitar la emisión de moneda, que es uno de los requisitos del Plan Austral. No trataremos en esta discusión porque cada uno debe hacerse responsable de la parte de la historia que le corresponde, y porque aquí resultaría inoficioso.

Estamos tratando de evitar que esta no vulnere principios constitucionales fundamentales. Nos encontramos frente a un funcionario omnipotente que también tiene a su favor la posibilidad de elegir documentos, tal como ha señalado el señor diputado Baglini. Además cuando se define a los contribuyentes, se hace en términos del contrato, llamándolos "prestatario", "adquirente" o "locatario". Comparativamente, se define ambiguamente a los contribuyentes que tienen la competencia de declarar un comercio. De esta manera, un amplio horizonte de contribuyentes pueden ver afectado el prestigio de sus comercios por aplicación de procedimientos inadecuados, cuando los contribuyentes perseguidos por la ley podrían ser aliviados si se aplicara a estas infracciones el procedimiento correspondiente.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: desearé hacer dos breves comentarios. En primer lugar tomo en cuenta el consejo del señor diputado sobre la posible inconstitucionalidad de la norma, pero señalo que existen antecedentes en esta materia. La ley 20.680, de abastecimiento, lleva varios años de vigencia y permite la clausura de hasta tres días. Sin embargo, no conozco fallos de inconstitucionalidad por esa razón.

El segundo comentario está vinculado a una desinterpretación. Seguramente no ha sido el señor diputado Baglini quien me ha malinterpretado, ya que hemos mantenido cruces de esta naturaleza desde mucho tiempo antes de que

señor diputado que ahora intenta defender la posición del señor diputado por Mendoza ocupar su banca. Tengo un particular respeto por el señor diputado, a quien le reconozco su capacidad, así que jamás pude tener una intención agravante o descalificante hacia él.

Sr. Presidente (Alasino). — Tiene la palabra señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Quiero aclarar que la ley 20.680, de abastecimiento, tiene un horizonte de destinatarios bastante distinto, ya que apunta a materias de agio y especulación realizadas por unos sujetos y no por el fenomenal universo de contribuyentes que aquí se contempla.

Por otra parte, se sabe que nunca se aplicó la ley, al punto que durante el actual gobierno algunos diputados de la bancada Justicialista llamaron esa aplicación a través de los diarios en reuniones de gabinete, cuando los precios seguían moviendo. También recuerdo que se habló de su derogación cuando el señor diputado Albamonte era candidato a ocupar la Subsecretaría de Comercio Interior. Es una ley muerta sin posibilidades de aplicación, porque nunca se tomó la correspondiente decisión política.

Sr. Presidente (Alasino). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: para una breve reflexión, puesto que es inútil entrar en el fondo del tema, como lo han hecho algunos de los oradores anteriores.

Estamos discutiendo si se aprueban o se rechazan las enmiendas introducidas por el Senado, pero nos remontamos a cosas que pertenecen al pasado y a niveles que escapan a nuestra comprensión.

Desde hace un largo período estamos legislando bajo la presión del tiempo y los acontecimientos. Constantemente llegan proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que deben ser sancionados con urgencia, bajo la advertencia de que si no se aprueban en un determinado tiempo, corre peligro, por ejemplo, la política económica. No resulta conveniente legislar de esta manera y mucho menos cuando se cae en excesos como el que se registra en el presente mes, donde en una sola ley estamos sancionando nueve iniciativas que no tienen mucho que ver entre sí. Siguiendo ese criterio se podría haber agregado algún capítulo referente a minero o cultivo de flores.

Siempre nos encontramos ante el dilema de poner obstáculos a la acción del gobierno porque conocemos la crítica situación por la que atraviesa el país y la virtual quiebra que

padece el Estado, y por otro lado nos sentimos atados por tener que votar cosas que no nos gustan en absoluto.

En este caso resulta imposible determinar si se está a favor o en contra del proyecto porque contiene nueve materias distintas. Pero si en general votamos afirmativamente para no poner obstáculos, luego, en la consideración en particular, resulta imposible ejercer algún tipo de influencia.

Esta es la última vez que aplicaremos el criterio descrito. En lo sucesivo consideraremos las normas una por una, y si no nos satisfacen, votaremos en contra, cualquiera sea el reclamo que exista.

Uno de los aspectos más negativos del proyecto es el relativo al impuesto sobre las manifestaciones conspicuas de riqueza, al que ahora se denomina impuesto a los bienes no afectados a la actividad productiva. Si un señor ha ganado algo de dinero y lo quiere conservar, por ejemplo, en forma de objetos de arte, deberá pagar un impuesto, con lo cual al cabo de nueve años consumirá buena parte del ahorro que había logrado realizar. Esto significa no entender qué es el ahorro. Pero si entramos en este tema deberíamos discutir nuevamente todo el proyecto y a esta altura resulta inútil.

Debido a la influencia que ejercimos se introdujo algo nuevo en el título IX. No nos gustaba la forma en que estaba redactado, porque se le otorgaban facultades a un funcionario para clausurar negocios sin más trámite. Tampoco nos gusta demasiado la forma en que está explicitado ahora. Ocurre que anoche logramos una solución consistente en dejar el título tal como está a fin de que el proyecto no deba ser enviado nuevamente al Honorable Senado, pero a condición de que se sancione una norma que disponga exactamente lo contrario de lo que se va a establecer en ésta. Este no es un buen sistema para legislar, pero es mejor colocar este parche antes que dejarlo como estaba.

Con respecto a este último punto vemos la necesidad de establecer algún equilibrio, porque por un lado existe el deseo de proporcionar los instrumentos que eviten o combatan la evasión impositiva. Entendemos que lo normado es razonablemente válido porque gran parte de la evasión impositiva proviene de los centenares de miles de personas que incurren en faltas. Pero, por otra parte, pesa más la defensa de los derechos individuales.

La preocupación que tenemos proviene de la larga historia argentina, por ejemplo, de la ley de abastecimiento, mal citada por el señor di-



putado Matzkin como antecedente porque esa norma no debió haber existido nunca. Tenemos una vasta experiencia en leyes de agio y especulación, por las que en esta Cámara nadie puede tirar la primera piedra. De manera que el recuerdo de esas persecuciones sobre comerciantes, industriales, etcétera, pesa cada vez que hay que tomar una decisión en esta Cámara. Por eso, entre la defensa de esos derechos individuales y, por otro lado, la necesidad de proveer algún mecanismo para controlar la evasión tuvimos que recurrir a una situación intermedia, que no nos satisface pero es la menos mala de las que teníamos a mano.

Creo que algún otro diputado de la UCEDE va a formular alguna observación de importancia sobre el tema previsional, por lo que concluyo señalando que ésta no es la manera adecuada de legislar. Digo esto porque por trabajar siempre sobre el último minuto y bajo presión nos olvidamos de cosas fundamentales, empezando por algo que es responsabilidad nuestra: todavía no hemos votado ni el presupuesto de 1990 ni el del corriente año, y es probable que antes del 15 de septiembre.—si Dios quiere— se remita al Congreso el presupuesto para 1992. ¿Por qué no lo hicimos? Porque el tiempo de la Cámara está siempre ocupado por las cosas de último momento. Para conseguir la sanción de algunos proyectos se argumenta que si a tal hora no se vota corre peligro el plan económico, pero esto no es cierto.

Entonces, aquí tenemos que tomar las cosas como son y el Congreso debe tomarse el tiempo suficiente y sobre todo la formalidad necesaria para hacer una obra verdaderamente constructiva.

**Sr. Presidente (Alasino).**— Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.**— Señor presidente: voy a sintetizar nuestra opinión sobre los títulos VIII y IX y formularé un interrogante al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre las motivaciones de la reforma al título VII, para luego, si ellas no resultaran satisfactorias, pedir también que se desplace su votación.

Con respecto al título VIII, todos estamos de acuerdo en que es razonable eximir al Instituto Nacional de Previsión Social del pago de contribuciones y aportes en los juicios que él promueve. El planteo de oposición que formula el señor diputado Baglini se concentra en la interpretación literal de la norma constitucional que atribuye a la Cámara de Diputados el carácter de originaria en el caso de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

Alguna vez tendremos que ponernos de acuerdo en torno a este asunto, porque en varias oportunidades nos hemos enfrentado con el mismo respecto. No tengo ninguna duda de que nuestra Cámara es originaria en todo referente a la creación de impuestos; lo que creo es que la Cámara de Senadores carece de capacidad para ser iniciadora en lo que respecta a la exención o a la derogación de impuestos, aunque la norma constitucional no haga esta distinción.

Hay que interpretar las normas constitucionales en función de los antecedentes históricos que les dieron origen. Todos sabemos que éstos remontan a muchos años atrás: la Carta Magna de 1215, del rey Juan sin Tierra, quien se comprometió ante los barones a no crearles impuestos si ellos no los autorizaban. Después se institucionalizó en 1689 en Inglaterra con la *Bill of rights* de Guillermo de Orange, quienes aseguraron a los nobles y al pueblo inglés que no les cobrarían impuestos si ellos los aprobaban. Los norteamericanos hicieron una revolución—su revolución, que les dio la independencia— porque los ingleses no respetaban el principio de que no puede haber impuestos sin representación.

Estos son los antecedentes que recoge nuestra Constitución Nacional al otorgar la facultad de crear impuestos a la Cámara de Diputados, que se supone representativa del pueblo de la Nación. Pero para suprimir impuestos o para modificarlos no veo óbice constitucional alguno para que se altere el principio de equilibrio entre las Cámaras previsto en toda la hermenéutica de nuestra Constitución.

**Sr. Baglini.**— ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidente?

**Sr. Natale.**— Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Alasino).**— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.**— Señor presidente: en la época de la sanción de la Constitución existía en el Estado argentino una cierta holgura fiscal comparada con los tiempos presentes. Cuando hoy día disminuimos la alícuota de un impuesto, estamos creando una necesidad fiscal inmediata. De manera que hay una perfecta correlación entre el nivel del gasto, que resulta difícil de bajar, y la desaparición de un impuesto. Como lo hemos comprobado dolorosamente por medio de la experiencia, al derogar un gravamen automáticamente estamos generando la necesidad de recaudar por otra vía un monto equivalente.

El análisis que debemos realizar tiene que ser integral, y si se establece un nuevo impuesto también se debería revisar qué otro indicador disminuirá, porque si no estaríamos desatendiendo la realidad económica.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: habitualmente el señor diputado Baglini nos ilustra sobre las finanzas contemporáneas, pero yo modestamente quiero informarle sobre las finanzas antiguas.

Durante toda la segunda mitad del siglo pasado las finanzas no eran tan holgadas. Durante las décadas de 1860 a 1890 las provincias se sostenían primordialmente con la venta de tierras públicas, lo que constituía su principal recurso; la Nación hacía lo mismo. No en vano el artículo 4º de la Constitución Nacional estableció que la venta de tierras públicas era uno de los recursos fiscales. El Estado se descapitalizó durante todo ese tiempo —más propiamente, el país se colonizó y se pobló, esa es la verdad auténtica—, atendiendo su presupuesto con la venta de su propio patrimonio. Por otra parte, con respecto a la renta de correos —incluida también en el artículo 4º—, en 1853 Benjamín Goostiaiga decía que desde la época de la Revolución de Mayo el correo había dado pérdidas y no utilidades. Con esto quiero significar que las finanzas públicas siempre fueron estrechas en nuestro país, pero de cualquier manera esta no es la cuestión en debate.

En síntesis, considero que la facultad originaria de crear impuestos es indudablemente de la Cámara de Diputados, pero no así la de derogar o eximir tributos, que bien puede ser ejercida por el Senado.

Con respecto al título IX coincidimos con las críticas que aquí se han formulado. Estaríamos dispuestos a analizar un texto más prudente en el que se admitiera una posibilidad intensa de acción por parte del organismo administrativo de aplicación, que creemos puede ser eficiente, pero no en los términos planteados por el título que nos remitió el Senado. En el análisis en comisión se pudo haber elaborado un texto por el cual, sin mengua de las facultades impositivas, se posibilitara un mínimo de resguardo de los derechos individuales de todos los contribuyentes. Por eso no vamos a apoyar la aprobación de este título.

La última referencia que formularé es con respecto al título VII, sobre el que quiero hacer una pregunta al señor presidente de la Comisión

de Presupuesto y Hacienda. No sé cuál es el motivo por el que se modificó la sanción originaria de la Cámara de Diputados que disponía que el producido de la venta de las acciones de las sociedades licenciatarias —si no recuerdo mal, en el pliego originario se llamaban Telecomunicaciones del Norte y Telecomunicaciones del Sur— se transfiriese al Instituto Nacional de Previsión Social. Ahora observamos que las acciones se van a transferir en propiedad al Instituto, lo que por supuesto no es lo mismo sino algo muy diferente, y quisiera saber cuál es el motivo de esta modificación.

Hagamos un poco de memoria y de cuentas. El 60 por ciento de las acciones de ENTEL se vendió con un pago al contado de 214 millones de dólares y cerca de 400 millones de dólares a plazo, o sea, algo más de 600 millones de dólares entre el pago al contado y el pago a plazo. Además, se obtuvo el rescate de 5.000 millones de dólares en títulos de la deuda externa. ¿Cuánto valen los títulos de la deuda externa argentina? La información aparece todos los días en los diarios, pero desconozco si es verdadera. Tal vez sea producto de operaciones intrascendentes en el mercado marginal. Sin embargo, tengo un dato muy concreto. Hace 45 días el Banco Central, para aprobar una modificación de importancia en el contrato de privatización de Aerolíneas Argentinas —se trata de un contrato que no se termina de ejecutar y que pasará mucho tiempo antes de que se ejecute definitivamente—, autorizó a compensar la deuda que tenía la adjudicataria con el Estado nacional con presuntos créditos que esos adjudicatarios tendrían contra Aerolíneas Argentinas. El Banco Central valorizó en algo más del 30 por ciento de su valor nominal la paridad de los títulos de la deuda externa argentina utilizados a los fines de esa compensación. La cifra que aproximadamente publican los diarios es la del 25 ó 26 por ciento, y el Banco Central valorizó en un 30 por ciento la paridad de nuestra deuda externa.

Entonces, si por el 60 por ciento de la venta de las acciones de ENTEL se obtuvieron 5.000 millones de dólares en títulos de la deuda externa argentina, ello equivale a 1.500 millones de dólares según la cotización aplicada por el Banco Central. Además, también se ha obtenido el pago de 600 millones de dólares. Así llegamos a una cifra algo superior a los 2.000 millones de dólares. En consecuencia, si la venta del 60 por ciento produjo 2.000 millones, la venta del 30 por ciento del capital originario

de ENTEL, según la estructura matemática que he mencionado, debería producir un ingreso de alrededor de 1.000 millones de dólares.

Hoy estamos por proclamar la falencia del Estado nacional argentino. Vamos a declarar la convocatoria con los acreedores externos. Esta noche haremos lo mismo con los acreedores internos. ¿Qué hace el deudor cuando no puede atender sus obligaciones? Por lo menos, realiza los activos de que dispone. Entonces, pregunto concretamente al señor diputado Matzkin por qué se desperdicia la posibilidad de que en las arcas fiscales ingresen 1.000 millones de dólares? ¿Seguirán las acciones de ENTEL manteniéndose en poder del Estado, que se limitaría a percibir la renta correspondiente?

**Sr. Berhongaray.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

**Sr. Presidente (Alasino).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Si bien no soy el diputado Matzkin, igual trataré de esbozar una respuesta al interrogante del señor diputado Natale. El 30 por ciento del paquete accionario de ENTEL iba a ser ofrecido ahora —de acuerdo con las condiciones del pliego de licitación— a la oferta pública por intermedio del banco que tenía la obligación de realizar esa operación, que era el Banco Roberts.

En un procedimiento bastante extraño esta oferta pública se iba a realizar por un término absolutamente reducido; apenas 5 días. Sabemos que la capacidad de absorción del mercado de valores torna absolutamente imposible que pueda llegar a concretarse en cinco días la colocación de este importantísimo paquete accionario del 30 por ciento de ENTEL. Esto fue objetado por la Comisión Nacional de Valores, que como es sabido cuenta desde hace pocos días con un nuevo presidente. Al respecto, existió un gran lobby para lograr su desplazamiento y eventualmente la intervención de la comisión. Parece que no todos estaban de acuerdo con que en cinco días el Banco Roberts lograría vender ese paquete accionario en el mercado de oferta pública. Entonces, las acciones se iban a ofrecer a algunos pocos grandes oferentes, concretamente a los adquirentes españoles y franceses de ENTEL, y eventualmente a la Siemens, en compensación de deudas.

El tema fue planteado, se formularon objeciones y la cuestión está siendo bastante discutida. Al respecto he presentado un pedido

de informes solicitando la aclaración de algunos puntos; todavía nada nos han aclarado, por lo menos la gente ya está alertada.

Con respecto al tema del desplazamiento del presidente de la Comisión Nacional de Valores hubo objeciones de importantes sectores del mercado. Así, el mercado electrónico, la Cámara de Sociedades Anónimas y la Asociación Bancos de la República Argentina hicieron oír sus temores por lo que significaba esta promisión en este organismo de contralor de oferta pública.

Tratando de sintetizar una respuesta al señor diputado Natale, deseo manifestar que la venta del 30 por ciento del paquete accionario de ENTEL a lo mejor produce esos 1.000 millones de dólares. Digo "a lo mejor" porque dado el carácter monopólico existente en torno de la oferta, probablemente las cifras serían mucho menores. Pero está demostrado que la venta del 30 por ciento de esas acciones —teniendo cuenta los números realizados por las empresas adjudicatarias— producirá, a valores actuales, 600 millones de dólares anuales de utilidad que irán al fondo para los jubilados. Creo que es una buena decisión la que se tomó en el honorable Senado.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: no conozco los motivos por los cuales fue reemplazado el presidente de la Comisión Nacional de Valores, pero sí recuerdo los conflictos que tenemos cuando él se oponía a las modificaciones que nosotros propusimos al régimen de la oferta de obligaciones negociables.

Por otro lado, no es correcto que las acciones se hubieran de vender en cinco días, como señala el señor diputado Berhongaray. Al respecto recuerdo que en la comisión bicameral se nos brindó una amplia información. Existían tres etapas para la venta de las acciones, la primera de las cuales establecía un plazo de 15 días. Además, se comenzaba con los adquirentes de menor cuantía; los montos para la primera etapa eran realmente mínimos. Pero aquí la cuestión no es ésa. Si el procedimiento de la venta se supone que puede hacerse en plazos más prolongados, el tema debe ser analizado en ese sentido. De todas formas, ésa será una decisión que caerá dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, y el Legislativo sólo podrá dar una opinión al respecto. Esto no está en discusión, y menos si la venta será hecha por una institución en particular —como dice el señor diputado Berhongaray— o por muchas in-

ciones bancarias, porque recuerdo que había un conjunto de bancos que iban a intervenir en la operación.

Finalmente, habría cuatro o cinco mil bocas de expendio en toda la República Argentina integradas por los bancos estatales y privados que conforman el sistema financiero. No era el banco el que vendía las acciones sino todo el sistema financiero argentino, integrado por todos los bancos estatales y privados. Pero insisto en que ésta no es la cuestión.

Mi interrogante —aquí se acaba mi respuesta señor diputado Berhongaray y comienza la iteración de mi pregunta al señor diputado Matzkin— es por qué no se venden las acciones, pues si se guardan en poder del Estado definitiva no se privatizará el 30 por ciento de ese capital accionario, y se perderá la posibilidad de obtener un importante ingreso de recursos.

**Sr. Berhongaray.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

**Sr. Natale.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: dado que el señor diputado ha manifestado que continúa con sus respuestas a mi observación, quiero decirle que lo de los cinco días surge de un informe realizado por la Comisión Nacional de Valores con fecha 18 de junio de este año, es decir que data del mes pasado, y una copia de esa resolución puedo acercársela a la Honorable Cámara. Además, no eran todos los bancos los que podían actuar como corresponsales del Banco Roberts sino solamente tres. Por supuesto, las bocas de expendio iban a ser mayores y además el monto de las comisiones que cobraban, sumadas a los gastos de publicidad, que fueron observados y que eran cinco millones de dólares, alcanza al 6,66 por ciento, algo absolutamente inusual en la oferta de valores públicos, ya que está triplicando el monto total de las comisiones.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: éste parece ser un diálogo de sordos, pero insisto en que no eran cinco días sino quince; y no era un solo banco sino toda la red bancaria argentina. Pero eso no es lo que está en discusión. Yo me referí al informe recibido en el seno de la comisión bicameral. Esto no es motivo de interrupción. Si hay mecanismos más eficientes pa-

ra vender las acciones, podemos conversar al respecto. Tampoco nos oponemos a que el producido de la venta de las acciones vaya al sistema previsional; nos parece razonable.

La pregunta es por qué en vez de vender las acciones del capital que este Estado en quiebra tiene en las compañías telefónicas —este Estado que no paga a sus acreedores y que está desesperado por reunir 90 millones de dólares mensuales para dar 300.000 australes de aumento a los jubilados— no aprovechamos la oportunidad para hacer una masa de 1.000 millones de dólares, en vez de guardar el capital accionario en las alforjas, quedándonos solamente con la renta de ese capital. Esa es mi pregunta fundamental, dirigida al señor diputado Matzkin.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: según el proyecto el Instituto de Previsión Social será el titular de las acciones. Con ese paquete accionario puede hacer distintas cosas: puede quedarse con él o puede venderlo total o parcialmente. Si lo vende totalmente, entonces no habría diferencias entre la sanción de Diputados y la del Senado porque en última instancia el Instituto se quedaría con el producido de la venta. Si en cambio decide no venderlo de inmediato o no venderlo más, sí habría una diferencia con la sanción original de Diputados. En última instancia ese Instituto es de la órbita del Poder Ejecutivo, lo que significa que tiene un tiempo mínimo para terminar de analizar una opción de pago a los jubilados, fundamentalmente en función de la suerte que tenga el bono de consolidación de deudas. Se establecerá un sistema de pago para los pasivos en el cual el análisis consistirá en saber si la rentabilidad de esas acciones podrá llegar a pagar el interés que el proyecto fija para la deuda de los jubilados, de modo tal de llevarla —aunque no exactamente— a una especie de renta vitalicia.

Si así no fueran las cosas, siempre existe la posibilidad de efectuar las ventas tal como están programadas. Creo incluso que las posibilidades de venta están muy avanzadas; hay análisis y hay contratados bancos colocadores para actuar en estas cuestiones.

Es un tema de determinación que se va a adecuar a la decisión que se tome en razón de la sanción que vamos a dar esta noche.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Gentile.** — Señor presidente: tal como lo hicimos en oportunidad de tratar en esta Cá-

mara por primera vez este proyecto de ley, vamos a votar favorablemente los títulos I a VII, aceptando las reformas introducidas por el Honorable Senado.

Es cierto que podríamos formular algunas observaciones en particular, pero me parece que a esta altura de la noche sería ocioso hacerlo, ya que no hay posibilidad de votar en forma diferente los distintos puntos de los artículos que componen estos siete primeros títulos del proyecto de ley.

Con respecto a los dos títulos introducidos por el Senado de la Nación, se violenta el procedimiento parlamentario. En el primer caso, se crea una exención contrariando lo que especifica el artículo 44 de la Constitución Nacional en cuanto a que a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Sin embargo, debo confesar que en el fondo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el Senado, porque en definitiva el propio Estado es el que tendría que pagarse a sí mismo un impuesto.

No podemos admitir el último título, como no lo hicimos cuando lo votamos en contra en esta Cámara. Pero el Senado, por este procedimiento de la adición o corrección, de rondón nos introduce el mismo texto, violando otra vez el artículo 44 de la Constitución Nacional, por lo menos en su sentido fundamental, porque sabemos que sobre esta materia hay una serie de interpretaciones.

Cuando hablamos de las estimaciones que en forma tan discrecional pueden hacer los funcionarios de la DGI, considero que estamos creando un impuesto hacia atrás por parte de los funcionarios y transformando en esencia lo que es un tributo. Estaríamos admitiendo así que esto sea introducido por el Senado.

Se ha violentado el procedimiento parlamentario, lo que es suficiente para que el bloque Demócrata Cristiano vote en contra.

Con respecto al contenido del título IX, tal como nos pronunciamos cuando se trató anteriormente en esta Cámara, estamos en desacuerdo, y me llama la atención lo que ha dicho sobre el particular el señor diputado Alsogaray.

Confieso que cuando leí ese libelo de Francis Fukuyama sobre la muerte de las ideologías no creí en toda su extensión la idea del autor. Ahora tengo que reconocer que tiene algo de razón, ya que a la anunciada muerte del marxismo pareciera ser que ha sucedido la del liberalismo, porque hace pocos días una diputada del bloque de la Unión del Centro Democrático habló de nuestra Constitución liberal y

realmente con el contenido de estas disposiciones se está contrariando la Constitución Nacional, ya que se crean jueces administrativos de la categoría más inferior, que serán prácticamente empleados supernumerarios de la DGI. Ellos podrán aplicar este procedimiento de clausura, que es de carácter propagandístico intimidatorio.

Quisiera saber cuál es la dificultad que existe hoy día para proceder a las clausuras de comercios, ya que de hecho se efectúan. Y como no se hace para combatir la evasión, porque se establece prisión por deuda, sino que se realiza una propaganda en el sentido de que existen inspectores que andan dando vueltas por diferentes lugares.

He visto el caso particular de un comerciante que había pagado todos sus impuestos, se le hizo una inspección y como en la factura figuraba la palabra "Córdoba", aunque sí el domicilio completo donde tenía instalado su negocio, se le clausuró el establecimiento, luego de llevarse a cabo los procedimientos correspondientes. ¿Podemos dar a un inspector la facultad de clausurar un negocio por alguna infracción de esa naturaleza, tal vez porque una mañana se levantó de mal humor? Si lo hiciéramos, no tendría sentido el debate que realizamos ayer, durante la consideración del proyecto de Código Procesal Penal. Allí habíamos de garantías, de la estabilidad de los fiscales, etcétera. Sin embargo, hoy se está sugiriendo que penas como las que nos ocupan pueden ser aplicadas incluso por algún inspector supernumerario que haya trabajado en la DGI sólo un día.

Por esas razones este debate me deja una gran decepción. El señor diputado Alsogaray ha dicho que el proyecto ha mejorado y que por eso va a votar por la afirmativa. Ello me hace pensar que también el liberalismo ha muerto.

Sr. Presidente (Alasino). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Aramouni. — Señor presidente: seré breve en tanto y en cuanto la "barra brava" no me provoque. (Risas.)

No voy a abundar en argumentos porque cuando se trató este proyecto de ley la banca de la Democracia Popular, a la cual represento, estableció alternativas.

En aquella oportunidad solicitamos que se aprobaran algunos de nuestros proyectos; por ejemplo, el que restablecía el impuesto a los pulsos telefónicos, el aumento de las alícuotas

en los impuestos a las naftas y al gasoil con destino al sistema previsional, un proyecto de ley referido a la renta normal potencial de la tierra, el reemplazo del impuesto a los capitales activos, el impuesto al patrimonio neto y el impuesto a las transacciones sobre bienes y servicios.

Hemos señalado que todas las modificaciones introducidas en este paquete impositivo no alcanzarían para satisfacer los requerimientos de la clase pasiva, ya que la pretensión es sólo aumentar en apenas 300 mil australes las magras jubilaciones y pensiones que recibe ese sector en la República Argentina.

Hoy volvemos a exponer esos argumentos como expresión de nuestra oposición al paquete impositivo que está en consideración y a las modificaciones que se introducen.

También habíamos señalado —y hoy lo reiteramos— que el aumento de las alícuotas del impuesto al valor agregado constituye otra manifestación regresiva de esta política tributaria que sigue castigando al consumo, es decir, a los que menos tienen, mientras no se sanciona una legislación para que paguen más aquellos que más tienen.

Por ello habíamos propiciado la aplicación del denominado impuesto a la renta normal potencial de la tierra y de los gravámenes al patrimonio neto y a las transacciones sobre bienes y servicios.

Por otra parte, nuestra oposición también se manifiesta respecto de los títulos VIII y IX del proyecto que viene con modificaciones del Senado. Independientemente de que el título VIII se refiere a una exención impositiva que en todo caso beneficia al sistema previsional, el procedimiento utilizado no es el correcto, no sólo porque a mi juicio viola el artículo 44 de la Constitución Nacional, que otorga a la Cámara de Diputados la iniciativa exclusiva sobre contribuciones y reclutamiento de tropas, sino porque esta modificación era inconveniente si el Poder Ejecutivo necesitaba una sanción inmediata para utilizarla como excusa de este aumento tan magro de 300.000 australes a los jubilados, que constituye una verdadera afrenta.

Lo mismo debo señalar con respecto al título IX, porque viola la Constitución Nacional, es un procedimiento equivoco y entorpece la propia sanción. También debo decir que la modificación en el sentido de admitir la clausura de los negocios por la sola decisión de un inspector de la DGI viola todas las disposiciones relativas al ejercicio de la legítima defensa por parte del comerciante. Esta norma está desti-

nada mucho más al comerciante minorista que al gran evasor a quien, con toda seguridad, no le van a aplicar sanciones de esta naturaleza, como tampoco ha aplicado el gobierno nacional la ley penal tributaria a los grandes evasores, que están perfectamente identificados. Una vez más —y lo señalábamos cuando nos referíamos al nuevo Código Procesal Penal para la Justicia Federal—, parecería que determinadas normas están destinadas al ladrón de gallinas y no a aquel que comete grandes delitos económicos en perjuicio de la Nación y de los intereses del país.

Reiteramos el concepto. La posibilidad de clausurar los negocios está destinada a los comerciantes minoristas y no a los grandes empresarios que, en definitiva, son los grandes evasores. Estas son las razones por las cuales el bloque de la Democracia Popular va a rechazar las enmiendas introducidas por el Honorable Senado.

**Sr. Presidente (Alasino).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Iribarne.** — Señor presidente: me quiero referir muy brevemente al último artículo del título VII, que establece la derogación de la ley 23.883. Mediante esta ley se creó un fondo para financiar actividades productivas del sector privado, con el producido de las privatizaciones. El artículo 33 del proyecto deroga así una ley sancionada el año pasado por el Congreso en su actual composición. Quiero expresar que la sanción del Senado reincide en una conducta inmediatista, no meditada, no planificada y a costa del ahorro de muchas generaciones de argentinos.

Insisto en el concepto de que el producido de estas privatizaciones no puede destinarse a gastos corrientes ni a pagar intereses de la deuda externa, ni siquiera a paliar emergencias, por más graves que éstas sean. Para entender esta cuestión podríamos hacer un paralelo con lo que está viviendo una familia que padece una situación grave y se ve obligada a vender las joyas de la abuela, tal como lo señalan algunos medios de comunicación. Pero en lugar de destinar el producido de esa venta a algo que le garantice un ingreso en el futuro, lo dilapida y consume en dos meses. Esto es lo que podría pasar si se acepta la enmienda del Honorable Senado, porque los fondos se destinarán a gastos corrientes, irán a "Rentas generales" y no tendrán ni siquiera parcialmente el destino que originariamente se había dispuesto y que se relacionaba con la inversión productiva, que es la única salida para resolver los problemas de generación de empleo y recaudación tributaria, y a partir de ahí iniciar el camino del crecimiento.

Estamos tratando un tema de fondo, porque así como en el pasado y mediante la Conquista del Desierto se modeló el país de comienzos de este siglo, con estas privatizaciones, que son parte de la reforma del Estado, estamos diseñando el país del futuro.

No estamos discutiendo un tema menor. No se trata de saber quiénes serán los propietarios de los bienes del Estado o cuál va a ser el marco regulatorio. Lo que realmente importa es determinar quiénes van a usufructuar estos fondos que recibirá el Estado a partir de la enajenación de su patrimonio.

Con las palabras pronunciadas dejo fundado mi rechazo a las enmiendas introducidas por el Honorable Senado.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: lamento molestar la atención de la Honorable Cámara a una hora tan avanzada, pero me comprometo a hacerlo por un breve lapso.

A estas horas comienzan a pasar cosas raras; por ejemplo, empiezan a labrarse ciertas partidas de defunción que son sospechosas, como la que ha extendido el señor diputado Gentile para las ideas que defiende.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: me advierten que el señor diputado Gentile se ha retirado del recinto, pero tengo derecho a decir...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Ahora que el señor diputado ha regresado podría decirle algo afectuoso porque realmente lo estimo y valoro... (Risas) ...cuando hace buenos discursos, que no es el caso de hoy.

El señor diputado pertenece a un partido político que ha sido el furgón de cola del oportunismo de todos los tiempos y que transitó desde el gorilismo exacerbado hasta el izquierdismo desmembrado con tal de decir que se suma a las mayorías populares.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Hay alguna historia que no puede negarse. Antes se refugiaban en la doctrina social de la Iglesia, pero ahora hasta

el pontífice romano habla del mercado y de economía de empresa. De modo que si el capitalismo está muerto, la democracia cristiana se remueve. (Risas.)

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Durañona y Vedia.** — No sé lo que les pasa a los señores diputados, pero por lo menos se han despertado. (Risas.)

Este debate nos presenta un problema: ¿cómo creo que vivimos todos. Resulta original, ¿verdad? desde partidos políticos que han reemplazado la Constitución, que han requerido su reforma, pues la consideran un instrumento anacrónico, que también la reemplazaron en los hechos, ahora viene a invocar ahora con tanto esmero para defender posiciones que indudablemente siguen intereses políticos.

Los argentinos estamos frente a un problema serio porque nos gusta el estado de derecho, pero no sé si nos podremos dar el lujo de mantenerlo que tenemos que preservarlo. Entiendo que tenemos que reconstruirlo, señor presidente, pero que lo hemos demolido sistemáticamente en años y décadas de prácticas viciosas.

Entonces, al haber demolido el estado de derecho —ruego a los señores diputados que contemplen que estamos en una polémica cordial— ahora tenemos que ver cuáles son las bases fundamentales para su reconstrucción. Evidentemente, una base fundamental es la estabilidad que tenemos que alcanzar por todos los medios y con todo nuestro esfuerzo, y necesito que me refiero al esfuerzo de todos, a eso que el cual contribuimos y al que se ha referido el señor diputado Alsogaray.

¡Cómo serán las vicisitudes que atravesamos después de 140 años de experiencia! En la Cámara se ha dado el lujo de debatir durante dos o tres horas cómo se hace para tratar un proyecto que viene en revisión del Honorable Senado! ¡Cómo será que estamos en los palos del asentamiento institucional que nos encontramos ante estas situaciones! Muchas veces esto ha motivado el reclamo de nuestro bloque para que no se legisle con apresuramiento, no se mezclen los temas y se respete la Constitución, pero todo esto no se oye en el ritmo vertiginoso de la necesidad, y todos caemos en el embudo de lo que hemos hecho con nuestra técnica legislativa.

Vicisitudes como éstas hubo también en otras épocas. El señor diputado Baglini ha expresado que los Constituyentes de 1853 ni siquiera se fiaron con una ley omnibus, y yo le respondo



la primera ley ómnibus que se conoció en República Argentina la dictaron los Constituyentes de 1853. Luego de que terminaron de organizar la Constitución ellos dictaron las primeras leyes de la República que eran necesarias y que pretendían llevar recursos al exhaustivo gobierno de Paraná, que afrontaba toda clase de contrariedades.

El Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación de 1853 fue la primera ley ómnibus que abarcó toda clase de materias. Tanto así que los Constituyentes hicieron algo que se animaron a hacer ni siquiera los estatistas de nuestro tiempo, pues sostuvieron que la Nación debía percibir el canon minero para poder llevar alguna contribución a ese Estado extinto. Quiere decir que por entonces también hicieron angustias y contratiempos como los que ahora tenemos nosotros.

También fue una ley ómnibus la de colonización, inmigración y tierras porque tenía el común denominador de procurar cómo se podía poner en marcha el aparato productivo agropecuario en nuestro país. En ese sentido, aunque parezca mentira, esta norma también tiene algún común denominador en sus temas: la búsqueda de la estabilidad, relacionando necesidades que tenemos ahora como las tuvo aquel primer gobierno de la Constitución que echó mano hasta del último recurso para tratar de tener la institución gubernativa. Hoy tenemos que considerar esto, pero además la estabilidad y el progreso para que suceda lo que dice el señor diputado Baglini: que haya confianza. Donde hay estado de derecho hay inversión, progreso y trabajo. Me parece haber leído esto, me trae una reminiscencia del reclamo permanente de mi partido y de nuestro bloque durante el gobierno que se inició en 1983.

Así como hablamos de vicisitudes y de antecedentes históricos que muchas veces reclaman soluciones de urgencia y de necesidad, también considero que no podemos decir que el título IX con cuatro o cinco disposiciones respecto de la Dirección General Impositiva es una novedad en el país, cuando se ha echado mano a recursos de cualquier índole para modificar por decreto lo que disponen las leyes, implantar las voluntades y el capricho político por encima de la Constitución.

Esto no es novedoso en la República Argentina. ¿Quién inventó el impuesto al cheque? ¿Quién inventó ese tributo que lastima todos los negocios al comercio más que la presunta sanción que puede caer sobre un comerciante inescrupuloso? ¿Quién inventó el ahorro forzoso que

atrapaba un ciclo concluido de las industrias, los comercios y las empresas que habían cumplido con todas sus obligaciones, y finalmente cuando podían disponer de una menguada utilidad les caía una nueva obligación persecutoria que terminó en la forma penosa que todos conocemos? ¿Quién inventó los precios máximos que obligaban a vender sin atender los costos? ¿Quién provocó la huida al exterior del inversor y de los capitales que no se animan a venir a la Argentina por la voracidad fiscal que espera con las fauces abiertas, producto de la falta de estabilidad y de la inconsciencia de un Estado gastador?

Las violaciones al estado de derecho no empiezan ahora sino cuando ante el otorgamiento de refinanciaciones o adjudicaciones se obligaba a firmar un compromiso de desistirse de los juicios contra el Estado —por ejemplo, en 1984 o en 1985— o cuando las direcciones de los ministerios dictaban resoluciones sancionatorias, contrariando lo dispuesto en el Código Penal. Todo esto lo hemos vivido en la Argentina. No podemos decir que el estado de derecho se va a quebrar ahora por las facultades que se van a otorgar a un agente inspector de la DGI.

A mí no me gusta este título. No me gusta todo aquello que no sea la expresión de ese estado de derecho que hemos perdido. Debemos reconocer que no podemos restaurar ahora la discusión sobre sanciones que no contaron con mayoría en esta Cámara, pero quería puntualizar estas situaciones porque todavía habrá que trabajar mucho en la Argentina para lograr la renovación que todos deseamos y para alcanzar ese gran "partido" que se llama la República Argentina, que tenemos que poner como ejemplo en el mundo e incorporar al concierto de las naciones que están cambiando a ritmo vertiginoso, porque se han desprendido de las prácticas empobrecedoras del dirigismo y del estatismo, que han anidado por tanto tiempo entre nosotros.

Me permitiré leer un diálogo muy cordial que mantuve en esta Cámara en febrero de 1988 con el señor diputado Baglini, por quien siento una gran admiración por su capacidad, su talento y la brillantez con que siempre eleva el nivel de los debates de esta Honorable Cámara. Me place todo aquello que contribuya a prestigiar la institución de la que formo parte.

En aquel entonces discutíamos el proyecto de reconversión vitivinícola. El Diario de Sesiones expresa: "Sr. Durañona y Vedía. — Señor presidente: la segunda parte del artículo 16 choca con disposiciones legales ordinarias en materia

civil que no deseo explicitar para no fatigar a la Honorable Cámara; pero basta señalar que llega a permitir la paralización de un establecimiento hasta que una persona responsable acepte el cargo de depositario de los productos intervenidos. Esto, que está dicho con total imprecisión, propongo que sea aclarado reemplazando las palabras, se paralizará el movimiento del establecimiento, por 'podrá pedir judicialmente la designación de un depositario con carácter preventivo'."

A continuación se dice: "Sr. Baglini. — Señor presidente: aquí se ha tratado de contemplar algo que en la actualidad ocurre todos los días. En general, cuando un inspector llega a una bodega y encuentra vino fraudulento, es decir con una de las más graves infracciones —que la ley sanciona hasta con prisión—, debe tomar muestra y dejar los productos averiados en depósito en la bodega; pero ocurre que no aparece ningún responsable y ninguno de los empleados se quiere hacer cargo. Si el inspector se va dos minutos porque judicialmente tiene que pedir la orden, a la vuelta no hay más producto averiado en la bodega. En una bodega en movimiento no hay otra forma de controlar infracciones. Además, esto ha sido sugerido por el propio Instituto, que cuenta con una gran experiencia en la materia."

De ninguna manera desco expresar que hubo contradicción entre estas palabras y lo que hoy ha dicho el señor diputado Baglini. Quiero tener la absoluta honestidad de decir que este caso no es igual al que tratamos y supone otro tipo de infracciones y de daños que se puedan causar. Pero, además de pedir disculpas al señor diputado porque en Mendoza tienen en muy caro al Instituto Nacional de Vitivinicultura y lo pueden disculpar cosas que a lo mejor no le disculpan a la DGI, quiero decir que debemos tener en cuenta cada caso y cada situación. Allí se quiere prever un factor que puede ser de grave daño para la producción; aquí también se quiere prever esa deshonestidad del comerciante, esa evasión contra la que venimos reclamando hace años y que el Estado no ha podido organizarse para detectar y sancionar.

Aquí venimos a reclamar contra estas personas inescrupulosas que destruyen la competitividad que debe existir en el comercio y que están provocando que otros a su vez hagan lo mismo si quieren colocarse en igualdad de situación.

Creo que tenemos que dejarnos un poco de hacer historias. Tenemos que reunirnos en lo posible detrás de esta recuperación nacional

que supongo que radicales, justicialistas y todos los hombres de esta Cámara comparten con corazón de argentinos.

Con la misma lealtad parlamentaria con la que he dicho que no puede reabrirse la discusión sobre asuntos concluidos al haberse aprobado por la Cámara, también quiero manifestar los dos temas que han motivado que nuestro bloque hiciera oposición a estas reformas. Senado —me refiero al tema de los combates y a la clausura— han encontrado respaldo en los proyectos que se han anunciado, que bien no corresponden a una técnica parlamentaria correcta, no puedo sino señalar que me da la satisfacción de ver que han recogido esas observaciones. Ello motiva, salvo palabras, que el señor diputado Clérico pronunciara con respecto al sistema previsional, el voto favorable para contribuir a la sanción de este proyecto de ley.

Sr. Baglini. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Alasino). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Señor presidente: lamento traer la atención de esta Cámara, por lo que será muy breve.

Si bien la referencia que ha hecho el señor diputado Durañona y Vedia en parte ha sido aclarificada, llevaría a la idea de que yo participé distinto cuando se trata del Instituto Nacional de Vitivinicultura que cuando se trata de la DGI. Esta situación es comparable a la del señor diputado Durañona y Vedia, porque cuando funcionarios que están en la Subsecretaría de Hacienda y en la DGI son radicales, en muchos casos se los critica, pero cuando se trata de correligionarios Cossio y Tacchi todo está bien, incluso, usar la misma tasa de ajuste del alcohol obligatorio para el bano de consolidación de deudas.

Nosotros no estamos en esa alternativa que discutíamos en oportunidad de la sanción de la ley de regulación vitivinícola número 23.550, era una situación producida a raíz de la existencia de una adulteración vinícola en una bodega, con grave peligro para la salud. En aquella ocasión intervino una inspección que no había quién quisiera hacerse responsable de la bodega y firmar el acta correspondiente, donde se recogían muestras de vino adulterado. Entonces, mientras el funcionario se dirigía a solicitar la intervención a la autoridad judicial y policial pertinente, desaparecía el vino adulterado. En ese caso el riesgo para la salud de las personas justificaba un procedimiento excepcional, que no se adopta como sanción

proceso sino como recaudo precaucional ante la posibilidad de que exista daño a la salud. Recuerdo a la Cámara que he leído una parte de un artículo en el que justamente se hace referencia a la ley de vinos del año 1957, una ley cuyas disposiciones fue declarada inconstitucional porque autorizaba la aplicación de sanciones directamente por los inspectores, sin juicio previo. Si bien debemos reconocer que han habido algunas medidas que se han propugnado aquí que bordeaban el límite de la posibilidad de constituir a la DGI casi en una Gestapo —como la calificara el señor diputado Matzkin—, de ninguna manera hubiéramos justificado, como lo ha hecho el señor diputado Durañona y Vedia, que una medida que aquí alcanza ribetes de neta inconstitucionalidad se transforme en algo necesario por la situación fiscal.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: simplemente deseo referirme al aspecto señalado por el señor diputado Baglini acerca de la presunta contradicción entre la ley que sancionamos y la Constitución. Me parece que se ha tomado la costumbre de decir de antemano desde el Poder Legislativo que una ley que se sanciona es o no inconstitucional.

Creo que esta cuestión está reservada a los jueces. El propio señor diputado Baglini ilustró sobre un fallo de la Corte en su actual composición, y son muchas las veces que ha intervenido la justicia para poner límites al poder administrador. Esto siempre ha ocurrido y, además, la imaginación jurídica ha generado los recursos necesarios para alcanzar los estrados judiciales.

Confieso que tengo temores por la constitucionalidad y también que tengo inseguridades respecto de la norma que estamos dictando. Pero sí tengo la convicción profunda sobre el horror que me producen la práctica de la emisión monetaria, el estatismo y el dirigismo, que han sido realmente perjudiciales y empobrecedores para el pueblo argentino.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Gentile.** — Señor presidente: el señor diputado preopinante señaló algunos aspectos de mi partido que debo aceptar sinceramente porque no puedo negar que en él pudieron haber existido dirigentes que hayan padecido de gorilismo y de extremismo de izquierda. Pero yo le puedo señalar también que en su partido

estos mismos defectos se dieron y con más gravedad que en el mío, porque han sido más los dirigentes y han ocupado mayor tiempo, tanto en el gorilismo como en el extremismo de derecha y en la participación en los gobiernos autoritarios.

Lo que sí debo aceptarle, y ésta es una debilidad de un partido democrático, es aquello de las mayorías populares. Pero debo señalar que a lo mejor este defecto también puede darse en este partido del señor diputado Durañona y Vedia. Hemos escuchado su nombre ligado a una lista de un partido mayoritario en la provincia de Buenos Aires, como también lo hemos reconocido como candidato para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Creo que, a pesar de los defectos que pueda tener la democracia cristiana, lo cierto es que nosotros vamos a votar de acuerdo con nuestros principios y no según nuestras conveniencias. *(Aplausos.)*

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

**Sra. Casari de Alarcia.** — Sólo quiero decir que el señor diputado Gentile también estuvo "colgado" de nuestras listas.

**Sr. Gentile.** — ¡Y con mucho honor, señora diputada!

**Sra. Casari de Alarcia.** — Lástima que ahora no estén de acuerdo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: quisiera hacer dos aclaraciones. Una se refiere a que, aunque parezca mentira, el señor diputado Gentile nos habla de adscripciones a otras listas. Eso a lo que se refiere únicamente puede provenir de un deseo muy especial del señor presidente de esta Cámara para que lo acompañe en su actividad política, pero no tiene otra connotación. Además, es lamentable que un hombre de derecho como el señor diputado Gentile confunda un cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia con un destino partidario.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Clérici.** — Señor presidente: quería hacer dos breves comentarios sin otro tipo de connotación política, porque soy simplemente un liberal y no otra cosa.

En primer lugar, cuando comenzamos el análisis de este proyecto de ley éramos conscientes de que tenía relación con el sistema previsional argentino. No es sencillo adoptar una decisión entre votar los siete títulos que aprobó el Honorable Senado o insistir en la sanción original de esta Cámara.

Por ello voy a efectuar un comentario con respecto al título V de este proyecto de ley. En nuestra sanción sabiamente se derogaban las normas que contenían disposiciones de privilegio en las leyes jubilatorias y de retiros que no sean las de la ley 18.037. En cambio, en la sanción del Senado se derogan todas las leyes y sólo queda subsistente la ley 18.037, con lo cual, si al 31 de diciembre de este año no contamos con disposiciones legales que sustituyan a esas leyes, no tendremos otra disposición jubilatoria que la mencionada para el conjunto de los argentinos. No se contemplaría ninguna situación especial como puede ocurrir en el caso de quienes pilotean aviones o de los mineros, militares o policías. O sea, disposiciones especiales que sabemos perfectamente que no constituyen regímenes de privilegio.

Me parece que se trata de un elemento importante para cuando esta Cámara se defina en cuanto a si acepta la sanción del Senado o insiste en su pronunciamiento original.

El segundo comentario que formularé es personal y tiene relación con el título IX del proyecto de ley. Ya ha ocurrido, y por ello no estoy dispuesto a votar una sola disposición más que tienda a quebrar el estado de derecho en la Argentina o signifique un nuevo avance del Estado sobre los particulares. Ya han transecurrido más de dos años del inicio de este gobierno y observamos que existen situaciones que, si bien pudieron haber sido contempladas en 1989 y en 1990, hoy no se justifican.

Por lo tanto, adelanto que cuando corresponda votar el título IX de este proyecto de ley lo haré en sentido negativo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: solicito la inserción en el Diario de Sesiones de una resolución de la Comisión Nacional de Valores. Esto surge a raíz de un amigable intercambio de opiniones que hoy tuvo con el señor diputado Natale. Yo cité una resolución de la Comisión Nacional de Valores del 18 de junio de 1991, dirigida a la comisión liquidadora de ENTEL, donde se alertaba sobre las altísimas comisiones que cobrarían el Banco Roberts y otros bancos asociados por un mínimo plazo de cinco días, lo cual configuraba, a criterio de ese organismo, una grave anomalía. Esa información fue puesta en duda, y por ello solicito la inserción de la resolución mencionada.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Corresponde que la Honorable Cámara pase a pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Honorable

Senado conforme al procedimiento oportunamente acordado.

Se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en los títulos II a VII.

— Resulta afirmativa de 180 votos; votaron 171 señores diputados sobre 171 presentes.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar si se acepta la incorporación del título VIII.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votaron 172 señores diputados sobre 172 presentes.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar si se acepta la incorporación del título IX introducida por el Honorable Senado.

— Resulta negativa de 88 votos; votaron 171 señores diputados sobre 171 presentes. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: lo que solicito es que nos pongamos de acuerdo en lo que significa exactamente esta votación. (Risas.)

Luego de las sonrisas voy a explicar qué hago la pregunta. Lo que sostuvieron mis señores diputados en relación con este título fue que constituye una adición que no corresponde con las prescripciones constitucionales. Inclusive hubo propuestas de que se hiciera una interpretación similar a la aplicada cuando se votó el proyecto de ley de obligaciones negociables. Si ésta fuera la interpretación, la ley quedaría sancionada y no se tendría por escrito este título que ha venido del Senado. Si ésa no fuera la interpretación, esto tendría que volver al Senado por haberse rechazado una de sus enmiendas. La Cámara va a votar para dilucidar cuál es la interpretación aplicada.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: no tengo inconveniente en que la interpretación sea la primera, es decir, que desaparezca el título IX y así el proyecto queda sancionado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Gentile.** — Señor presidente: entiendo correctamente que la sanción, sin el título IX, se comunique al Poder Ejecutivo y no vuelva el proyecto al Senado. En su momento planteé una interpretación y no la reiteré porque entendí que había quedado implícita en la decisión de desdoblamiento de la votación.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: la larga discusión de dos horas agotó la cuestión. La Cámara tomó una decisión. La decisión que adoptó votar fraccionadamente las enmiendas introducidas por el Senado. ¿Qué significa votar fraccionadamente? Que aquello que fuere aprobado por la Cámara de Diputados se transforma inmediatamente en ley y lo que no fuera aprobado debe darse por desechado. Esta es la única interpretación posible. Deben comunicarse al Poder Ejecutivo los ocho títulos sancionados por la Honorable Cámara para que éste los promulgue como ley —o los veto si así lo considerase necesario—, y el resto va al archivo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

**Sra. Guzmán.** — Señor presidente: este título forma parte de la sanción de la Honorable Cámara. Nosotros hemos remitido el proyecto al Senado sin este título. Por lo tanto, al no formar parte de la sanción original, con la votación del título anterior ha quedado sancionada la ley. Este es el mismo procedimiento que ya aplicáramos al tratar el proyecto de ley de obligaciones negociables, cuando el Senado también agregó un título que no formaba parte de nuestra sanción.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Manzano.** — Señor presidente: en base al planteo de los señores diputados Matzkin y Barilini, sostenido también por el señor diputado Natale, esa interpretación debería ser votada o afirmada.

Adelanto que vamos a proponer que se dé entrada a un proyecto por el que se modifican las facultades conferidas para clausurar negocios y el régimen de recaudación del impuesto sobre los combustibles, que rectifica errores o zonas jurídicas que no han sido precisadas en la norma que elevaremos al Poder Ejecutivo. Corresponde efectuar dos votaciones; una para sancionar definitivamente el proyecto en consideración y otra —que requiere las tres cuartas partes de los votos que se emitan— para apartarnos del reglamento y dar entrada a un nuevo proyecto que necesitará del apoyo de las tres cuartas partes de los votos que se emitan para poder ser considerado sobre tablas, el que sería aprobado con nuestra propia mayoría y el apoyo de los bloques que estén dispuestos a acompañarnos.

Esta última iniciativa reglamentará dos institutos: por un lado establecerá en forma ate-

nuada el mecanismo de acción de la autoridad de aplicación, que ya no será de clausura inmediata sino mediante el procedimiento de actas y con la intervención de más de un funcionario. Por otra parte, se modificará en el régimen del impuesto sobre los combustibles el hueco jurídico que ha quedado con respecto al sujeto pasivo de aplicación de este tributo. Este hueco estaría produciendo discriminaciones y de no ser subsanado vulneraría el principio de equidad de la norma. Estos son los dos capítulos que contendría la norma que a manera de fe de erratas vamos a proponer y que es conocida por todos los bloques que integran el cuerpo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: si este prece-dente no va acompañado de la respectiva aclaración puede resultar nocivo para la actividad del Congreso.

Es importante resaltar que no existe una relación de subordinación entre una Cámara y otra; por lo tanto no es factible la revisión de una ilicitud de la otra Cámara. Pero el Senado ha introducido en forma ilegal, inconstitucional y subrepticamente todo un capítulo que en realidad debería conformar una nueva norma que no ha tenido iniciativa en esta Cámara. Por lo tanto, este procedimiento debe ser corregido y para ello asisten a esta Cámara el artículo 71 de la Constitución Nacional y el sentido común.

Esta noche debemos dar por concluido el procedimiento sancionatorio de la norma pero también debemos corregir la ilicitud cometida, porque de lo contrario, así como se han introducido dos capítulos, también podrían haberse agregado temas totalmente ajenos al proyecto original como, por ejemplo, el Código de Minería, el Código Procesal Penal o el Código Civil.

En caso de que no corriamos esta ilicitud el proyecto debería volver al Honorable Senado, y si esa Cámara con las dos terceras partes de los votos que se emitan insiste con su sanción, nos obligaría a tener que reunir también las dos terceras partes de los votos a emitirse para corregir lo que aparentemente es una inconstitucionalidad.

A los efectos de la interpretación debe quedar constancia de que este procedimiento se ha utilizado excepcionalmente para corregir un hecho viciado de nulidad cometido por el Honorable Senado, consistente en la introducción de todo un capítulo que, en realidad, debería constituir una nueva norma que tendría que recorrer un nuevo circuito de procedimiento sancionatorio.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: quiero dejar a salvo mi opinión en esta materia. Hace muy poco tiempo, con motivo de la sanción de la ley de ministerios, el Honorable Senado nos envió un proyecto y nosotros le remitimos algo que no tenía absolutamente nada que ver. Así que me parece que debemos tener un poco de cuidado en hablar de ilicitud y de otras cosas.

Esta Cámara debatió este tema durante horas y ya lo resolvió. Algunos señores diputados plantearon argumentos muy interesantes y dijeron que no había que tomar razón de este título porque había sido introducido subrepticamente y que por lo tanto la Cámara no lo debía considerar al hacer el tratamiento.

Pero triunfó la tesis de que debíamos considerarlo, debatirlo, y así lo hicimos y hasta lo votamos. ¿Qué habría pasado si la votación hubiera sido distinta? De haber sido así, esto ya sería ley. Quiere decir que aquí hemos rechazado esta adición o agregado del Honorable Senado y el rechazo abre su derecho a la insistencia.

Entiendo que sería un precedente realmente dañoso si por voluntad de una sola Cámara torciéramos este procedimiento. Hay un derecho del otro cuerpo, que conforma la otra rama del Poder Legislativo. De modo que si hemos hablado de respetar principios republicanos y del estado de derecho, no hay otra solución que remitir nuevamente al Senado este proyecto.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Dumón.** — Señor presidente: desde el punto de vista formal tenemos la ley consagrada. No es válido lo que dice el señor diputado Durañona y Vedia por la elemental razón de que nosotros decidimos votar por separado. Si hubiéramos decidido votar en conjunto, el razonamiento del señor diputado tendría asidero; pero —repito— hemos resuelto votar separadamente, entre otras cosas por los razonamientos que por unanimidad —a excepción del señor diputado Durañona y Vedia— se vertieron aquí sobre el agregado que hizo el Honorable Senado.

De manera tal que desde el punto de vista formal esto es ley. Pero además, desde el punto de vista práctico, los diputados nos hemos quedado de una mentira —a nuestro juicio lo es— sostenida por los miembros del Poder Ejecutivo al decir que no les podían pagar a los jubilados porque no contaban con los recursos suficientes. No otros no creemos en esto, pero lo cierto es que ahora tenemos la ley para obtener esos

recursos, y sería muy malo que los jubilados vieran que esperar por el hecho de que la iniciativa sea remitida nuevamente al Honorable Senado.

De manera que corresponde hacer la comunicación de la sanción al Poder Ejecutivo. También es atendible que el bloque del oficialismo tenga pretensiones sobre esto que hoy ha rechazado, y lo que corresponde es que presenten un proyecto de ley al respecto y le otorguemos preferencia, con despacho de comisión por la gravedad de los asuntos de que se trata para tratarlo en la próxima sesión.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Aramouni.** — Señor presidente: en virtud de que ya expuse los argumentos respecto —que coinciden con los del señor diputado Dumón y no así con los vertidos por el señor diputado Durañona y Vedia—, entiendo que la Presidencia debe poner a votación el artículo en esta forma.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Manzano.** — Señor presidente: en principio, la última moción del bloque radical nos satisface, pero voy a intentar una nueva versión de solución. En el proyecto nuevo intentamos corregir dos capítulos absolutamente distintos: uno sobre el régimen de combustibles líquidos y gas natural y otro sobre el mecanismo de clausura.

El régimen de combustibles líquidos y gas natural corregido que se propone subsana la aparente discriminación al interior del sector entre empresas nacionales y extranjeras. El tema es controvertido y se refiere a la puntualidad o no en manos de la autoridad administrativa. Si se nos permitiera la entrada de un proyecto de ley que hoy hemos presentado y se logra la mayoría necesaria para ponerlo en consideración, nosotros nos comprometemos a solicitar la vuelta a comisión, con preferencia para la próxima sesión —con dictamen— de este tema contenido en el capítulo controvertido, sancionando esta noche lo referido al capítulo no controvertido. De este modo, lo que se puede solucionar hoy lo subsanamos esta noche, y lo que debe ser objeto de revisión por la comisión lo tratamos la semana próxima. Esto implica un conjunto de votaciones, pero así la Cámara perfeccionará instrumentos tributarios complejos que se han querido crear con la mayor equidad y transparencia posibles.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia solicita que el cuerpo se expida respecto de si el



yecto debe quedar definitivamente sancionado o volver al Honorable Senado.

Se va a votar si el proyecto debe quedar definitivamente sancionado.

—Resultado afirmativa.

—El artículo 38 del proyecto sancionado por el Senado, ahora 36, es de forma.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley <sup>1</sup>.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará al Honorable Senado.

Se va a votar si se efectúan en el Diario de sesiones las inserciones solicitadas por los señores diputados Baglini y Berhongaray.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se harán las inserciones solicitadas <sup>2</sup>.

27

# MOCION DE ORDEN

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Manzano.** — Señor presidente: hoy hemos presentado un proyecto de ley en Mesa de Encomienda respecto del cual para formular proposiciones apartándonos de las prescripciones del artículo 100 se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan, y las dos terceras partes para ser tratado sobre tablas. Esa iniciativa se refiere a dos cuestiones absolutamente distintas.

La primera de ellas introduce una corrección al régimen de aplicación del impuesto a los combustibles que elimina la discriminación impositiva que quedó en la sanción del Senado que favorece a determinadas empresas del sector petrolero en detrimento de otras de carácter nacional y potencia nuevas empresas. Es decir que el proyecto amplía el universo de los sujetos pasivos del impuesto. El texto que acabamos de discutir en ley reduce ese universo, excluyendo del mercado empresas que ya actúan en él impidiendo la existencia de nuevos actores, lo que se contraponen con la política de desregulación y apertura. Esta iniciativa intentaríamos llevarla hoy.

El otro tema se refiere al régimen de clausura, eliminado de la ley recién sancionada; se remitiría a comisión, con una preferencia para ser tratado con despacho en la próxima sesión. De este modo lo que estamos en condiciones de solucionar hoy lo subsanamos ahora, y lo que no podemos arreglar en este momento quedaría con una preferencia para la próxima sesión. Esta es nuestra propuesta; se puede estar a favor o en contra, pero lo cierto es que está claramente expresada.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: no he leído aún el proyecto que promueve el señor diputado Manzano, pero creo que entre las opciones que habíamos clasificado como Guatemala y guatepeor se ubica en Guatemala. Sin embargo, acabamos de sancionar una norma que sólo deja el guatepeor. Creo que lo razonable es tomarnos un lapso de una semana para adoptar una medida que realmente sea buena.

No sólo las empresas refinadoras y comercializadoras deben ser sujetos pasivos del impuesto; debemos ir hacia un esquema más abierto, de modo tal que las políticas de desregulación y de competencia se vean favorecidas.

No me animo a avanzar más allá porque es una cuestión técnica en la que es más competente la Comisión de Minería que la de Presupuesto y Hacienda.

En este tema de la desregulación petrolera debemos tener muy en cuenta el aspecto de los sujetos pasivos. Hay que corregir el texto que sancionó el Senado ya que en él sólo se tienen en cuenta unas pocas refinadoras. No debemos detenernos en Guatemala; podemos dejar abierta esta discusión para dentro de una semana a fin de mejorar la iniciativa y tener más sujetos pasivos.

De lo contrario, sería lo mismo que tratar de corregir sobre tablas el tema de la clausura luego de la discusión que tuvimos. Debemos tratar de perfeccionar un procedimiento. El señor diputado Dumón propuso que el asunto volviera a comisión, asumiendo el compromiso de trabajar aceleradamente sobre algunos artículos. Es lo único que se puede sugerir en forma consciente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

**Sr. Zavaley.** — Señor presidente: la propuesta del señor diputado Manzano conlleva la intención de volver al espíritu de la sanción original de la Cámara de Diputados.

<sup>1</sup> Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2004).

<sup>2</sup> Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Página 2100.).